



mientrastanto.e

Número 224 de junio de 2023

Notas del mes

Réquiem

Albert Recio Andreu

¿El nuevo Consenso de Washington?

Asier Arias

Vivienda, modelo productivo y empleo

Albert Recio Andreu

Educación y acoso: ¿coeducamos?

Joan M.^a Girona

Ensayo

Conversación con Fabio Ciaramelli

J.-R. Capella, A. Giménez Merino y J. L. Gordillo

La unidad del frente amplio

Antonio Antón

El extremista discreto

Epitafio

El Lobo Feroz

De otras fuentes

El decrecimiento a debate en el corazón de la bestia

Juan Bordera

El falso dilema de crecer o no crecer

Ana Campos

Los países ricos han despilfarrado sus presupuestos de carbono

Andrea Thompson

Alternativas a la seguridad y la defensa de los estados

Pere Ortega

Los AK-47 se visten de Dior

Aníbal Malvar

El curso de la guerra

Rafael Poch de Feliu

La guerra que viene. Es hora de alzar la voz

John Pilger

Contra el feminismo de qué hay de lo mío

Nuria Alabao

Políticas para pobres: lo que no funciona se perpetúa

Judit Font Redolad

Trabajadoras de hogar y cuidados: ¿hay algún límite a la indignidad?

Isabel Otxoa

Estrategias feministas contra el paternalismo penal

Clara Serra

Unidad para poner fin a la Nakba

Jeremy Corbyn

La Biblioteca de Babel

¡Siempre adelante!

Feminismos. Retos y teorías

Documentos

Manifiesto: vetar o censurar no son actitudes de izquierdas

El Viejo Topo

Cambio climático o el extractivismo, dos causas de la migración forzada en el mundo

Ecologistas en Acción

...Y la lírica

Ana Martins Marques

Albert Recio Andreu

Réquiem

I

El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo es devastador para la izquierda. La socioliberal del PSOE y la alternativa. Sin paliativos. Más dramático porque tienen lugar en una coyuntura de elevado empleo. Con un gobierno que ha rehecho una parte de los destrozos sociales provocados por las políticas de ajuste que realizó el PP: reducción del empleo temporal, revalorización de las pensiones, aumento del salario mínimo, ertes que evitaron la destrucción masiva de empleos, etc. Es cierto que no es un panorama de color de rosa, que la inflación sigue deteriorando los salarios reales y la vivienda constituye una cuestión de gran envergadura. Pero cuando se comparan las políticas que realizó el PP con las de este último mandato, el impacto social es totalmente favorable a la gestión del Gobierno de coalición. La economía no parece ser la causa central que explica la debacle de la izquierda y el ascenso del bipartito reaccionario.

Tampoco es suficiente para explicar el resultado el impresentable enfrentamiento entre Podemos y Sumar. Seguro que ha tenido un impacto, pero este solo explicaría los problemas del espacio de la izquierda alternativa, no el descenso del PSOE. Puede comprobarse, además, que gran parte del ruido entre ambas formaciones casi desapareció cuando empezó la campaña electoral. Y en muchas partes Izquierda Unida y Podemos fueron de la mano y contaron con el apoyo de Yolanda Díaz. Fue una pacificación demasiado tardía, cuando ya se habían generado daños, pero es sólo una parte de la cuestión.

Lo que ha triunfado es una derecha trumpista en sus dos variantes, la «moderna» y la «carpetovetónica». Una derecha que cuenta en su haber un balance impresentable de gestión. Y que tampoco se ha preocupado mucho por presentar programas de acción mínimamente elaborados. Bastó una política agresiva de descalificación, de generar debates estentóreos, de agrandar las críticas al gobierno para alcanzar un éxito que, en su dimensión, posiblemente ni ellos esperaban.

II

Muchos de los análisis que hacemos sobre el comportamiento electoral parten de lo que considero un supuesto erróneo (al menos parcialmente erróneo): el del elector racional. La persona que es capaz de conocer bien sus necesidades e intereses, que sabe lo que proponen los partidos, que los valora basándose en el conocimiento que tienen de su actuación cuando han estado en el poder y tiene algunas ideas de lo que proponen para el futuro. La decisión del voto se tomaría tras efectuar todo este proceso de evaluación. Esta hipótesis da mucha importancia a las cuestiones materiales, a la evaluación de la calidad de las políticas. Y creo que acaba resultando inadecuada para entender lo que realmente ha pasado.

De entrada tiene bastantes agujeros. El debate intelectual sobre necesidades humanas ha puesto de manifiesto su complejidad. La psicología cognitiva ha descubierto que los procesos de toma de decisiones pocas veces se ajustan al esquema anterior. Tomamos muchas decisiones sobre

la base de unos pocos datos, lo que acorta los procesos —y es muy útil para la vida cotidiana— pero también puede generar muchos errores. En nuestras acciones tiene importancia el contexto, el marco de relaciones en el que operamos, las ideologías que en cierta medida nos fidelizan a un proyecto, nuestras aspiraciones no necesariamente sólidas, la presión del entorno. Vivimos siempre en un mundo de información imperfecta y demasiada información nos aturde, como podemos comprobar en el mundo de las redes. Y, además, para una gran mayoría de la población la política es un tema menor, una interferencia en sus vidas privadas y, posiblemente, dedica muchos menos esfuerzos a analizar las opciones políticas que a evaluar los bienes y servicios que compran.

Tengo la impresión de que la izquierda alternativa sabe poco de qué cosas son cruciales en las decisiones de los votantes. El análisis cuantitativo de los resultados electorales, su cruce con datos estadísticos, su comparación en el tiempo aporta una información relevante. Pero no es completamente informativa, puesto que los cambios en el voto son procesos de «salida», poco informativos sobre las razones que ha provocado la misma. Sabemos, eso sí, que los pobres votan mucho menos que los ricos y que determinadas opciones políticas tienen alguna relación con las desigualdades. Pero saber que el alejamiento de la política es mayor cuanto más pobre es la gente no es suficiente para entender este aislamiento.

Sugiero dos hipótesis de trabajo complementarias. La primera es que su alejamiento del poder real les impide entender adecuadamente el papel que juega la política y cómo está podría ayudar a mejorar su situación. La segunda es que, con la política normal, nunca se producen transformaciones suficientemente importantes en su condición como para ver en ello un espacio central de actuación. Sólo en momentos puntuales, como en 2015, se producen coyunturas movilizadoras, pero como después no se traducen en cambios sustantivos renace la desmovilización. Sería bueno, en cualquier caso, poder contar con buenas investigaciones sobre qué es lo que influye en las decisiones electorales. Sospecho que los grandes aparatos de la derecha pueden tenerlos y saben lanzar las campañas que tocan la fibra a este grupo de votantes volátiles que son los que en definitiva deciden las elecciones.

Por mi experiencia a ojímetro creo que a un sector de gente le influyen más cuestiones triviales o secundarias, pero que les afectan de modo directo, que no una visión general de las políticas. Mi percepción está basada en las interpelaciones que recibo —o que me cuenta mi entorno—, sobre todo en el barrio y el mundo vecinal. Sin perder de vista el papel que tienen los distintos medios de comunicación —incluidas las campañas en redes— a la hora de configurar las percepciones de la gente, importa focalizar determinados temas, en definitiva construir hegemonía. Por ejemplo, mi distrito barcelonés es el que experimenta una tasa menor (sustancialmente menor) de hechos delictivos y, en cambio, es donde la cuestión securitaria ocupa mayor papel como problema. Como me hizo ver un periodista del barrio, esto seguramente tiene que ver con que es la zona de mayor predominio de audiencia de Tele 5 y Antena 3 y donde buena parte del vecindario recibe a diario una cuota de alarmismo prefabricado.

La derecha lleva muchos años construyendo un relato de miedos, irracionalidad y sensiblería. Se apoya en el impacto que a una parte de la población le genera la presencia creciente de vecindario extranjero, la crisis del patriarcado, la crisis ecológica y los intentos de regulación, o sea la ruptura de un modelo vital sobre el que habían conformado sus expectativas. Y le favorece también la crisis de sociabilidad generada por los cambios en la vida laboral y en el consumo. El

bombardeo mediático y las batallas en las redes tienden a provocar miedo, irritación, bloqueo de empatía, debilitamiento de los nexos sociales y sobre ello la derecha tiene un terreno fértil en el que abonar su proyecto hegemónico, neoliberal, autoritario. Es difícil desentrañar cuáles son los elementos concretos que han intervenido en esta coyuntura concreta. Valdría la pena tratar de averiguarlo. Pero, en todo caso, se han desarrollado sobre una tendencia de largo plazo, transnacional, de derechización y quiebra de la cultura democrática.

III

El destrozo electoral ya está hecho. Puede ser mayor el 23 de julio si se repite un resultado parecido. No sabemos las razones que han impulsado a Pedro Sánchez para convocarlas, pero podemos imaginar algunas plausibles. En primer lugar, evitar que la prolongación de la situación hasta fin de año provoque un mayor deterioro de su posición, tanto por el acoso de una derecha crecida como por la posible crisis interna de su propio partido. Cuando las cosas van mal, se agudizan los conflictos y no es difícil colegir que el ala derecha del partido (tan derrotada como las otras) tratará de achacar la derrota a las excesivas concesiones realizadas a los socios de Gobierno y a sus apoyos parlamentarios. En segundo lugar, es posible que en la dirección del PSOE piense que el fracaso de mayo va a generar una catarsis que movilizará a su electorado y se pueda ganar así la «eliminadora de vuelta». Y en tercer lugar, es también posible que la inmediatez de las elecciones impida cuajar el proyecto Sumar. El PSOE sigue pensando en clave bipartidista y puede que una izquierda dividida y débil le reporte voto útil. No sería la primera vez que ocurre. La primera mayoría absoluta de Felipe González y la primera victoria de Zapatero coincidieron con el hundimiento electoral del PCE e IU, respectivamente. Aunque tampoco es matemático: la mayoría absoluta de Aznar se alcanzó con una Izquierda Unida de capa caída. En todo caso, se trata de una más de las osadas maniobras que Pedro Sánchez ha sido capaz de adoptar a lo largo de su carrera. Si sale mal, vamos a tener el país más derechizado de la historia democrática.

Sumar, Izquierda Unida y Podemos han salido tocados de este proceso. Han dilapidado demasiado tiempo en querellas internas, en marcar territorios —especialmente Pablo Iglesias y su club de fans— y han sido incapaces de ofrecer serenidad y de crear una amplia red social que diera consistencia al proyecto. Aunque parte del ruido se ha disipado durante la campaña electoral, no parece que en un plazo tan corto de tiempo vayan a ser capaces de establecer un marco creíble, estimulante para revertir espectacularmente la situación. Contando además con el desánimo (y el agotamiento) que la derrota ha generado entre sus activistas, a los que ahora se les debe pedir que se reactiven, que encierren las divergencias y que se entusiasmen con un proyecto a medio hacer. En la pasada campaña, cuando la gente gritaba eufórica «presidenta» a Yolanda Díaz cada vez que intervenía en un mitin, siempre pensaba que hay demasiado inmediatez y optimismo infundado cuando en realidad estamos viviendo un período de extrema y peligrosa derechización que sólo va a ser posible derrotar con un proceso paciente, sostenido en el tiempo, que sea capaz de aglutinar muchas fuerzas y generar dinámicas sociales que hagan frente, en serio, a todas las manifestaciones de la crisis ecosocial.

IV

Barcelona ha sido una de las ciudades donde la derrota ha sido menor. Barcelona en Comú ha quedado tercera fuerza política perdiendo sólo un concejal respecto al mandato anterior (de 10 a

9). Sólo han faltado 142 votos para adelantar al PSC, quedar como segunda fuerza y mantener los 10 concejales. Ha sido primera fuerza en 2 distritos, segunda en otros 8 y relegada en los dos más ricos de la ciudad. Incluso ha conseguido aumentar su representación en Eixample y Gracia, dos de los distritos donde las transformaciones urbanísticas han sido más visibles. El resultado muestra cierta fuerza y que al menos una parte de la ciudadanía ha reconocido la bondad de las políticas desarrolladas. En Barcelona tampoco han existido las guerras de otros territorios y se ha realizado una gran movilización. Aunque perder la alcaldía resulta descorazonador, no se puede perder de vista la brutal guerra mediática y judicial que ha tenido que hacer frente el proyecto. Unas líneas de ataque que han tenido como principal aliado la resistencia de partes no desdeñables de la población a las políticas orientadas a limitar el uso del coche en la ciudad y transformar el sistema de recogida de basura.

Tras la noche electoral, los potentes *lobbies* de la ciudad estaban felices. Había ganado Trías —más candidato de la derecha que de Junts—, o sea, los diversos *lobbies* que dominan la ciudad: los inmobiliarios, los turísticos, los del automóvil, los gestores privados de servicios públicos... Trías está en minoría, pero seguramente podrá mantenerse mediante acuerdos puntuales con el PSC, que defiende sustancialmente los mismos intereses e idea de ciudad, y con ERC, que difícilmente va a cruzar la línea roja de aliarse con la izquierda no independentista. El nacionalismo actúa siempre como creador de fronteras que en gran medida impiden políticas de izquierda tripartita. Cada vez que ERC ha superado estas líneas rojas ha experimentado una debacle electoral.

Vienen malos tiempos. Seguramente Trías no demolerá por completo lo realizado en este último mandato. Pero frenará el desarrollo sucesivo y volverá a practicar las brutales políticas urbanísticas, económicas y sociales que ya experimentó en su anterior mandato (2011-2015). Los grupos de presión han invertido mucho en sus opciones preferidas y ahora les exigirán resultados. En este contexto hay que temer no sólo el cambio de las políticas, también ataques más o menos solapados a la pluralidad de organizaciones sociales, vecinales y ecológicas que dinamizan la vida social. Para las élites, esta variopinta suma de activistas son el magma sobre el que se apoya Comuns. Y no es descabellado esperar que traten de realizar una política orientada a debilitarlo con el objetivo de que Comuns nunca más vuelva a tener opciones de victoria. Ya llevamos tiempo siendo objeto de denuncias orientadas a deslegitimar nuestro papel, a poner trabas a la participación, y estas pueden agudizarse por vías diversas.

Comuns, sin tener una pérdida brutal, se va a tener que enfrentar a retos importantes. Ganaron la primera vez que se presentaron a elecciones y ahora van a tener que trabajar en la oposición. No hay nada que sea tan complicado para las organizaciones como hacer frente a un retroceso. Está además la cuestión del liderazgo. Ada Colau ha sido una persona con carisma, que llegó a la política con legado prestigioso de lucha social, y que tenido un papel preponderante e indiscutido en la organización. A corto plazo, está la cuestión de cómo adaptar la acción a esta nueva situación. A medio plazo, la de generar nuevos liderazgos —ella ya había anunciado que este sería su último mandato— que sean capaces de concitar los apoyos que ella ha conseguido. Comuns ha llegado a la vida adulta y de cómo gestione ese tránsito depende en gran medida el futuro de la izquierda en Catalunya.

Fin de época. Parece que volvamos al punto de partida. En una coyuntura donde avanza el derechismo, el autoritarismo y la irracionalidad, cuando deberíamos estar enfrentando en serio la crisis ecosocial. Parece que la izquierda alternativa esta llamada cada poco tiempo a reinventarse, renovarse y renacer. Hace falta una mirada de largo plazo. Y mucha generosidad, tenacidad y creatividad para superar el tránsito y volver a empezar.

Asier Arias

¿El nuevo Consenso de Washington?

Notas sobre estrategia ecologista

Voy a dedicar estas líneas a cuestiones «estratégicas» —*lato sensu*—, de forma que lo más honesto será que comience por explicitar mi principal intuición estratégica: no creo que nadie tenga nada particularmente sólido que decir sobre «estrategia». Si esta intuición se me presenta como válida en el plano de las luchas específicas, tanto más en éstos que se aproximan en generalidad al de la pugna por una humanidad libre y una sociedad justa en un planeta habitable. [\[1\]](#) En aquellas luchas, en esta pugna, nos lo jugamos todo, de forma que nos vemos obligados a reflexionar sobre estrategias, y a juzgarlas, por poco que confiemos en nuestros juicios estratégicos.

Xan López publicaba a comienzos de mayo un interesante artículo bajo el título «El Nuevo Consenso de Washington». Usaré el artículo de López como telón de fondo por varias razones. En primer lugar, porque el mismo sugiere que existirían motivos para intuir una cierta deriva hacia la recomposición de un «orden global» cortado por alguna clase de patrón keynesiano, o al menos motivos para creer que el actual hegemon alberga la intención de preservar su preponderancia por esa vía. En segundo lugar, porque se trata de un texto que pone implícitamente en juego el sentido común estratégico de un sector del ecologismo que viene abogando en los últimos años por esa constelación programática a la que ha dado en llamarse Green New Deal (GND).

Las aguas del debate en el seno del ecologismo parecen sugerir la conveniencia de apuntar a un extremo que debiera sobrar poner de relieve: valoro muy positivamente el hecho de que sean cada vez más las voces y esfuerzos orientados a dar cuerpo a una cultura y una praxis que pudieran permitirnos hacer frente a la actual coyuntura ecosocial con alguna garantía de éxito. Parto pues de la intención de contribuir con un pequeño granito de arena a la tarea de avanzar hacia una «ecología política que sea útil para este tiempo», y asimismo de la convicción de que la «diversidad puede ser en cierta forma una fuerza» (López, 2023a). Por supuesto, el respeto a la diferencia es un valor que no echa exclusiva ni primariamente raíces en esa convicción, pero se trata en cualquier caso de un valor que violentaríamos si disimuláramos las diferencias. [\[2\]](#)

Debemos preguntarnos pues cuál podría ser esa cultura política y esa ecología política útil para este tiempo. Es ésta la pregunta que me interesa plantear, pero avanzaré hacia ella dando un rodeo por la señalada asunción de acuerdo con la cual pueden detectarse ya entre las cenizas del neoliberalismo los brotes de un nuevo orden socioeconómico que habría de ser descrito trazando analogías y rescatando imágenes motivadoras de esa línea que va del New Deal al keynesianismo de posguerra.

La época de la historia económica global que va de 1933-1945 a 1973 —de la investidura de Roosevelt a la consumación del shock de Nixon, digamos— arranca con una iniciativa legislativa destinada a atar en corto a la banca. La Ley de Emergencia Bancaria, aprobada al día siguiente de la investidura de Roosevelt, fue enseguida sustituida por la más acabada Glass-Steagall, que trazaba estrictos límites a la especulación financiera separando con claridad la actividad de la

banca comercial y la de la banca de inversión. Transcurridos tres lustros desde la última implosión financiera, se espera con más confianza la siguiente que el menor asomo de valentía legislativa dirigida a su contención. Sobra anotar que la palabra «financiarización» es una de las que mejor definen nuestra época económica, del mismo modo que sobra explicar que una de las facetas más importantes de su significado es la relativa al creciente poder político de las instituciones financieras.

En lugar de ninguna clase de atisbo de regulación del sector bancario análoga a la que abriera la época del New Deal, lo que hallamos en nuestro presente es la prolongación de la tendencia de los principales agentes del sector a la inversión de los depósitos, dificultando el flujo del crédito y facilitando la emergencia de quiebras y crisis periódicas, con cargo al contribuyente. La «nueva crisis bancaria» de la que se viene hablado en el último mes y medio no es nueva, pues. Se trata de la crisis de 2007-2008, que el mundo atlántico resolvió poniendo a funcionar la máquina de hacer dinero, regando con él al sector financiero y cruzando los dedos hasta la próxima. Es de justicia reconocer, no obstante, que el actual Juggernaut es un hueso más duro que el que royeran tras el crac del 29: domesticar al sector financiero significaría hoy dismantelar la arquitectura de la globalización capitalista que surgiera de la década de «el fin de la historia» —una década que, casualmente, se cierra con la derogación de la Glass-Steagall—.

Sea como fuere, el volumen de ingresos por intereses de los principales bancos no deja de crecer, y la remuneración de los depósitos oscila entre el cero y la nada. La brocha gorda antiinflacionaria de las subidas de tipo encarece hipotecas y créditos al consumo y se combina con el bisturí de «la firme decisión de apuntalar a la banca» (Bayona, 2023). Éste es el contexto en el que el sector bancario español se atreve a poner el grito en el cielo y presentar recursos contra un impuesto temporal que aproxima tímidamente la tributación de las principales entidades financieras del país a la del amable contribuyente.

La fiscalidad ofrece otro ángulo privilegiado desde el que contemplar la distancia que media entre nuestro contexto y el del New Deal. David Harvey recoge en su *Breve historia del neoliberalismo* un gráfico que nos ahorra cualquier comentario ulterior (Harvey, 2005: 33). En él podemos apreciar cómo entre el 33 y el 45 el tipo impositivo al tramo más alto se dispara en EE.UU. desde el entono del 25% hasta el del 90%, en el que permanece durante dos décadas para caer luego al 70% y desplomarse ya a partir de 1980. Un vistazo a la *Base de datos global de estadísticas tributarias* de la OCDE basta para convencerse de que no es ésa la línea que sigue hoy EE.UU. —el único logro legislativo de la administración Trump, su masivo recorte fiscal a los multimillonarios y las grandes empresas, sigue en pie—, pero tampoco ningún país atlántico.^[3]

Estamos, en fin, tan lejos del 33 y el New Deal americano como del espíritu del 45 y el consenso de posguerra británico. Olvidarlo sólo puede contribuir a menoscabar nuestras metáforas, nuestra memoria[4] y nuestra estrategia. La defunción del neoliberalismo de la que llevamos hablando tres años podría discutirse, y con buena base, pero mucho más controvertible resulta la idea de que esa defunción estaría dando paso a algo equiparable al New Deal. Indudablemente, la retórica está ahí, pero son escasos los hechos que anuncien, a este lado del Atlántico o al otro, la inminencia de su traducción en políticas efectivas. El optimismo en torno al protagonismo del Estado en la rápida transformación que nuestras economías deberían haber emprendido ayer debe confrontarse con la imagen que nos devuelve la comparativa de su poder relativo frente al capital transnacional.

Si lo que tenemos en mente es, como López, el liderazgo del líder atlántico, no debiéramos desatender que, con una previsible recesión en el horizonte, lo que hemos presenciado en el último año ha sido una sucesión de recortes del gasto social: al considerar el arco que va de la sanidad a la asistencia alimentaria, de la ayuda federal a los Estados a las coberturas por desempleo, lo último de lo que un observador imparcial hablaría sería del florecimiento del Estado de bienestar estadounidense.[5]

Pero si lo que tenemos en mente es el empeño del líder atlántico en el apuntalamiento militar de su hegemonía, entonces haríamos bien en pensar despacio. Ni López ni nadie necesita que le recuerde los riesgos de la rampante confrontación geoestratégica. Tampoco es preciso aclarar que en esa confrontación trastabilla el hegemón más violento de la historia. Ni que aplaudir sus traspies en la cuerda floja de la hegemonía puede con facilidad equivaler a aplaudir el preludeo del omnicidio. En uno de esos traspies debemos leer, por cierto, el principal logro de la administración Biden en este terreno: desconectar a Europa de su «socio comercial natural» en Rusia (Chomsky, 2023) y asegurar su esfera de influencia en la Unión Europea a través de una OTAN increíblemente reforzada. Este gran logro trae consigo, entre otras cosas, una grave catástrofe ecológica, no sólo por la contradicción entre rearme y sostenibilidad, sino asimismo por el absurdo termodinámico del nuevo mercado gasista. Sobra insistir, pues, en que es difícil encontrar «elementos que debemos apoyar» (López, 2023b) en la estrategia hegemónica del jefe atlántico —tampoco en su aspecto económico, plasmado en acuerdos de cooperación económica y militar con sus clientes europeos y asiáticos: en realidad, trae antes a las mentes el neo-mercantilismo del «sistema americano» que el New Deal—.

Es poco menos que obvio, no obstante, que podría haber «elementos que deberíamos apoyar» en proyectos reformistas tipo New Deal. Nadie en su sano juicio se opondría a políticas redistributivas *de verdad*, a reducciones de la jornada laboral, a extensos programas de vivienda pública,[6] a la ampliación de los servicios públicos existentes o a la creación de otros inexistentes.[7] Nada de lo que hoy está sucediendo a ambos lados del Atlántico tiene estos perfiles, ni tampoco la iconografía que ha venido a asociarse al GND bajo la forma de macroproyectos «renovables».

Hay un último elemento que López identifica en su texto y que diferencia nuestra situación de la del New Deal: la actual debilidad del movimiento obrero. Con todo, las conclusiones que deben extraerse de aquí distan, a mi juicio, de la que extrae el autor. Desde su punto de vista, dada esa debilidad, no queda sino caminar hacia la sostenibilidad siguiendo la estela de la

«socialdemocracia de guerra y por la seguridad» del jefe atlántico. Sin embargo, la conclusión razonable sería la de la necesidad de contribuir a la revitalización del movimiento, como ejemplifica el propio New Deal histórico.

El movimiento obrero estadounidense había sido aplastado en los veinte, pero en la década subsiguiente resucitó. Contribuyó el contexto de crisis, pero también un ingente volumen de trabajo cultural, social y político. Sin ese trabajo, el New Deal habría tenido una forma radicalmente diferente, porque la efectiva fue, en buena medida, obra del activismo de las organizaciones de base. Este punto suele ilustrarse echando mano de esa conocida anécdota de acuerdo con la cual el presidente Roosevelt solía despedirse de los sindicalistas diciendo: «muy bien, ahora sólo queda que salgáis ahí fuera y me obliguéis a hacerlo». Y lo hicieron. Los años treinta estadounidenses han de recordarse no tanto como los años del New Deal de Roosevelt, sino sobre todo como los años del renacimiento del movimiento obrero tras el violento asalto del primer *Red Scare*. No debe esperanzarnos hoy, por tanto, la retórica del consejero de Seguridad Nacional de la administración Biden (cf. López, 2023b), sino antes bien el modesto resurgir del sindicalismo en EE.UU. o, en Europa, las lecciones que desde Francia nos llegan de la confluencia entre la lucha ecologista y la obrera.

Así pues, incluso aunque entendiéramos que alguna clase de GND constituye de hecho el límite político de nuestros horizontes ecosociales posibles, y aun del discurso útil, cabe argüir que la tarea de construir una cultura política a la altura de nuestro tiempo depende tanto o más de la revitalización de los movimientos populares que del control de un hipotético Estado emprendedor llamado a dirigir la transición por la vía socialdemócrata.

Una importante pregunta estratégica es en este punto la relativa a aquellos límites del discurso útil. Una posible respuesta apelaría al «realismo político» para orillar el debate sobre los límites de la «transición ecológica» entendida en los términos convencionales: como sustitución tecnológica. Otra aconsejaría espolear el debate sobre esos límites, entendiendo el «sentido común» no tanto como el suelo sobre el que debemos avanzar con cautela en nuestra «guerra de posiciones», sino sobre todo como un objetivo: el de alumbrar un sentido común mejor (Gramsci, 1948: 129).

Podemos denominar «liberalismo verde» al sentido común imperante: verde en la superficie, radicalmente antiecologista en la sustancia (Arias, 2020). Cualquier proyecto político a la altura de los tiempos tiene que lidiar con él de un modo u otro: puede pretender usarlo como un ambiguo viento de cola, e incluso interpretar algunos de sus elementos como «victorias ecologistas», pero puede también cuestionarlo abiertamente. Si partimos de la convicción de que, en política, de lo que se trata es de ganar posiciones en una batalla por el discurso en la que no conviene ponerse demasiado grave con lo bueno o lo verdadero, será difícil llevar el frente mucho más allá de la idea de «transición ecológica» como sustitución tecnológica (cf., v. g., López, 2023c).

Al pensar en los medios políticos para una transición justa nos movemos en el terreno de la política ficción: a corto plazo, la socialdemocracia climática del GND radical se antoja tan hacedera como el leninismo ecológico (Andreas Malm), y los plazos son endiabladamente cortos. Al pensar en la transición en sí misma, las cosas parecen más claras: llegará, solita o acompañada, y se inclinará hacia el apartheid ecológico y el neocolonialismo —el plan A, en

curso—, o hacia un reparto más o menos justo de la escasez. Serán muchos los factores que puedan contribuir a inclinar la balanza, pero uno decisivo residirá sin duda en el sentido común vigente en las metrópolis. Ganar terreno al sentido común ecoliberal —firmemente establecido en el plan A, con centro de gravedad en el cortoplacismo neocolonial de la «transición» como sustitución tecnológica— podría concebirse hoy como el principal frente de la batalla por la posibilidad de una transición justa. Los ecos de la Conferencia de Bandung y las voces de los agricultores indios, los Trabajadores Rurales Sin Tierra, la Vía Campesina o el CADTM nos traen en este sentido mensajes más importantes que la retórica del consejero de Seguridad Nacional de Biden.

¿Una cultura política a la altura de los tiempos? Aquella que ponga en primer plano cada aspecto de nuestra situación de extralimitación. El aspecto más importante de esa situación es que es *nuestra*: del Norte. «Transición justa» tiene varios significados: como mínimo, el relativo a las desigualdades dentro de las sociedades opulentas y el relativo a la opulencia de las sociedades opulentas. Señalar que no debemos dejar de subrayar ninguno de los dos de cara a la configuración de una cultura política útil para este tiempo no es un mero ejercicio de reconfortante purismo moral, y quizá tampoco una violación de las reglas del juego del «realismo político». En cuanto a éstas, estaría bien verlas por escrito, porque mucho me temo que no están tan definidas y asentadas como las leyes de la mecánica de fluidos, pongamos por caso.^[8] En cuanto a lo del purismo moral, sólo cabe insistir en el peso del sentido común metropolitano en esa balanza de la transición que habrá de inclinarse hacia el reparto de la escasez o hacia la profundización del apartheid ecológico, la militarización de las fronteras, el extractivismo desaforado, el neocolonialismo, la proliferación de zonas de sacrificio y, en fin, la prolongación de nuestro *business as usual* terminal.

Referencias

Arcarons, J. & Raventón, D. (2023) «Sobre la propuesta de Sumar de la 'herencia universal'», *Ctxt*, 10 de mayo.

Arias, A. (2020) *La batalla por las ideas tras la pandemia. Crítica del liberalismo verde*. Madrid: Catarata.

Arias, A. (2022) “Autoadulación y psicopatología especulativa ante el abismo nuclear”, *mientras tanto*, 217.

Bayona, E. (2023) «La subida de tipos del BCE lleva la economía a una situación límite», *Público*, 4 de mayo.

Chomsky, N. (2023) «The clock is ticking», *The Progressive Magazine*, 27 de marzo.

Gramsci, A. (1948) *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003.

Harvey, D. (2005) *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal, 2007.

Harvey, D. (2023) "Making sense of today's inflation: Debt, austerity and tax cuts", *The Anti-Capitalist Chronicles*, 5(2), 26 de enero.

López, X. (2023a) «La hipótesis Oasis», *Público*, 7 de abril.

López, X. (2023b) «El Nuevo Consenso de Washington», *Público*, 2 de mayo.

López, X. (2023c) «El retardismo climático y un Green New Deal para una época escéptica», *eldiario.es*, 19 de febrero.

Riechmann, J. (2021) "Autolimitarnos para que pueda existir el otro. Sobre energía y transiciones ecosociales", *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 156, pp. 11-25.

Notas

1. Isaiah Berlin nos explicaba en su biografía de Marx la convicción con que éste defendía la intuición opuesta: la de que había, en efecto, alguien con algo crucial que decir sobre estrategia, y ese alguien era un Karl Marx que, de hecho, solía acertar en sus pronósticos estratégicos. ?
2. «No seamos ambiguos: en el debate de ideas no debe haber piedad. Las ideas no están para respetarse, están para discutirse» (Arcarons & Raventón, 2023). ?
3. Otra diferencia entre aquel contexto y el nuestro reside en la tasa de desempleo, hoy en mínimos históricos en EE.UU. Como es sabido, estas cifras suponen un problema para la tasa realmente importante, la de ganancias. Existe una forma de abordar este problema, y no se esmeran en ocultarla los arquitectos de la política económica (Harvey, 2023): propiciar una recesión que arrastre consigo la tasa de salarios. ?
4. Al hablar de la memoria en el contexto del artículo que hemos escogido como botón de muestra, es difícil dejar de señalar que en el mismo se nos presenta a John Fitzgerald Kennedy como «el artífice de la misión a la Luna» (López, 2023b). Entiendo que el autor no pretendía otra cosa que insertar una referencia al penúltimo libro de Mariana Mazzucato, pero escribía esas líneas en el aniversario de la liberación de Vietnam. Por la salud de la memoria, debió referirse a él como el presidente que arrojó sobre los campesinos vietnamitas a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, autorizando el uso del napalm y dando inicio a la mayor guerra química de la historia (más de 80.000 millones de litros de herbicidas, principalmente del nefando agente naranja). Fue ésta su principal hazaña en calidad de pionero, pero hubo otras en las que estableció marcas difíciles de batir. Así, por ejemplo, su victoria electoral dependió en buena medida de una mentira deliberada de acuerdo con la cual el pueblo americano debía temblar de miedo porque los rusos les sacaban varios cuerpos en la carrera armamentística: «no votéis a ese blando de Ike, que no ha sabido defender al país de esta terrible amenaza inexistente». Cuando poco después Jruschov le ofreciera una reducción conjunta de capacidad militar ofensiva —y la emprendiera unilateralmente, de hecho—, Kennedy respondió con el silencio y el ejemplo: financiando un inmenso programa de rearme. Cabría mencionar también el infame heroísmo de su resolución de la crisis de los misiles (cf. Arias, 2022), pero basta con lo indicado como preludio de la pregunta decisiva: ¿qué ganan nuestras metáforas ilusionantes con esas imágenes deformadas, tomadas del baúl de los recuerdos falsarios? ?
5. Mientras redacto estas líneas se prolonga el enésimo debate sobre el techo de deuda ante

un posible *default*. Como en todos los anteriores, pasa curiosamente inadvertida una posibilidad obvia: cabe endeudarse, pero también aumentar los ingresos fiscales. Se trata de una opción que no está en la agenda: se discute una vez más, exclusivamente, sobre el techo y los recortes de gasto, y todo indica que habrá más recortes. Si echamos, por otra parte, un vistazo a los últimos vaivenes de nuestra eurocracia, encontramos que la propuesta de la Comisión para la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no anuncia cambios significativos, y por si cupieran dudas Bruselas se apresura a acompañarla de llamadas de atención sobre el exceso de déficit —entendido, claro, como cualquier cifra que supere ese 3% que Guy Abeille basó, según sus propias palabras, en nada—. [?](#)

6. Con varios millones de viviendas en desuso, no sería en nuestro país necesario imitar el afán constructor de la Public Works Administration. [?](#)
7. El cuarto pilar del Estado del bienestar del que tanto nos ha hablado Vicenç Navarro sería un buen ejemplo, pero también el de los programas educativos, artísticos y culturales de la Works Progress Administration, que podrían inspirar hoy proyectos de formación y contratación de mineros urbanos u hortelanos ecológicos. [?](#)
8. Es claro que el realismo exige acusar recibo del auge de las derechas, adecuar mensajes a contextos y poner entre comillas todo maximalismo que pueda chocar con objetivos inmediatos cuya importancia no cabe minimizar —la reedición de un gobierno de coalición sería aquí el ejemplo más inmediato—. Nada de esto habla, sin embargo, en contra de la necesidad de aprovechar todos los espacios posibles para atacar la idea de «transición ecológica» como sustitución tecnológica y para recalcar que no puede haber una «transición justa» sin un rápido abandono de la actual senda neocolonial y una drástica reducción del metabolismo económico del Norte, responsable —tanto histórica como actualmente— de la catástrofe ecosocial en curso. Jorge Riechmann lo ha expresado con claridad, completando el apotegma de Emilio Santiago Muiño: «o nos empobrecemos, o morimos matando» (Riechmann, 2021: 23). [?](#)

Albert Recio Andreu

Vivienda, modelo productivo y empleo

Cuaderno pandémico: 21

1. Un problema recurrente

El acceso a la vivienda ha vuelto a ser, si es que alguna vez dejó de serlo, una cuestión política prioritaria. La vivienda era un problema en los años cincuenta, cuando en ciudades como Barcelona se detenía y expulsaba de la ciudad a inmigrantes procedentes del resto de España que no podían acreditar un empleo y un lugar de residencia. Cuando las grandes ciudades se llenaron de asentamientos de chabolas. La vivienda fue el gran problema para toda la gente joven en la década de los sesenta. La contrapartida a la compra de vivienda fueron las largas jornadas laborales, las horas extra y el pluriempleo que caracterizaron la vida laboral en el tardofranquismo y la transición. La emancipación de los jóvenes siempre fue una quimera. Irse de casa siempre ha supuesto compartir una vivienda, a menos que se tuvieran padres ricos que cubrieran parte del gasto. La crisis de principios de la década de los ochenta supuso un parón inmobiliario y, cuando la actividad se reanimó hacia 1985, se experimentó una primera burbuja finalizada con la corta, pero aguda, crisis de 1992-94. Después vino el período del «boom» inmobiliario, cuando en España se construían más viviendas que en Francia, Reino Unido y Alemania juntas. Pero también en este período la vivienda fue un problema crucial, que afectó especialmente a jóvenes y los nuevos inmigrantes. Y florecieron movimientos sociales como «V de Vivienda». Después vino la crisis, los desahucios masivos, el desplome del sector inmobiliario. Y con la recuperación, una nueva burbuja de precios que de nuevo sitúan la vivienda como uno de los problemas esenciales de la sociedad española.

La vivienda siempre ha sido un problema para las clases subalternas. Lo único que ha ido cambiando han sido las manifestaciones de este problema. En el tardofranquismo tomó la forma del barraquismo, del realquiler, de las viviendas de mala calidad y de la urbanización deficiente —en algunos momentos de habló del «barraquismo vertical»—, y de largas jornadas laborales para acceder a la propiedad. En la crisis anterior, cuando el modelo de vivienda en propiedad era totalmente hegemónico, la crisis adoptó la forma de los desahucios que justificaron el nacimiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (la PAH). Ahora se vive, básicamente, como una cuestión de alquileres insostenibles. En buena medida porque el cambio en el mercado financiero y el poso generado por las oleadas de desahucios de la crisis anterior han provocado que un porcentaje creciente de población no pueda considerar la compra como una alternativa posible. Aunque persisten los desahucios, sobre todo de gente que no puede pagar el alquiler, y han reaparecido viejas experiencias como el chabolismo, la vivienda compartida y la ocupación de viviendas vacías.

Nunca ha existido una verdadera política pública orientada a garantizar el acceso universal a la vivienda. Y la especulación urbana, el negocio inmobiliario, han estado siempre en el centro del modelo productivo y han constituido una fuente de renta esencial para las élites locales. Una realidad que en muchos casos explica, también, la persistente proliferación de la corrupción y el abuso social.

2. La crisis actual de la vivienda

El discurso dominante es que el problema de la vivienda es debido a un déficit de oferta. Es decir, que hay que construir más viviendas para cubrir las necesidades de la población. Y para conseguir este objetivo, lo que hay que hacer es cebar los ingresos de los promotores con todo tipo de incentivos: puesta a disposición de suelo barato, desgravaciones fiscales, subvenciones a los compradores o inquilinos, crédito barato, etc. O sea, todo lo que ya ha funcionado en períodos anteriores y que se ha mostrado tan inútil para alcanzar el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda decente a una parte de la población como apto para el enriquecimiento de los sectores sociales que controlan el proceso inmobiliario: propietarios de suelo, promotores, constructores, financieros, propietarios de vivienda.

Hay razones para pensar que en determinadas circunstancias es necesario ampliar la oferta de vivienda. El crecimiento demográfico es el factor principal. Y este suele estar relacionado con procesos migratorios que a su vez guardan una estrecha relación con las dinámicas del mercado laboral. Hay otra situación que puede explicar una demanda creciente de vivienda: el aumento de metros cuadrados por individuo. Una misma población necesitará más o menos espacio residencial en función de su estructura familiar y su modelo de vida. Las familias intergeneracionales de mi juventud vivían bastante apiñadas. Las parejas adultas sin hijos tienen mucho más espacio a su disposición. El modelo de vivienda unifamiliar del extrarradio urbano, incomparablemente más. Y el sueño de mucha gente joven de una vivienda individual, también. Es imposible que ninguna política pueda garantizar una expansión sostenida de los metros cuadrados per cápita. Por ello, definir una política de vivienda exige también un debate social sobre el modelo de vivienda aceptable para una política social seria. Sin embargo, las razones de la crisis actual se encuentran sobre todo en otras partes.

La forma en que se saldó la crisis financiera está, en parte, en el origen de los problemas actuales. El rescate a los bancos vino acompañado de una verdadera dejación pública en materia de vivienda. A los bancos no sólo se les financió generosamente y por muchas vías: financiación directa, compra de activos sobrevalorados por parte de la Sareb, etc. sino que además se les permitió desahuciar brutalmente a miles de personas sin exigírseles siquiera una gestión inmobiliaria solvente. Para los bancos se trató, sobre todo, de quedarse con activos inmobiliarios para «limpiar» sus balances contables. Una operación meramente formal. Ni se preocuparon de buscar inquilinos, ni han asumido su cuota de gastos en las comunidades en las que tienen propiedades. Han generado un vacío que explica las ocupaciones de gente necesitada en aquellos barrios donde la crisis fue más aguda —y que han dado vida a pequeñas mafias que «intermedian» en este peculiar «mercado»—. Además, las nuevas normas bancarias diseñadas para impedir otra crisis bancaria han dificultado el acceso al crédito a un sector más amplio de la población. Desahuciados y personas sin acceso al crédito no han tenido otra alternativa que dirigirse al mercado de alquiler.

La otra parte de la historia tiene que ver con la propia transformación de la oferta de vivienda, que ha utilizado las posibilidades y vacíos legales para reorientar una parte de la oferta de vivienda residencial en una variante del modelo hotelero: vivienda turística y vivienda de uso temporal. O sea, una reducción de la oferta de vivienda y un desplazamiento de parte del parque residencial, especialmente en los centros urbanos, hacia un «mercado» diferente. (Algo parecido a lo que ha

ocurrido en otros campos, como el «desvío» de medicamentos para diabéticos para uso de los tratamientos de adelgazamiento). Algunas de estas dinámicas fueron propiciadas por las políticas que aprobó el PP para tratar de realimentar la especulación inmobiliaria, como es el caso evidente de la posibilidad de conseguir permisos de residencia para inversores en vivienda, o la creación de las socimis con un régimen fiscal impresentable —unas medidas que no han sido revocadas por el Gobierno actual—. Pero en otros casos simplemente han prosperado porque los modelos de calificación urbanística y las normas sobre vivienda no protegen adecuadamente este derecho básico. En muchos casos, esta conversión atroz de viviendas en pisos turísticos ha contado con la tolerancia de muchas autoridades locales deseosas de promocionar el turismo a toda costa. Y cuando se ha tratado de ponerles freno, como en el caso de Barcelona, ha habido que enfrentarse a una feroz resistencia por parte de los sectores implicados y de buena parte de los grupos políticos que les representan. Como diría Yayo Herrero, se ha generado una escasez en beneficio de unos determinados intereses y en detrimento de la gente humilde —aunque la rapiña de los grupos inmobiliarios afecta en determinadas zonas, también, a sectores de asalariados medios—.

La nueva ley de vivienda introduce una serie de instrumentos que posibilitan presionar sobre los alquileres desahogados. Pero, al dejar fuera de regulación los pisos turísticos y los alquileres de temporada, deja un vacío por donde se pueden seguir colando las prácticas más depredadoras. Los grandes grupos inmobiliarios cuentan con una miríada de asesores legales que les ayudan a buscar todos los atajos legales que les permiten incumplir la ley. Y —como me contó un técnico municipal ducho en el tema— los jueces siempre dan más importancia a los derechos de la propiedad que a los del común.

Es cierto que la regulación de alquileres y de las viviendas turísticas y de temporada no resuelve el problema de la vivienda. Pero es una parte de la solución. Otra es sin duda la creación de un verdadero parque público de nueva o vieja construcción. Una política que sólo han practicado algunos Ayuntamientos y que —como ha mostrado la experiencia de Barcelona— requiere tiempo y recursos para alcanzar efectos palpables. Hay otras muchas cuestiones a tocar, como saben los buenos expertos en vivienda, pero la base de la que partir, políticamente, es que la vivienda es un bien esencial para todo el mundo.

3. Vivienda y especialización productiva

No se puede entender el problema de la vivienda sin ponerlo, además, en relación con la peculiar evolución de la economía española. En primer lugar, el peso desmesurado del turismo en el conjunto y en determinadas zonas. El turismo, cuando es masivo, requiere mucho espacio de alojamiento. No sólo para los turistas, también para las personas empleadas en su sector. Muchas de ellas personal de temporada y con necesidades de alojamiento parecidas a las de la clientela. La presión poblacional que se produce en determinadas zonas se traduce de forma creciente en un problema para la población local y para los trabajadores migrantes del sector, como recientemente han puesto de manifiesto reportajes que dan cuenta de que una parte creciente del personal en Mallorca o la Vall d'Aran tiene que residir en autocaravanas. *Nomadland* no es exclusivamente un fenómeno estadounidense. De la misma manera que se han ilustrado las dificultades que padecen determinados profesionales (maestros o personal sanitario) en zonas como Eivissa, porque nadie les alquila vivienda por el año completo. El turismo crea una presión temporal sobre la vivienda de difícil solución.

A este impacto general se suma, en algunas zonas como Barcelona, una segunda presión derivada de las peculiaridades del modelo productivo *high tech*. Me refiero no sólo a la actividad de las empresas «tecnológicas» de las comunicaciones y la informática. Se trata también de los centros de investigación, o de diseño, de las universidades y de un sistema sanitario orientado a atraer pacientes adinerados. Todos ellos atraen gente con recursos, gran parte de ella por temporadas relativamente cortas, que gozan de ingresos altos y buscan lugares agradables para vivir. Este mismo modelo genera una polarización ocupacional —derivada de que estos empleos requieren de un ejército de servidores mal pagados— y una segunda presión sobre el mercado inmobiliario que se suma a la del sector turístico. Suele ser menos visible porque lo tecnológico tiene buena prensa y también porque el turismo es un elemento más llamativo que concita muchas miradas críticas, a menudo bastante simplistas. Pero no tenerlo en cuenta constituye un olvido demasiado grave, porque al hacerlo se deja de lado una parte crucial del modelo económico que hay que cuestionar.

Y hay, a mi entender, una tercera cuestión que se combina con las otras dos y que tiene que ver con la propia mutación del capitalismo local. En España, y particularmente en Catalunya, la vieja burguesía industrial, que gestionaba sus negocios familiares, casi ha desaparecido. Las empresas que quedan (no tantas como antes pero no tan pocas como se piensa) o son filiales de empresas foráneas o han pasado a manos de empresas de capital-riesgo y fondos de inversión, gestionadas por profesionales. Esta mutación ha tenido lugar a través de un proceso de compraventa de empresas en las que a menudo los antiguos propietarios han obtenido, de golpe, una importante suma de dinero. Han pasado de industriales-gestores a rentistas. Y uno de los espacios preferentes para colocar estos caudales está en la inversión inmobiliaria. En generar un modelo que garantice una alta rentabilidad a sus inversiones. Debido a ello, el turismo y la «atracción de talento» forman el núcleo central del discurso de los *lobbies* locales (Círculo de Economía, Barcelona Global...): constituyen bases de un modelo inmobiliario de alta rentabilidad. Alguien informado sobre la enorme presión en favor de la ampliación del aeropuerto del Prat, sabrá que por detrás están poderosos inversores que tienen planes de desarrollo de urbanizaciones de lujo en su proximidad. Puede resultar exagerado, pero lo que es evidente es que en todo el debate sobre el modelo de Barcelona (o de otras ciudades) lo inmobiliario juega un papel central.

4. Salarios y vivienda

Que el gasto en vivienda sea insoportable depende de dos variables: del precio de los alquileres —o el del gasto hipotecario, el cual, a su vez, depende del valor de la vivienda y de los tipos de interés— y de los ingresos de los hogares. Para la inmensa mayoría de la población, estos últimos dependen de los salarios.

En la crisis de vivienda actual es obvio que el crecimiento de los alquileres juega un papel fundamental, agravado en los últimos meses por las políticas financieras que han endurecido y encarecido el acceso al crédito. Es más caro y difícil pagar una hipoteca y esto posiblemente alimenta la demanda de alquiler.

Pero este rebrote del mercado inmobiliario se combina con la devaluación salarial que se produjo con los ajustes de la crisis anterior y con el impacto de la inflación actual. En casi toda devaluación salarial importante inciden dos dinámicas: aumentos salariales menores que los incrementos de precios y lo que llamamos «efecto composición»: un crecimiento del peso de empleos de salarios más bajos. Ambos son visibles en la trayectoria salarial de la crisis anterior. La mayor pérdida de salarios tuvo que ver con el impacto de la reforma laboral sobre la negociación colectiva. Muchos convenios sectoriales no se renovaron y los salarios, de facto, quedaron congelados. Tampoco se puede obviar la contribución de la congelación del salario mínimo. Fue más importante el segundo efecto: la destrucción masiva de empleos en sectores de salarios más altos (banca, industria manufacturera, construcción) y la proliferación de empleos de bajos salarios en sectores de servicios. En algunos casos, esto vino reforzado por la combinación de despidos de empleados con larga trayectoria laboral (que acumulan pluses de antigüedad, promociones de categoría, pluses por circunstancias diversas) y su sustitución por nuevas personas a las que a menudo se les reconoce menor cualificación, se les excluye de determinadas compensaciones y no tienen derechos de antigüedad. Las cadenas de subcontratación y los procesos de externalización de actividades que realizan muchas grandes empresas tienen un papel crucial en esta dinámica, puesto que las empresas subcontratadas y las de servicios auxiliares, por su propia situación y características, pagan salarios inferiores a los de la empresa central. Un caso extremo lo ejemplifica el proceso de sustitución de las camareras de piso de los hoteles (cuyo salario estaba vinculado al convenio de hostelería) por empleadas en «empresas de servicios» (que cuentan con su propio convenio de empresa, mucho peor que el sectorial) y siguen haciendo el mismo trabajo, en el mismo hotel y posiblemente bajo el mismo mando.

La reforma laboral y la subida del salario mínimo han tenido un cierto efecto para contrarrestar esta devaluación salarial, pero están lejos de revertirla y su introducción ha ido acompañada de la reactivación de la inflación, que afecta especialmente a costes básicos como la alimentación.

El reciente acuerdo entre sindicatos y organizaciones empresariales tiene algunas virtudes, pero seguramente será insuficiente. Se trata de un acuerdo marco, una guía de negociación colectiva que puede concretarse o no en los convenios de empresa y sector. Su mayor potencialidad —según las fuentes sindicales que he tratado de obtener— está en que puede ayudar a desencallar la negociación colectiva en muchos sectores en los que esta se ha encallado y se mantienen muchos convenios en condiciones del pasado. El acuerdo, además, incluye un amplio abanico de temas que de negociarse pueden implicar no sólo mejoras salariales sino de

condiciones de trabajo, derechos laborales, etc. De hecho, esta ha sido la línea en el que el sindicalismo español ha conseguido mejores avances, consolidando derechos que tienen un impacto importante en la vida de la gente.

En la cuestión salarial la cosa es menos clara. Se incluye una propuesta de crecimiento salarial del 10% en el período 2023-2025 y una posibilidad de revisión hasta un 1% adicional anual si el alza de los precios es superior a la prevista. Como se desconoce cuál va a ser el nivel de inflación en estos tres años, es difícil determinar el impacto neto en los salarios. Si la inflación supera el ritmo previsto en más del 1% anual, los salarios volverán a perder poder adquisitivo; si, por el contrario, la inflación en este período no supera el 10%, habría una modesta revaloración salarial. Lo que no incluye el acuerdo, en todo caso, es la revalorización salarial de 2022 (sólo se abre la posibilidad de negociar) lo que supone de facto que se da por perdida la reciente caída del salario real.

Tampoco se aborda la cuestión que más ha influido en la devaluación salarial: la estructura del empleo, que favorece la proliferación de bajos salarios. Cambiar esta estructura es realmente complejo. Plantearlo en un acuerdo salarial es imposible. Lo preocupante es que en la política sindical se plantee la fijación de salarios en función de los beneficios empresariales (por otra parte, difíciles de controlar efectivamente), porque en gran medida esto olvida que las desigualdades de beneficios están asociadas a la misma estructura de poder empresarial que ha generado parte de la devaluación de salarios. Hay suprabeneficios en algunas empresas —que en muchos casos ya retribuyen con altos salarios a sus empleados fijos, como ocurre en las eléctricas, las empresas de aguas, etc.— y una presión competitiva insoportable en las cadenas de suministro. Y fijar los salarios en función de los beneficios puntuales supone dejar desprotegida a una parte importante de la población y agravar las desigualdades de vida y acceso a la vivienda.

El problema de la vivienda, un elemento crucial para la vida, es complejo. Se requiere de políticas ambiciosas en diversos ámbitos: promoción pública, regulación de los alquileres (tenencia, cuantía) y de los derechos de uso de la propiedad, políticas orientadas a evitar el deterioro de las construcciones, adaptación ambiental... Pero se requiere también entender que los problemas de la vivienda tienen una interrelación directa con salarios y condiciones laborales, con los cambios en la estructura productiva y el empleo, con las propias dinámicas de uso del espacio. Mientras no se aborde todo esto en conjunto, y predomine el enfoque liberal que da más peso a la riqueza privada y la acumulación la vivienda, seguirá siendo un grave problema social y un generador de padecimiento y exclusión para una parte de la población.

Joan M.^a Girona

Educación y acoso: ¿coeducamos?

Existe un amplio sector de partidos políticos que evitan hablar de las tres graves segregaciones: clases sociales, etnias, géneros. Algunos incluso niegan la evidencia de que existen. Desgraciadamente lo podemos comprobar en las campañas electorales y en la práctica diaria de algunos que se autodefinen como políticos.

Los partidos no viven fuera de la realidad (aunque a menudo lo parezca), viven en la sociedad y se establece un intercambio mutuo de influencias. Inciden en la opinión pública y al mismo tiempo refuerzan o reformulan sus proposiciones en función de lo que asume una parte de la población, confundiendo, muchas veces, la opinión pública con la opinión publicada. Se alimentan mutuamente: el éxito dependerá de cómo presenten sus propuestas y cuáles sean: es más fácil conseguir apoyos con ideas o ideologías conservadoras del orden establecido, de los status quo, que esforzarse por transformar la realidad. La humanidad, aunque nos parezca contradictorio, ha preferido a lo largo de la historia una organización con jerarquías: una organización que iguale a todos y todas es más costosa. Conseguir la igualdad requiere un cierto esfuerzo mental y psicológico. Es más fácil, por ejemplo, mantener el poder masculino y marginar a los inmigrantes. Todo cambio implicaría una apertura de miras, una actitud y disposición a correr riesgos, a salir de la zona de confort. Quizá sea la explicación de por qué las proclamas antifeministas o antiinmigración de algunos pseudopolíticos son bien acogidas y son replicadas, y a veces aumentadas, en algunos sectores sociales. No es superfluo hablar de los políticos actuales y de sus ideologías. Representan una parte significativa del entorno en el que nos movemos.

¿Por qué se dan más actitudes anti-extranjeros, anti-gitanos o gitanas, anti-jóvenes recién llegados, anti-mujeres de todas las edades? En los últimos años y con el inicio (o continuación) de la crisis de 2008, da la impresión que se haya abierto la veda, parece que se haya dado carta blanca a los que así pensaban pero no se atrevían a manifestarlo, seguramente porque las personas de izquierda estábamos más presentes en la opinión pública y en los espacios de relación y convivencia. Pasada la pandemia la situación no ha cambiado: probablemente ha empeorado desde el punto de vista de la igualdad.

Y podemos preguntarnos: *¿En esta situación qué hacemos en los centros escolares?*

Cierto que la educación es algo que implica a toda la sociedad. Hay multitud de espacios y entidades donde se educa a niños y adolescentes. Jóvenes y adultos seguimos educándonos día a día, a lo largo de la vida. En torno al mundo de la enseñanza y la educación se habla a menudo de los abusos y acosos sufridos por criaturas y adolescentes; unas actuaciones que tienen continuidad fuera de las escuelas, algunas en el ámbito familiar y en otras instancias (ocio, deporte...). Las redes amplifican los acosos. Niños, niñas, adolescentes, mujeres de cualquier edad, como decíamos, personas con orientaciones sexuales minoritarias, las padecen.

Merece la pena reflexionar sobre ello.

Nos preocupamos mucho, y es necesario hacerlo, de las metodologías, de la innovación en los centros escolares, de poner el alumnado en el centro del proceso de aprendizaje. ¿Nos

preocupamos también en la misma medida para conocer a los niños o adolescentes y su entorno sociofamiliar? Quizá esto sea incluso más importante para ayudar a sus aprendizajes y, evidentemente, para avanzar en su educación.

Podríamos creer que con la escuela mixta que tenemos, descontando las graves excepciones de escuelas de élite que segregan por sexo, hemos conseguido ya llevar a cabo una coeducación. Sin embargo, diría que estamos algo lejos de haberlo logrado. Si la sociedad es patriarcal o machista es muy difícil que la escuela coeduque, aunque formalmente sea mixta. El modelo masculino dominará en los centros escolares y sufriremos esta situación.

Veamos: ¿Los currículos prescriptivos (que no hace falta seguir, claro) establecen la igualdad o contienen un cierto sesgo? ¿La presencia de las mujeres se equipara a la de los hombres en todos los campos del conocimiento? ¿A la hora de tratar al alumnado mantenemos la igualdad pretendida? (Sin darnos cuenta dedicamos más tiempo y atención a los niños que a las niñas). ¿En los patios se reparte adecuadamente el espacio entre chicos y chicas? ¿Orientamos los estudios futuros sin tener en cuenta el género del alumnado? La respuesta a todas estas preguntas es NO. Todos estos elementos serán (son) el campo de cultivo de posibles abusos y acoso. Acabada la escolarización obligatoria, tendrán que enfrentarse al mundo adulto. Encontrarán las segregaciones en el mundo laboral, las desigualdades en los trabajos del hogar, en el cuidado de los hijos e hijas...

Manteniendo la doble o triple red escolar abonamos las segregaciones por clase social. Y ayudamos a mantener la segregación de género. Con la separación entre escuelas públicas y concertadas estamos visualizando que ricos y pobres no son iguales, que no merecen la misma enseñanza. Autóctonos y recién llegados no son aceptados en igualdad. ¿Nos extraña que no haya igualdad de géneros? La existencia de los conciertos en escuelas privadas y el pseudoderecho a escoger centro son dos pilares que apoyan la situación que hemos descrito.

Si aceptamos en la práctica diaria las segregaciones por razón de clase social, de origen cultural..., ¿por qué no aceptar la segregación de género? Sólo una actitud de rechazo a todas las segregaciones nos llevará a afrontar las desigualdades.

No es ninguna sorpresa que uno de los caballos de batalla de las derechas políticas sea negar las violencias machistas. Incide en un elemento básico: el papel de las mujeres, subordinado o igualitario: el tuétano de todas las desigualdades. Propuesto y aceptado su papel subordinado, es lógico añadir otras desigualdades y discriminaciones: por razón de etnia o de clase social, también evidentes en todo nuestro país y en toda Europa.

Se habla, bastante y bien, de la escuela inclusiva. ¿Se lleva a la práctica? ¿Aplicamos consecuentemente todos los valores que exponemos en los proyectos educativos de centro? ¿Estamos haciendo una auténtica educación intercultural que tenga en cuenta todas las diferencias? ¿Se encuentran bien acogidas todas las criaturas sea cual sea su clase social familiar, su procedencia, su orientación sexual? Si constatamos un aumento de los abusos y acosos, seguramente estará en consonancia con todos los demás abusos por motivos económicos o culturales.

Para acercarnos a la igualdad, debemos conseguir una *verdadera coeducación*, que trate con equidad a chicos y chicas, niños y niñas. Que respete las orientaciones sexuales de todos. Que

colabore con la amplia diversidad de familias que se reúnen en cada centro escolar. Unas actuaciones que corresponden al sistema de enseñanza y ayudan al esfuerzo global en pro de la igualdad. Un avance en la lucha necesaria contra los abusos y acosos. Con una escuela coeducadora podremos ofrecer formación sexual y afectiva que animará a convivir sin violencia, sin que nadie se sienta superior.

Todas las personas somos distintas, por suerte, ya que de lo contrario la vida sería muy aburrida. Valorar las diferencias, potenciar lo mejor que tenemos cada uno y cada una nos ayudará a no discriminar a nadie y avanzar hacia la igualdad.

[Joan M^a Girona es maestro y psicopedagogo]

J.-R. Capella, A. Giménez Merino y J. L. Gordillo

Conversación con Fabio Ciaramelli

La ciudad de los excluidos. La invivible vida urbana en la globalización neoliberal

Fabio Ciaramelli

La ciudad de los excluidos. La invivible vida urbana en la globalización neoliberal. Trad. de J.-R. Capella y V. M. Vassallo, Trotta, Madrid, 2023.

El jueves 18 de mayo tuvo lugar la presentación de la edición española de este libro, en que conversamos con el autor. A continuación, se reproducen, primero, las preguntas que le formulamos sobre los temas centrales del libro, seguidas de la respuesta unitaria que nos dio Ciaramelli, facilitada también por escrito para esta publicación. La presentación puede verse enteramente en el canal de YouTube de la editorial, [clicando aquí](#).

* * *

Juan Ramón Capella

El libro trata de la ciudad contemporánea, aunque parte de lo que ha sido la ciudad antigua, la ciudad de la convivencia entre los diferentes (sin embargo amurallada). Ciaramelli se recrea en la ciudad tal como la vio Max Weber, y luego en los rasgos de la ciudad moderna, con la aparición de la multitud tal como la vieron Baudelaire y Walter Benjamin. A partir de ahí, llega a la ciudad consumista. Aparece el rechazo a la inclusión, al mismo tiempo que se están dando grandes migraciones de gente que debería ser incluida. En esto se detiene el autor, en el impacto de las violaciones de derechos, en la gentrificación, mientras se excluyen poblaciones de barrios enteros, pobres, para construirlos de nuevo para clases sociales más ricas. En Barcelona tenemos un ejemplo en la ciudad del alcalde Maragall, que con la excusa olímpica liquidó el viejo barrio chino de la Barcelona histórica para construir el integrado Raval, que no tiene nada que ver. Aparece así la ciudad global, la ciudad excluyente que sin embargo transita hacia la ciudad mestiza, la ciudad que puede sufrir directamente la guerra, la ciudad que es objetivo bélico.

El autor —que obviamente está por los excluidos— hace hablar a cuantos autores han tenido algo que decir sobre la ciudad, lo que hace imprescindible este libro para cualquier politólogo, sociólogo o filósofo que se precie, pues realiza preciosas sugerencias en caminos que quedan abiertos. Creo que, sustancialmente, la discusión puede transitar por aquí.

No puedo negar que el libro de Ciaramelli me ha entusiasmado de verdad, aunque le he encontrado una pega. Su visión del Mediterráneo, que corresponde quizá a una época anterior, resulta demasiado optimista ante lo que varios países europeos han provocado en la orilla sur de este mar. De Libia a Egipto, pasando por el Líbano, el Mediterráneo es hoy la tumba de muchos naufragios, el símbolo de un naufragio civilizatorio nuestro, y eso debe ser tenido en cuenta, además de un punto que en cambio habla muy bien de los pueblos ribereños. Me refiero a su creatividad, a la creatividad de sus cocinas, un hecho único en el mundo: de la musaka griega, al

cuscús o al tajine marroquí, de los arroces del levante español a la bullabesa, a las cocinas del Véneto o genovesa, de la cocina siciliana a la napolitana... Creo que, en lo tocante a civilización, a pesar de las terribles circunstancias actuales, los pueblos mediterráneos no tienen nada que envidiar a los anglosajones, cuyas cocinas son realmente infames.

Antonio Giménez Merino

[Sobre la «Sociedad civil»]: En la primera parte del libro nos recuerdas que el concepto de Sociedad Civil —que vinculas a la vida en las ciudades— originariamente se configura como un contrapoder del absolutismo. Sin embargo, la globalización ha generado una «Sociedad Civil Global» muy distinta, dominada por un poder económico privado con capacidad de determinación de las políticas públicas al que la gobernanza ha prestado legitimidad. No estoy tan seguro como tú de que esta Sociedad Global carezca de instrumentos de gobierno, y que su afán de lucro inmediato la haga completamente ciega a la autoinmolación que puede suponer el deterioro de la demanda en un mercado con capacidades cada vez mayores de producir. Por otro lado, vistas las cosas desde abajo, tu descripción de la convivencia urbana de hoy es muy poco alentadora.

¿En qué sentido, Fabio, crees posible seguir manteniendo esa concepción emancipatoria que atribuyes a la Sociedad Civil? Y ¿te parece que los mercados globales siguen siendo indiferentes al problema del ensanchamiento de la pobreza?

[La «mutación antropológica»]: Tu análisis sobre la pasoliniana mutación antropológica que ha producido el consumismo evoca en cierto sentido las voces que desde la ciencia sostienen que nos encontramos ya ante una nueva especie humana distinta del *sapiens*, que se mueve entre una especie de inercia autómatas e impulsos viscerales (por eso decía Pasolini que nos habíamos convertido en una sociedad de potenciales homicidas). Un proceso que parece agigantarse con la digitalización y los algoritmos.

La cuestión es importante porque, de ser plausible, podría significar que no hay salida a los problemas de especie a que estamos abocados y sobre los cuales reflexionas en tu libro. Sirva de ejemplo que, mientras en España estamos en plena sequía y en Italia se producen inundaciones catastróficas, lo que parece preocupar a mucha gente es si podrá llenar sus piscinas este verano...

[Perspectivas de futuro]: Una idea central del libro es que «el derrumbe de la esperanza de incremento ilimitado del consumo constituye sin más el principal malestar de la sociedad contemporánea». Sin embargo, aspectos como la inhabitabilidad de las ciudades, la insostenibilidad medioambiental o la escasez de servicios públicos tan esenciales como la sanidad están cada vez más en el centro de las protestas sociales.

Por otro lado, la crisis socioeconómica de la Covid ha alumbrado algunas novedades de la intervención pública que parecen ir en una dirección opuesta a la política neoliberal de las últimas décadas. Así, la asunción de la renta básica, cierta reacción a la feminización de la pobreza, la flexibilización del MEDE, el incremento del salario mínimo —especialmente en Alemania— para hacer frente a la inflación, una contrarreforma laboral en España que recupera derechos o, más recientemente, el reconocimiento en la UE de la necesidad de flexibilizar la entrada de inmigrantes por la falta de mano de obra en sectores esenciales.

¿No crees que todo esto abre en cierto modo un panorama algo distinto que el que parece delimitar en tu ensayo?

[Nápoles]: En una visita reciente a Nápoles me pareció que, mientras los museos estaban semivacíos, el centro se ha convertido en un tugurio turístico tomado por viajeros incapaces de ver lo que llamas en tu libro «los bajos» de la ciudad. Algo que también sucede hace tiempo singularmente en Venecia, donde los venecianos abandonan la ciudad por el coste de la vivienda y Airbnb tiene 7.000 anuncios de alojamiento, el 33% de los cuales pertenece a un 5% de propietarios.

¿Qué ha sido de aquella Nápoles aislada en los márgenes de la historia y sus discursos de la que también nos habló Pasolini y de la cual te haces eco en la última parte del libro?

José Luis Gordillo

Lo que más me ha interesado de tu libro es lo referente a la ciudad y la ecología. En torno a eso y al futuro de las ciudades, además de la exclusión que describes, hay más cuestiones que tendremos que afrontar en el futuro. Según la UE y el Consejo, hay que proceder a una descarbonización de las economías, es decir que, para alcanzar los objetivos señalados en los acuerdos de París de 2015, hay que reducir a cero la emisión de gases de efecto invernadero de aquí al 2050. Si uno se pone a pensar lo que esto significa si realmente se quiere llevar a cabo —aunque creo que contiene una parte algo engañosa—, significa sustituir los combustibles fósiles por otras fuentes de energía. Ese es un gran desafío que tienen las sociedades del mundo entero, pero particularmente las sociedades consumistas y, en este sentido, creo que hay que partir de la premisa de que las cosas que nos han permitido hacer los combustibles fósiles —cuyo agotamiento es la razón de fondo de la decisión de la Comisión Europea— no van a poderse seguir haciendo. Tal vez —y esta es una pregunta que te planteo— no sería descartable que en las próximas décadas asistamos a un proceso inverso al de las migraciones del campo a la ciudad que se dieron en el s. XX, básicamente por razones de superveniencia. Todos los que hablan de decrecimiento tienen muy en cuenta esta posibilidad, incluyendo los propios centros de poder (como el *Financial Times*)...

Ciudad sin ciudadanía

Fabio Ciaramelli

Muchas gracias, queridos Juan Ramón, Antonio y José Luis, por vuestra lectura atenta y por las preguntas que me habéis dirigido. Más que elaborar una respuesta completa a las mismas, las aprovecharé para hacer una serie de reflexiones encaminadas a precisar el análisis propuesto en el libro.

Empiezo con alguna observación sobre el Mediterráneo, que, sin lugar a dudas, se ha convertido en un cementerio al aire libre cada vez más abarrotado, surcado por barcos en pertrechos de guerra y barcasas a la deriva atestadas de gente desesperada.

Sin embargo, éste no es un libro sobre el Mediterráneo, sino sobre la ciudad en sus diversas declinaciones históricas del espacio urbano: polis, civitas, metrópolis, megalópolis. En este

contexto, al referirnos a la ciudad en nuestra época, caracterizada por la Gran Migración del Sur Global hacia la ciudad consumista, nos encontramos con la ciudad mestiza. Y como, al menos en Europa, la Migración tiene su punto neurálgico en la frontera mediterránea, veo en el mestizaje mediterráneo el futuro de la ciudad contemporánea.

El encuentro entre las dos orillas del Mediterráneo está ya entre nosotros, es un dato de facto. Todo hace pensar que el mestizaje no hará más que ir adelante y, por tanto, que el futuro de la ciudad global deparará un cruce cada vez mayor entre los pueblos de alrededor de este mar.

Hasta ahora, como consecuencia del colonialismo, el neocolonialismo y la guerra, la relación entre la orilla Norte y la orilla Sur del Mediterráneo ha venido marcada por el atropello y la extrema violencia. Pero ello no excluye ni impide reflexionar sobre lo posible y su sentido. Por ejemplo, en Italia, Franco Cassano fue quien habló más explícitamente del Mediterráneo desde esta perspectiva, que no era ni histórica ni sociológica, sino sobre todo poética o filosófica.

Cassano lo hizo refiriéndose en particular a Camus, que acuñó la expresión *pensée de midi*, traducida por Cassano como *pensiero meridiano*. Camus se refería a su vez al poeta Paul Valéry. No se trata, en los escritos de estos autores, de encontrar una descripción histórica de lo que ocurrió en el Mediterráneo, sino una reflexión sobre lo que podría ser o lo que podría ocurrir; no un relato de los hechos, sino una tematización de lo posible, una invitación teórica y política hacia lo que habría podido (y aún podría) ser de otro modo. Y es precisamente la creatividad mediterránea lo que hace posible este *poder-ser-de-otro-modo* y aquello que, además, podría hacerlo efectivo. A fin de cuentas, estas reflexiones acerca de lo posible, aunque hasta ahora hayan quedado desmentidas por los hechos, lo que hacen es dar testimonio de exigencias y reivindicaciones que nadie puede enmudecer.

La atención a lo posible y a la dimensión de la creatividad es algo que mi análisis toma prestado del pensamiento de Castoriadis y de su teoría de la institución imaginaria de la sociedad. Castoriadis estaba siempre atento a la filosofía en su sentido más fundamental, es decir, a la ontología, a la inteligencia del ser. Y en un momento determinado, escribió lo siguiente: «Lo que es, tal como es, nos permite actuar y crear; y no nos dicta nada. Nosotros creamos nuestras propias leyes; por eso somos también responsables de ellas».

El propio Castoriadis distingue entre la ciudad burocrática o imperial, es decir, la ciudad-sede del poder real, y la ciudad como espacio simbólico y efectivo de contraposición a este poder. Desde este punto de vista sugiere considerar a la llamada «sociedad civil» (en su vertiente contrapuesta al Estado) como sociedad de las ciudades, al ser el escenario de una convivencia animada por iniciativas de transformación social.

La principal forma de oposición a la fuerza excluyente del poder real es la reivindicación de la ciudadanía urbana, en la que se expresan las dificultades económicas, sociales y culturales de tantos «excluidos» que pueblan de hecho las ciudades globales, sin ser siquiera reconocidos.

Es ésta, en mi opinión, la configuración concreta que en nuestros días confiere sentido a la idea de «sociedad civil» como sociedad de las ciudades, volviéndola actual.

El objeto de estas reivindicaciones se hace visible si se tiene en cuenta que cobran sentido a partir de la situación concreta de las ciudades globales, donde las desigualdades y las

exclusiones han dado lugar a la desaparición o a la destrucción de la ciudadanía.

Esto me permite precisar que, desde mi punto de vista, la «mutación antropológica» descrita, pero sobre todo *denunciada*, por Pier Paolo Pasolini en sus últimos años no puede ser interpretada en clave naturalista o neonaturalista. (Marginalmente, añado que la imagen de Nápoles como «la última metrópolis plebeya, la última gran aldea», un último bastión frente a la homologación, vertida por Pasolini en 1974-1975, me parece probablemente superada. En esto comparto tus impresiones, Antonio). Substancialmente, la homologación cultural o la mutación antropológica no son el resultado de una necesidad natural, en relación con la cual la sociedad contemporánea bien podría considerarse irresponsable. La misma metáfora utilizada por Pasolini para referirse a ello («la desaparición de las luciérnagas») no se refiere a la necesidad cósmica de un acontecimiento natural, sino a un producto social: la contaminación.

Volviendo a nuestro tema, pero sacando punta a la referencia a Pasolini, el estado de cosas actual debe ser considerado como el punto de llegada de un proceso histórico, basado en la difusión planetaria del imaginario de la exclusión.

En realidad, lo que se llama la *ciudad*, que aún hoy atrae a un número creciente de personas hacia las zonas urbanas del planeta, sigue prometiendo integración y emancipación, aunque los hechos se empeñen en demostrar que ha agotado esa capacidad integradora.

A escala planetaria, la multiplicación imparable de las desigualdades —que en realidad no se refieren exclusivamente a lo económico, social y cultural, sino que afectan a las condiciones de vida en su conjunto— no sólo es moralmente inaceptable, sino que amenaza la cooperación pacífica de los seres humanos en los espacios urbanos, prácticamente hasta anularla.

En este sentido, quisiera llamar la atención sobre el contraste entre el atractivo de la imagen de las ciudades, todavía el destino predilecto de unos flujos migratorios incontrolables, y la incapacidad de las ciudades «realmente existentes» para acoger e integrar dignamente a masas crecientes de aspirantes a ciudadanos.

Las secuelas urbanas de la pandemia agravaron la situación. La lucha contra la emergencia sanitaria en las ciudades mediante el confinamiento, los toques de queda y la reducción de los desplazamientos y las relaciones sociales tuvo como efecto inmediato el aumento del desempleo, acompañado de la difusión de formas de trabajo aún más precarias (piénsese, por ejemplo, en el reparto de mercancías a domicilio). Al mismo tiempo, el debilitamiento de los vínculos sociales y el aumento de la soledad han intensificado el malestar privado y la decadencia metropolitana. En resumen, el aumento de la desigualdad y la exclusión ha provocado que las ciudades sean aún más inhabitables. Y la «inhabitabilidad» de nuestras ciudades es la excusa ideal para la «incitación a la discordia».

Desde principios del año pasado, la guerra —que también ha hecho su prepotente aparición en Europa— ha incrementado aún más la desigualdad y la exclusión. Sin duda, la invasión rusa de Ucrania ha puesto en entredicho la tendencia de la globalización neoliberal a convertir el mundo entero en un mercado competitivo único. Sin embargo, en lo que respecta al aumento exponencial de la desigualdad, la guerra no sólo no ha conseguido invertir este curso, sino que, en realidad, ha empeorado las cosas.

El agravamiento de las desigualdades urbanas y las laceraciones que esto comporta convierten a las ciudades en algo cada vez más inhabitable, ya que acaban por reducirlas a una porción anónima de espacio geográfico que, para tantísimos seres humanos —más parecidos a súbditos que a ciudadanos»—, se convierte en un lugar de tránsito donde intentar sobrevivir.

Lo anterior es una realidad no sólo para los inmigrantes —los cuales, en su cualidad de extranjeros, casi siempre permanecen legalmente excluidos de la ciudadanía—, sino que es igualmente real para un número creciente de nativos que, expulsados del mercado laboral regular, asisten a la negación de sus derechos y garantías. De hecho, con independencia de su estatus legal, para todas las personas que comparten tal condición de sujeción y sometimiento a las reglas implacables de la *gig economy* no existe la ciudadanía entendida como participación activa en un proyecto compartido. Para ellos, la ciudad ya no es la *civitas* —es decir, el lugar simbólico y efectivo de reconocimiento mutuo—, sino que se limita a la *urbs*, al «espacio catastral» dentro del cual trabajan y al que están subordinados.

La exclusión de todos aquellos que resultan disfuncionales a la maximización del beneficio constituye ahora la forma privilegiada de socialización, practicada a través de la expulsión de la ciudadanía de una «vasta infraestructura paraesclavista», compuesta tanto por nativos como sobre todo por inmigrantes «relegados a papeles serviles o sobreexplotados», con un trabajo mal pagado y no garantizado pero que genera excedentes y servicios sin los cuales la comunidad de los privilegiados «no podría consumir como lo hace».

Al final, contrariamente al pensamiento de Douglas Murray cuando habla de *locura de las multitudes* para denunciar una supuesta dictadura igualitaria de las masas, nuestras ciudades siguen siendo invivibles precisamente porque en ellas prevalecen la desigualdad y la exclusión social.

* * *

A pesar de todo lo anterior, debido a la migración internacional, el número de personas que viven en ciudades —o que al menos aspiran a vivir en ellas— no deja de aumentar, tanto en los países con un elevado crecimiento demográfico como en el resto. Precisamente por haber sido siempre un símbolo privilegiado de la vida en asociación, la ciudad exige la construcción de espacios comunes, adecuados para la convivencia de los seres humanos. En este sentido, la propia oposición entre ciudad y campo se basa en el contraste entre una forma de vida «natural» y una forma de vida «instituida», resultado de una elaboración sociocultural y, por tanto, atravesada por la búsqueda deliberada del cambio y la innovación.

Sin embargo, la construcción de un entorno artificial no basta, por sí sola, para producir como resultado inmediato un espacio efectivamente hospitalario para todas las personas que accederán a él. En otras palabras, *la construcción de un espacio apto para la convivencia de los seres humanos no es un efecto automático de la vida en comunidad, sino que debe buscarse expresamente*. Es decir, debe perseguirse y planificarse. Por tanto, quienes diseñan y construyen espacios urbanos deben proponer también su habitabilidad. En esto consiste la tarea específica de las políticas urbanas. Y es precisamente la necesidad de una transición explícita del construir al habitar a lo que nos invita a reflexionar el bello título de un importante libro de Richard Sennet: *Building and Dwelling (Construir y habitar)*. En definitiva, lo que los estudios urbanos subrayan

con insistencia es la necesidad de «construir» la habitabilidad de los espacios urbanos como espacios públicos y de todos, capaces de «facilitar», en vez de obstaculizar, la convivencia entre los diferentes.

La construcción de la habitabilidad del espacio urbano implica, de hecho, elecciones precisas y esto, a su vez, posturas firmes. Abandonadas a su suerte, las relaciones que se establecen entre los diferentes obedecen exclusivamente a la ley del más fuerte. El predominio «natural» de los mejor equipados en la lucha por la supervivencia amenaza la coexistencia de los diferentes y tiende a la homologación, es decir, a la negación de la diversidad.

Esto es exactamente lo que está ocurriendo en nuestras ciudades, donde la contigüidad espacial se convierte en homologación social, en un celoso encierro en identidades autorreferenciales. De este modo, la globalización neoliberal actual, caracterizada por formas extremas de desregulación y sumisión a los poderes económicos, subordina los espacios urbanos al imaginario de la exclusión y a la aceptación inmediata de la desigualdad como un dato ineliminable, destinado por tanto a multiplicarse y magnificarse. *La ciudad se confirma como un lugar artificial de intercambios, pero se subordina a la lógica imperante del mercado, en nombre del cual la exclusión de los disfuncionales a la maximización del beneficio se convierte en la forma principal de socialización.*

Cada vez más claramente, las ciudades actuales se cierran a la diversidad y pretenden aislar y proteger a los ciudadanos que sólo ven en ella amenazas y peligros. Así, las ciudades globalizadas tienden a concebirse como contigüidades espaciales reservadas a determinadas categorías «seguras» de personas. *El imaginario de la exclusión, basado en la defensa de la identidad y la alergia a las diferencias, tiende a eliminar la interdependencia, es decir, la dimensión relacional de la realidad social y urbana.* El hecho del que partía la reflexión de Aristóteles según la cual la comunidad nace «de diferentes y no de iguales» se convierte en la expresión de la división originaria que amenaza la vida urbana y que, en consecuencia, ésta pretende neutralizar con todas sus fuerzas. La relación, el intercambio, el contacto con la diversidad se perciben exclusivamente en términos de peligro y amenaza.

Sin embargo —y ésta es la cuestión central—, las ciudades concebidas como sistemas cerrados, basados exclusivamente en la lógica de lo rentable y de lo conveniente, no consiguen suprimir ni las relaciones ni la interdependencia mutua entre los seres humanos. Lo único que consiguen abolir y erradicar es la solidaridad. En efecto, las relaciones y la interdependencia son un rasgo estructural de lo humano, y por tanto invariable, mientras que la solidaridad es un logro histórico (muy frágil) que no es difícil marginar y borrar, como demuestra la actual sociedad dominada por el imaginario de la exclusión (del que la *gig economy* es una ejemplificación muy elocuente, aunque no la única). Al liquidar la solidaridad, pero no la interdependencia y la dimensión relacional de la vida urbana, las ciudades globales se ven obligadas a construir un entorno urbano basado en la multiplicación de las desigualdades. Esto conlleva, por un lado, la marginación de todo lo que se interpone en el camino de la maximización del beneficio —que, a su vez, casi nunca consigue traducirse en un aumento del consumo, ilusoriamente prometido a todos pero realmente concedido sólo a unos pocos—. Pero, por otro lado, tiene como secuela casi inevitable una inquietante efervescencia de la agresividad social, que se manifiesta periódicamente en episodios de violencia aparentemente repentinos que sacan a la superficie la miopía autodestructiva de los dispositivos de exclusión. Entre las emergencias pospandémicas y

las consecuencias de la guerra, el dato nuevo sobre el que debemos reflexionar es la aparición de *ciudades sin ciudadanía*.

Quisiera terminar rápidamente con dos precisiones más.

El consumo cuyo aumento indefinido promete ilusoriamente la globalización neoliberal es sólo el consumo individual, mientras que el consumo social es considerado como un «exceso de democracia» que repercute en el gasto público y produce inflación. La pandemia ha revelado la debilidad de este modelo, a lo que ha seguido la adopción de ciertas contramedidas. Ahora bien, no creo que eso haya desautorizado o desmentido el imaginario de la exclusión, al que la globalización permanece firmemente anclada.

Y llego así a la ecología. Partimos de la perspectiva de un cercano agotamiento de los combustibles fósiles, es decir, de las *únicas y exclusivas* fuentes de energía capaces de sostener los ritmos del actual modelo de desarrollo técnico-industrial, sin el cual no sería posible el modelo de vida de las sociedades avanzadas. En consecuencia, se habla mucho de desarrollo sostenible, *smart cities*, etc. Sin embargo, a fin de cuentas, la sostenibilidad emerge sobre todo como la nueva frontera del *business*, cuando lo que se necesitaría es un «nuevo modelo de desarrollo» que trajera consigo decisiones drásticas y transformaciones socioculturales radicales. La toma de conciencia sobre este tipo de exigencias es un primer paso necesario, pero no suficiente. Aún han de darse otros.

[Traducción de A. Giménez Merino]

Antonio Antón

La unidad del frente amplio

Este ensayo tiene tres partes. En la primera hago un análisis sociológico de las características y condiciones para la unión de las fuerzas del cambio. En la segunda explico los trasvases y clasificaciones electorales, así como las responsabilidades políticas ante el fracaso de la unidad. Y en la tercera hago una valoración más general de las dificultades divisionistas que deben superar las izquierdas para consolidar su unidad y reforzar su capacidad transformadora.

La unión Sumar/Podemos salva el próximo gobierno de coalición

Estos últimos días se han publicado dos amplios estudios demoscópicos, del CIS (20/04/2023) y la consultora 40dB (3/05/2023), que apuntan en la misma dirección y que refuerzan el estudio pionero de diciembre de 2022 de la citada consultora, así como recientes encuestas privadas, tal como he analizado en el reciente ensayo «[Sumar/Podemos: un acuerdo posible y necesario](#)». La unión de Sumar y Podemos para las elecciones generales de diciembre de 2023, con un ascenso significativo de su acceso a escaños parlamentarios, favorecería la continuidad de un próximo gobierno de coalición progresista.

No obstante, ambas encuestas difieren sobre la dimensión del electorado socialista y la necesidad de acuerdo con las fuerzas nacionalistas de izquierdas para mantener la gobernabilidad: 40dB lo ve imprescindible y el CIS no. La otra hipótesis, su división, facilitaría la victoria de las derechas y abriría una etapa de involución política y democrática. Ello, considerando el ligero debilitamiento del apoyo electoral al Partido Socialista que da la mayoría de las encuestas (salvo el CIS) y que pretende remontar a través de su credibilidad gestora en su pugna abierta con el Partido Popular y frenando también el trasvase de voto hacia Sumar. Veamos los datos más relevantes de estas fotografías de los electorados que matizan algunos marcos interpretativos habituales.

Fuente: 40dB-Barómetro de mayo, con elaboración propia.

Como se señala en el gráfico adjunto, la diferencia en el acceso a escaños, comparadas las dos hipótesis, es muy grande, derivado de la normativa electoral. En el caso de la unión entre Sumar y Podemos se llegaría hasta 55 escaños (y se deduce por el CIS que entre 50 y 60), con un ligero descenso respecto de la encuesta de diciembre de 2022 (57), con 97 para el PSOE (que bajaría desde sus 120 escaños actuales). El total de la izquierda serían 152 y el total de las derechas (sumados Partido Popular y VOX, con Ciudadanos extraparlamentario) 161; además de 37 para 'Otros', la mayoría los grupos nacionalistas vasco (EH-Bildu y PNV) y catalanes (ERC), que han apoyado la investidura y la mayor parte de la gestión del gobierno de coalición progresista. Está claro que con ese resultado el PP y VOX, sin apenas posibilidad de incrementar más aliados, no podría constituir un gobierno reaccionario de derechas.

En el caso de la división, se considera Sumar la plataforma político-electoral que aglutina todo el conglomerado de Sumar como grupo específico, más Izquierda Unida, Más País/Compromís y sus aliados del acuerdo del Turia, En Comú Podem y Galicia en Común; obtendría 27 escaños y Podemos 11, un total de 38 —como actualmente entre UP/Convergencias (35) y MP/Compromís

(3)—. Es decir, lo que se produciría no es una ampliación de escaños sino una recomposición partidaria de la actual representación, en la que Podemos contaba con 20 escaños y que ahora, en este caso de división, quedaría en poco más de la mitad, aunque lejos del vaticinio de su descomposición o completa marginación. Incluso desde diciembre, hay una ligera diferencia al alza en ambos, más significativa en el caso de Podemos, que pasa de 7 a 11 escaños, y Sumar de 25 a 27.

Fuente: 40dB (Barómetro de mayo) y CIS (Barómetro de abril), con elaboración propia. La participación en 2019 fue del 66,2%. El voto válido estimado para 2023 es el 73,2% (40dB) y 72,9% (CIS). Los votantes para PSOE, UP/Convergencias y MP/Compromís son los reales de 2019. Los de Sumar y Podemos para 2023 son los derivados de la estimación de ambas encuestas.

Como se comprueba en la tabla adjunta, la estimación de voto de ambas encuestas es similar en el caso de Sumar (entre 10,6% y 10,9%) y Podemos (entre 6,7% y 6,9%), con unas décimas más en la de 40dB respecto de la del CIS, en cuyo caso entre ambas fuerzas políticas consiguen una estimación de voto válido del 17,3% (17,8% por 40dB). Su pacto les permitiría consolidarse como tercera fuerza, a distancia significativa respecto de VOX, con las consiguientes ventajas comparativas en la distribución de escaños.

Pero otro dato significativo es la distancia de más de cinco puntos que le da el CIS al voto para el PSOE (30,4%) respecto de la de 40dB (25,1%) —y de todas las encuestas privadas—. Supone que, aunque no entra en la adjudicación de escaños, le daría un colchón significativo tanto en comparación con Sumar + Podemos (entre 50 y 60) cuanto respecto de las derechas, ya que quedaría muy por encima de sus escaños y sería incluso superior a su representatividad actual de 120.

O sea, el CIS daría mayoría absoluta a la coalición PSOE/Sumar (en caso de unión), en torno a 180 escaños, con una correlación interna de 70/30%, en vez de la de 64/36% de 40dB. Pero, sobre todo, ofrece al Partido Socialista la posibilidad de no tener necesidad de acuerdos de legislatura con las izquierdas nacionalistas (EH-Bildu y ERC, y salvando la posibilidad, siempre abierta, del PNV), con sus implicaciones para el programa gubernamental, las alianzas y el modelo de Estado territorial.

La idea que se deduce de los datos del CIS está clara: garantizar el próximo Gobierno de coalición progresista, con un Partido Socialista todavía más fuerte, aunque siga necesitando a un Sumar unido, en el que Podemos tenga un papel secundario y, particularmente, no dependa de las fuerzas nacionalistas de izquierda. Se perfilaría un proyecto de país más moderado en los tres ámbitos fundamentales: socioeconómico, territorial y democrático, incluido los temas sensibles de las políticas feministas, urbanísticos-medioambientales, de inmigración, así como internacionales y de seguridad, que han sido conflictivos con Unidas Podemos esta legislatura. Pero sobre el perfil político y programático de cada fuerza política habrá que volver.

Trasvases de voto y clasificaciones electorales

Conviene precisar varios aspectos a partir de datos del CIS. En primer lugar, el trasvase de votantes. El trasvase de electorado socialista de 2019 (y anterior de UP, en 2015/2016), pasaría de 800.000, en diciembre, a 400.000 votos, ahora. Así, según el CIS un 8,9% del electorado del PSOE, un total de unos 600.000 de sus electores de 2019 votarían a Sumar, mientras a Podemos irían un 1,8%, unos 120.000; no obstante, en sentido inverso, aunque no se sabe de qué área de

UP o MP/Compr., habría un trasvase de un 13,5%, unos 320.000 hacia el PSOE; o sea, tendría un saldo desfavorable de 200.000, aunque combinado con el trasvase a Sumar quedaría un flujo de unos 400.000 a favor del frente amplio de Sumar + Podemos.

Por tanto, existe una volatilidad limitada interpretada por el PSOE con mayor tranquilidad ante la competencia de Sumar (y el intento de neutralizar la fuga por su derecha), que en todo caso conlleva la mayor garantía de la unidad y asentamiento de este espacio a su izquierda para formar el próximo gobierno de coalición progresista bajo prevalencia socialista.

Como complemento, según 40dB, la procedencia global del voto a Sumar + Podemos sería la siguiente: de UP y sus convergencias, 56,5%; del PSOE, 18,4%; de MP/Compr., 4,5%; de nacionalistas, 3,4%, y de 'Otros', 17,3% -donde incluyo el 7,0% de la Abstención, y el 10,3% de otros pequeños, incluido Ciudadanos, junto con Blanco o nulo, NS/NO recuerda y No tenía edad.

En segundo lugar, lo destacable que distorsiona el análisis, similar a la encuesta de diciembre de 40dB, que ya comenté, es el doble papel para Sumar, como plataforma-paraguas para el conjunto y como grupo político específico complementario de los existentes. En particular, los más relevantes, con los que Yolanda Díaz y su equipo debe articular la unión y cuya representatividad electoral, con proporcionalidad pura de escaños y la corrección territorial en los casos contrarios de IU y ECP, ofrecía los siguientes resultados (pongo entre paréntesis la distribución de los 57 escaños previstos): Sumar, como grupo específico (21), Podemos (17), Izquierda Unida (4), En Comú Podem (7), Más País/Compromís (7), Galicia en Común (1); otros menores, como Equo y Alianza Verde o los aliados del acuerdo del Turia deberían encajar en esos números.

Por tanto, durante estos seis meses y en una dura pugna político-mediática por la definición del espacio y su primacía dirigente, se va clarificando esa doble realidad del carácter político-institucional de Sumar —aparte de su papel cívico—, que permite una negociación más realista y respetuosa de la aportación de cada cual al conjunto. Al mismo tiempo, destaca la necesidad de una coordinación más colegiada y plural que el exclusivo liderazgo de Yolanda Díaz, apoyada por todas las fuerzas políticas como su candidata, pero todavía sin articular una representación equilibrada y consensuada que ordene la composición del próximo grupo parlamentario y la orientación y gestión institucional. Es lo que junto con la foto del 28M, corregida con el efecto de la credibilidad estatal, particularmente para los casos de Madrid y Comunidad Valenciana, permitirá un mayor peso del principio de realidad para negociar una solución pactada, unitaria y plural, con la correspondiente participación democrática.

En tercer lugar, conviene completar la información del CIS con otros datos adicionales para señalar su adecuada interpretación, haciendo referencia a la clasificación del electorado de En Común Podem. Está claro en esta confluencia, y más considerando que las dos personas más influyentes del equipo de Sumar para la negociación del acuerdo con los partidos políticos proceden de Catalunya en Común —uno proveniente de ICV y otro del errejonismo—, que su máxima representación se ha decantado por Sumar como referencia estatal, aunque mantienen la apuesta por la colaboración y la mediación con Podemos, en el marco del grupo confederal de Unidas Podemos, ECP y Galicia en Común, promueven la unidad de ambos y conservan su soberanía para decidir sobre sus listas electorales y presentarse como coalición autónoma, así como con la alianza con Podem.

Pues bien, en la encuesta pública se agrega a Sumar todo el electorado a ECP, pero los datos dicen una cosa sorprendente: casi la mitad (46,5%) de sus votantes prefiere el voto a Podemos en vez de a Sumar (y el 27,6% a Sumar, el 5,3% a PSC/PSOE y el 4,3% a ERC). Así, aparte de otras consideraciones políticas, respecto de la imagen de la representatividad global, la agregación de las opciones reales de su diverso electorado supondría una nueva relación global del 9,6% para Sumar y del 7,7% para Podemos.

Además, si solo valoramos a Sumar como fuerza específica, es decir, sin agregar los electorados que dicen que van a votar a Más País/Compromís, Izquierda Unida y las confluencias catalana y gallega, tal como he comentado en otra parte, el porcentaje específico recibido por Sumar sería del entorno de cinco puntos, estrictamente el sector 'yolandista', compuesto por ese porcentaje aludido proveniente del PSOE (8,9%), más un tercio del voto a UP —incluido las dos convergencias— y dos tercios del voto a Más País/Compromís, con fugas significativas del 11,4% de Más País hacia Podemos —se supone que fuera de Madrid, donde tienen poca utilidad para acceder a un escaño— y del 20,4% del electorado de Compromís, que iría hacia el PSOE.

En definitiva, aplicada su representatividad con esa proporcionalidad pura, sin otros filtros y según los datos de 40dB, sus 55 escaños previstos para el conjunto de la unión corresponderían de la forma siguiente: Podemos 24 y Sumar 31 —como convergencia actual—, distribuidos éstos, aproximadamente, entre 15 para Sumar como grupo específico y 16 para repartir entre IU, ECP y MP/Compromís.

En cuarto lugar, la autoubicación ideológica en la escala izquierda (0) a derecha (10), según 40dB, es la siguiente: Población en general, 4,8; PSOE, 3,5%; Sumar, 2,6, y Podemos, 1,9. Expresa que, con representatividad de los tres grupos políticos en los distintos segmentos desde el centro hasta la extrema izquierda, dado su diferente peso relativo en cada uno de ellos, la media de sus electorados se sitúa en la izquierda —moderada en el caso socialista y transformadora en el caso de Sumar y Podemos— y que la media del electorado de Sumar se coloca en una posición intermedia entre la de los otros dos.

Responsabilidades ante el fracaso unitario

La encuesta de 40dB ofrece datos significativos sobre la adjudicación de responsabilidades políticas por la posibilidad de la división entre Sumar y Podemos. En el gráfico adjunto destaco la opinión de los electorados de Podemos y de Sumar —con el resto del conglomerado—.

Fuente: 40dB —Barómetro de mayo—, con elaboración propia.

En el liderazgo de Podemos figuran Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra, y en el de Sumar, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Alberto Garzón, Ada Colau y Joan Baldoví (en diciembre de 2022, Mónica Oltra). A cada bloque he añadido las respuestas 'Todos por igual', en el caso de Podemos (8,9%) y de Sumar (5,5%). Es bastante ilustrativo el entrecruzamiento de responsabilidades existente en ambos electorados, admitiendo en cada bloque en torno a un tercio la responsabilidad de los líderes propios y en torno a los dos tercios la responsabilidad de los líderes del otro bloque.

Contrasta, aparentemente, con la opinión expresada en diciembre, en aquella ocasión por votantes de UP, que achacaban a responsabilidad casi por igual a ambas partes (49,3% al liderazgo de Podemos y 46,3% al liderazgo de Sumar), respecto de votantes de MP/Compromís (61,8% y 31,6% respectivamente), que se acerca al actual electorado de Sumar; aunque al diferenciar la desigual opinión de Podemos, por un lado, e IU y ECP, por otro lado, sería coherente con los resultados actuales.

Significa que, a pesar de la dura pugna mediática por el relato sobre las causas de la posible división, con la opinión dominante de la responsabilidad del liderazgo de Podemos y la exculpación del de Sumar, se mantiene una saludable crítica con una composición mixta y, al mismo tiempo, divergente en ambos electorados. Eso sí, poniendo de manifiesto la gran responsabilidad de ambas élites en el posible fracaso unitario, cosa oscurecida en la opinión publicada pero que induce a una mayor cooperación constructiva y unitaria.

En definitiva, más allá de cierta pugna competitiva el 28M, particularmente en Madrid y la Comunidad valenciana, por el reequilibrio representativo y la prevalencia en la articulación y representación global, hay una aproximación hacia un mayor realismo sobre la representatividad de cada fuerza política y las implicaciones negativas de la división. Se refuerza la necesidad del reconocimiento de la aportación relativa de cada parte, que permita un acercamiento a una solución respetuosa y satisfactoria que incida en el aspecto principal: la garantía de una ampliación electoral y de presencia institucional del conjunto de las fuerzas del cambio o frente amplio, particularmente de la mano de la unión entre Sumar y Podemos, que junto con el mantenimiento del electorado socialista, permita un nuevo gobierno de coalición progresista que consolide otra etapa de avance social y democrático.

La articulación de la representación política

En varios textos recientes y anteriormente he realizado distintos análisis sociológicos sobre las tendencias sociopolíticas entre las bases de las izquierdas y fuerzas progresistas, así como las características de la recomposición de la representación de las fuerzas del cambio, en particular, la pugna por su primacía y la relación entre Sumar y Podemos. Su unión electoral aparece como una condición clave para reeditar un nuevo Gobierno de coalición progresista, con una influencia más significativa de la izquierda transformadora para garantizar la consolidación y ampliación de los avances sociales y democráticos en la siguiente legislatura.

Ahora me detengo en un aspecto más general: el complejo camino para articular las élites

representativas y dirigentes de este conglomerado llamado frente amplio o fuerzas del cambio, en esta nueva fase de reequilibrio global entre sus grupos políticos más relevantes y la definición y gestión de las tareas, estrategias y alianzas para profundizar en esa transformación sustantiva del país y su contexto. Hago alusión a un tipo de problemas, ya endémicos en la historia de las izquierdas: sus inclinaciones hacia la división y la pugna corporativa y/o doctrinaria, con la consecuencia de limitar su capacidad transformadora igualitario-emancipadora, a gran escala y en el marco europeo, salvando circunstancias excepcionales.

Las élites de derechas tienen una relación diferente a la de las izquierdas respecto de las estructuras socioeconómica, cultural y de poder. La burguesía ascendente, frente a las estructuras del Antiguo Régimen, se fue consolidando en el interior de éste, con el desarrollo capitalista, la pugna cultural y los conflictos político-institucionales, hasta ser hegemónica. Su poder institucional e ideológico estaba también asentado en una burocracia estatal y de seguridad y, particularmente, en una estructura de control económico, basada en la desigualdad social y la subordinación popular, desarrollada en varios siglos: primero, mercantil, luego industrial y, finalmente, financiera. Sus élites representativas o sus partidos políticos, sin llegar a ser un simple consejo de administración para la gestión pública, estaban interconectadas con ese poder real. Dicho de otra forma, los poderes fácticos (socioeconómicos, ideológicos, institucionales) tienen una influencia decisiva, con puertas giratorias y flujos corporativos, en la implementación de las políticas públicas y la gestión de su representación institucional. El principio de realidad, de los intereses y demandas que se defienden, se impone de forma más directa y explícita sobre la composición y la gestión de sus élites políticas.

Las élites de izquierdas, en estos Estados capitalistas o de mercado europeos, no tienen una base estructural de poder consistente en las distintas esferas: intervención y regulación económica, control del aparato estatal e ideológico-mediático. Su capacidad transformadora deviene de su fuerza social y democrática, de su arraigo y capacidad de articulación de las mayorías populares, de su peso en las instituciones representativas. Y, derivado de ello, de su capacidad y legitimidad de gestión institucional, normalmente en los ámbitos intermedios: gobiernos municipales y autonómicos y parlamentos, así como el acceso a posiciones gubernamentales en una posición secundaria respecto de las estructuras fundamentales del poder o las políticas de Estado, con cierta influencia limitada a través de la concertación social, en el ámbito empresarial o con la colaboración en organismos para-institucionales y participativos. Los auténticos poderes fácticos, más en el ámbito internacional, se escapan al control democrático y, en particular, a la influencia de las izquierdas. De ahí que las propias instituciones representativas estén en crisis por su impotencia para satisfacer el bien común.

Dejo al margen la caracterización de la socialdemocracia europea, con una posición ambivalente entre los dos campos sociopolíticos. Su pertenencia doble, con la ambición de centralidad, sucumbe cuando se manifiesta el conflicto entre las corrientes de fondo, de la involución neoliberal, regresiva y autoritaria frente a una dinámica de progreso del bienestar social y democrático. A diferencia de las décadas gloriosas del pacto keynesiano y el desarrollo del Estado de bienestar, supone su crisis política y representativa, si no se aborda la fuente de poder democrático fundamental: la respuesta suficiente a los intereses y demandas de la mayoría popular de la sociedad frente al poder establecido.

Así, para la izquierda transformadora o las fuerzas del cambio de progreso, es fundamental

ampliar su capacidad articuladora y representativa con la mayoría social. Es su base de poder democrático, mediando sus procesos sociales y electorales. Sus élites políticas o representantes institucionales pueden tener una relativa vinculación con sus electorados o bases sociales, cierto contrato social en base a los programas o proyectos legitimados en sus procesos participativos. Pero no suelen tener unas fuertes y amplias estructuras de articulación sociopolítica y cultural con las que mantener una interacción o diálogo con los grupos sociales, más o menos dispersos, desde la autonomía de cada cual, que condicione su propia autonomía decisoria y gestora, aunque se palie con distintas consultas.

Se ha hablado mucho de la legitimidad de origen —y su parcial agotamiento— de las fuerzas políticas del cambio como expresión del proceso de protesta social de todo el lustro de 2010/2014, conocido como movimiento 15-M y que fue mucho más amplio y diverso, incluido las variadas mareas y huelgas generales contra los recortes sociales y por la justicia social y más democracia. Pero, salvo la cuarta ola feminista, con una gran participación, movilización general y apoyo social durante casi un lustro, con la correspondiente pugna por su orientación, la activación cívica y su articulación y persistencia en amplios y organizados movimientos sociales, es débil; aunque haya corrientes de opinión significativas o movilizaciones parciales relevantes, como son la concienciación y la actividad medioambiental y por las pensiones públicas, la vivienda o la sanidad pública. Podemos decir que lo más consistente y continuado, como estructura organizada, ha sido el sindicalismo, por un lado, y el nacionalismo periférico, por otro, particularmente el catalán y el vasco.

Pues bien, la representación política de esa amplia base social de izquierdas o progresista, con esa articulación sociopolítica y cultural limitada, tiene unas características específicas, diferenciadas de las de derecha (o las del Partido Socialista, con su doble pertenencia). Por un lado, son más autónomas al no tener una dependencia directa de estructuras organizadas de contrapoder social (movimientos sociales), institucional (burocracia político-institucional, incluida la judicial y de seguridad) o económico (empresarial, sector público y tercer sector). Por otro lado, también tienen una menor conexión estable y articulada con su base social popular, que no pueden resolver por la simple interpelación pública o el alegato continuado de su representación de la gente, el pueblo o las familias trabajadoras.

En ese sentido, de menor fluidez relacional, los dirigentes políticos progresistas suelen ser menos realistas respecto de los intereses y demandas, más o menos explícitos, de su base social representada y poco articulada, las capas populares, más difíciles de obtener sin un profundo arraigo social. Por tanto, en los dos últimos siglos, existe cierta inclinación al idealismo entre las fuerzas alternativas, a la sobrevaloración doctrinaria del discurso o el programa/proyecto para conformar fuerza social.

El protagonismo se tiende a centrar en la búsqueda de legitimidad y apoyo electoral a ese liderazgo. Así, se expande la pugna discursiva, medio preferente para competir por la legitimidad de los distintos grupos que aspiran a su representación, orientación y gestión institucional. Se ponen en primer plano los componentes corporativos o sectarios de los distintos núcleos dirigentes o aspirantes a ello, dejando de lado el auténtico proceso selectivo y cooperativo que debería curtir la representatividad y capacidad articuladora: la acción colectiva democratizadora e igualitaria de las relaciones sociales.

La consecuencia es la infravaloración de lo más importante para la acción política: la vinculación y generación de activación popular, siendo realistas de los distintos momentos y contextos, con la idea de fortalecer la participación democrática o, dicho en otros términos, la capacidad contractual y transformadora del contrapoder popular. De forma sociopolítica, a través del estímulo a las demandas reivindicativas o conflictos sociales por la pugna distributiva, cultural y democrática frente a discriminaciones y subordinaciones concretas. De forma político-electoral-institucional a través de la acción política reformadora y participativa. El cambio de la subjetividad y las mentalidades y la pugna cultural e ideológica deben estar vinculados con la experiencia relacional de las mayorías sociales en pro de sus derechos y la mejora de sus condiciones vitales, objeto fundamental, así como con la influencia político-institucional.

Por tanto, el aspecto principal para garantizar una fuerte y unida representación política es su arraigo social, su conexión real con la gente para su activación en defensa, aceptada y explícita, de sus intereses y demandas, inmediatas y más generales. Y de ello se deriva su intermediación interpretativa e institucional en el proceso reformador sustantivo y real.

Es cuando se prestigia la política o los grupos políticos, al menos los progresistas y de izquierda transformadora. Y es cuando el factor de la unidad política, no solo electoral, se vuelve más fundamental en cuanto va dirigido a esa tarea articuladora de la activación cívica frente al poder establecido y por una alternativa de progreso para el país. De ello dependerá su traslación al campo electoral e institucional y, en definitiva, los cambios estructurales y de la relación de fuerzas políticas.

Es la auténtica política útil o transformadora en beneficio sustantivo de la mayoría popular y de garantía de las condiciones políticas necesarias para consolidar el cambio social y de progreso para la próxima década. Es el largo y complejo camino para la formación y consolidación de una representación política unitaria y con fuerte sentido social, ético y democrático.

El Lobo Feroz

Epitafio

Aquí yacerá
una mujer mala
y malvada
I.D.A.

No hay mal que cien años dure

Juan Bordera

El decrecimiento a debate en el corazón de la bestia

Durante tres días, del 15 al 17 de mayo, el Parlamento Europeo ha acogido un evento —que más nos vale que sea— histórico. *El Woodstock del poscrecimiento* lo han llamado algunos. [En el ciclo de conferencias Beyond Growth](#), organizado por 18 europarlamentarios de distinto color, muchas de las mejores cabezas del planeta al respecto de la cuestión del decrecimiento/poscrecimiento han debatido con algunos de los políticos más importantes del continente.

El primer plenario iba a ser una suerte de muestra de lo que estaba por venir. De la fractura que está abriéndose cada vez más entre ciencia y política. Una fractura entre las evidencias irrefutables de la urgencia científica, y los límites de la *realpolitik* de la Unión para lograr transformaciones que no sean parches, o aún peor, disfraces. Si siguen el relato de lo acontecido, verán que, pese a todo y pese a todos, sí hay una salida para Europa y para el resto del mundo.

A la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, no les tocó el papel de malas de la película. Eligieron representarlo. Ante un público que abarrotaba el hemiciclo, y muy favorable a abandonar los eufemismos —al menos durante tres días—, decidieron abrir el evento con un gran jarro de agua fría. Metsola eligió defender la necesidad de promover más crecimiento en la apertura de un evento diseñado, por fin, para lo contrario. Von der Leyen fue más hábil y al menos concedió que “el modelo de crecimiento fósil está obsoleto”, evidenciando la estratagema que muchos poderosos van a seguir desde ahora: crecer será posible con energías renovables, captura y secuestro de carbono y *unicornios voladores*. De hecho, es la misma estrategia, calcada, que la que se va a seguir en la [COP28, presidida por un jeque del petróleo](#). La captura y secuestro de CO₂, de momento, es un sumidero de recursos que funciona sólo [para captar y secuestrar FON2](#) públicos, y como tapadera/cobertura gatopardista para seguir engañando al personal.

Afortunadamente, tras Metsola y Von der Leyen se escucharon pocas voces más —todas institucionales, y algunas directamente abucheadas— que se atrevieran a negar la evidencia: el debate más crucial del siglo XXI no va a ser otro que cómo convertir nuestros sistemas económicos en unos que no necesiten crecer. Para empezar porque no va a ser posible hacerlo por mucho tiempo, salvo a costa de dejar fuera de la tarta menguante a cada vez más gente.

Si hay una intervención que explica a las mil maravillas —y en apenas diez minutos— por qué lo del crecimiento verde es un oxímoron imposible e indeseable, esa fue [la segunda intervención del economista de la Universidad de Lund, Timothée Parrique](#). A Metsola y a Von der Leyen, a quienes apeló indirectamente, les debieron pitar los oídos.

Pero entrando ya en el debate que realmente importa, el cómo maniobrar concretamente, voy a tratar de dibujar un camino de salida que se puede entresacar juntando algunas de las aportaciones. Comencemos pues con la primera obviedad: que esto va, para empezar, de ir a por los megarricos. Sin políticas de redistribución agresivas no hay nada que hacer. Milena Buchs apostó por tasar la riqueza (stock) y no tanto los ingresos (flujo), para favorecer el funcionamiento

transicional del propio sistema. Simone D'Alessandro introdujo una cuestión también crucial, el gasto militar. Cada euro gastado en aumentar los ya inflados presupuestos militares nos aleja de una solución coordinada al mayor reto que enfrenta la humanidad.

Con estas dos cuestiones, solamente, ya tendríamos muchos fondos disponibles para lanzar un programa lo más global posible (aunque podría comenzar siendo europeo) de reducción de la jornada laboral, renta básica universal, en dinero, o de servicios básicos universales, en especie (esto es, garantizar lo básico a todo el mundo, y parece obviamente más útil en un contexto que puede ir hacia la inflación o incluso la estanflación); y para acabar con este trinomio *semimágico* —porque admitamos que no va a ser fácil lograrlo—, rentas de emergencia y/o recetas de trabajo garantizado para las personas que trabajen en sectores que necesiten reconversiones o apoyo especial: agricultura ecológica, turismo, automoción, armas, etcétera. Nadie dijo que fuera fácil, pero el camino más interesante transita inequívocamente por aquí.

Otro gran debate se dio con el tema del lucro. Contener el lucro dentro de unos parámetros de sostenibilidad, defendido por D'Alessandro, parece la mejor opción disponible. No tratar de erradicarlo —defendido por Parrique—, porque eso es un objetivo tan maximalista que muy difícilmente podrá llegar a conseguirse, salvo en un tiempo que no tenemos. Además, no es el principal problema. Pensemos: si acabamos con el lucro pero seguimos pretendiendo crecer al 3% anual, el problema de la desigualdad desaparece con el tiempo, pero el del choque contra los límites planetarios, el más urgente, se queda prácticamente igual. Obrando al revés, eliminando el crecimiento, pero manteniendo un “lucro controlado”, quizá la desigualdad tarde más en estar adecuada a la justicia social, pero el problema más urgente sería atajado con rapidez. El principal problema es el crecimiento. Aunque atajar ambos problemas a la vez sea sin duda lo deseable, apostando por cambiar el modelo socioeconómico del capitalismo por uno que planifique mejor qué hacer con los recursos, y priorice el bienestar y satisfacer necesidades, en definitiva: el buen vivir. Simplicidad y suficiencia fueron dos palabras que también se escucharon muchas veces, especialmente en la boca de la autora del IPCC, Yamina Saheb. En esa línea, el economista Dan O'Neill aportó la propuesta de salarios máximos. Y por supuesto, se apostó por fomentar al máximo el cooperativismo y la economía social.

Las luchas decoloniales estuvieron también muy presentes. También el feminismo y la economía de los cuidados. Vandana Shiva fue quien expuso el dato que más debería avergonzar al mundo “civilizado”: el 80% de la biodiversidad que tanto nos protege y salva está en manos de los pocos pueblos indígenas que hemos permitido que sobrevivan, esos que consideramos atrasados desde nuestra tecnoatalaya colonial. La brecha Norte-Sur en realidad se da más bien entre bolsillos. Hay bolsillos del Norte en el Sur y viceversa —pero los grandes suelen ser hombres en ambos casos—.

De ese debate, otra obviedad: decrecer es una cuestión urgente sólo para los países ricos, porque así van a liberar espacio para que otras naciones puedan desarrollarse, crecer, y así encontrarse en una suerte de economía de estado estacionario o poscrecimiento. Este punto es compartido mayoritariamente: Europa —junto con sus descendientes, Estados Unidos y Australia— ha sido la mayor beneficiada históricamente por la colonización. Ahora nos debería tocar asumir su justa contraparte.

Pero en el corazón de la bestia hay más tinieblas que luces. Lo que Von der Leyen realmente

plantea —con la competencia con EE. UU. y los países emergentes como pretexto— es justo lo contrario: [rebajar legislaciones “verdes” que han sido hasta ahora cobardes, insuficientes y tibias](#). Todo debe ser sacrificado en el altar del auténtico dogma de fe de nuestra era: el imposible crecimiento infinito en un planeta finito. Siempre sostenido por el otro dogma, que la tecnología milagrosa XXX (ponga usted aquí su milagro favorito: hidrógeno verde, fusión nuclear, captura y secuestro de carbono...) nos va a llevar a las emisiones netas cero y por supuesto al 100% de la energía renovable —ojo, energía, no electricidad, que sigue siendo menos del 25% del total—.

Benoît Lallemand lo expresó claro y cristalino: nunca hemos hecho una transición energética, sólo hemos añadido cada vez más fuentes al *mix* energético. Y, seguramente, ya adivinarán con facilidad cuál es el obstáculo principal para que nunca la hayamos hecho.

Lo que se está evidenciando cada vez con mayor claridad es que uno de los materiales más cruciales para la transición energética, el cobre, [ya está dando signos claros de choque contra los límites de su propia producción](#), demostrando que muchos tecnosueños, una vez se hacen unos pocos números, son más bien pesadillas. Sandrine Dixson-Declève, copresidenta del Club de Roma, dijo una de esas frases destinadas a ser recordadas: “La única tecnología que puede salvarnos es una máquina del tiempo que nos vuelva atrás en el tiempo 50 años”.

Respecto al PIB hubo debates —que ya están superados desde hace 70 años— cuando Kuznets, el propio inventor del medidor, dijo que eso de que fabricar bicicletas y tanques sume igual, pues como que no. Que eso de que contaminar un río sume al PIB, porque una empresa irá a limpiarlo, como que tampoco. Que ese medidor es una estafa que hace décadas que deberíamos haber abandonado. Que el debate crucial lo plasmó Parrique en dos frases: “Lo que hay que desacoplar son las necesidades humanas del crecimiento económico”. Cuando el PIB va hacia arriba, la naturaleza y los ecosistemas que sostienen la vida van hacia abajo. La verdadera pregunta es: “¿Cuál de los dos queremos salvar realmente?”.

Hubo muchas menciones a las generaciones jóvenes y por venir, y destacó la intervención de Tim Jackson en el último plenario, que terminó de manera inmejorable con dos de esas voces: Agata Meysner y Anuna de Wever, poniendo en pie a los asistentes.

En una magistral intervención, Ann Pettifor abogó por “volar el oleoducto del dinero fácil” porque estructuralmente favorece la concentración de riqueza. También algunas cuestiones quedaron pendientes o tratadas insuficientemente, como la necesidad de encontrar alianzas con luchas obreras y sindicatos, o de cómo conseguir todos estos cambios, cómo hacerlos realidad, las estrategias de acción, siempre insuficientemente tratadas.

Pero quizá el cuello de botella más importante sea el hipercomplejo tema de la deuda, con interrelaciones directas con la soberanía monetaria. Quizá hace falta un *Beyond Debt*. Un evento específico para tratar de encontrar salidas que escapen de eslóganes fáciles, como cancelarla por completo —ya que no tienen en cuenta las derivadas globales que algo así podría provocar y no distinguen entre deuda interna y externa—, pero que asuman que en realidad una buena parte es impagable —y odiosa—, y eso lo sabe hasta el apuntador.

Sin embargo, pese a todos los obstáculos y puntos ciegos, hay un camino trazado claramente por dos de las, en mi opinión, mejores intervenciones del evento: la de la autora del IPCC Julia Steinberger y la del antropólogo Jason Hickel. En ellas, además de muchas otras cuestiones

interesantísimas, eligieron hablar de democratización, de asambleas ciudadanas, de cómo el sistema político actual está obsoleto, corrompido por el poder económico y sujeto al cortoplacismo electoral. Sólo mediante la democratización radical podemos albergar esperanzas de maniobrar a tiempo. La brecha entre ciencia y política, que este evento ha puesto aún más de relieve, sólo se podrá cerrar con más democracia, o con su antagonista.

Con una fórmula que precisamente une el mejor conocimiento científico disponible con la mejor forma de hacer políticas de urgencia que conocemos. [Las asambleas están funcionando](#), y como sucede con esta conferencia, los medios no lo están contando. Y esas omisiones, como denunció la propia Julia Steinberger, tienen un claro motivo.

Allí donde se celebran estas asambleas se proponen medidas más adecuadas y radicales que las que ningún partido político podrá llevar a cabo. Si bien algunos llevan estas medidas en sus programas, lo que necesitamos es un cambio político que haga posible lo que, aunque imprescindible, hoy es imposible. Una reforma no reformista que, bien aplicada, sería revolucionaria. Asambleas temáticas y regionales que vuelvan a enraizar la política en el suelo que pisa, y que eviten que las decisiones se tomen con trazo grueso, con influencias de los *lobbies* y sin tener en cuenta el conocimiento de los expertos, y del propio territorio. [Para temas como la transición energética, no pueden ser más cruciales.](#)

Uno de los mayores responsables de que este evento tuviera lugar y fuera tan fértil fue el presidente del evento y copresidente de los Verdes europeos, Phillippe Lamberts, que pidió que este tipo de eventos se den en los parlamentos de los distintos países, y del que se podría hacer un artículo entero sólo con sus aportaciones. Pero destacaré una: [si fallamos a la hora de reducir el metabolismo de nuestras economías, lo que vendrán serán más autoritarismos y dictaduras.](#)

Ya las estamos viendo crecer como setas en toda Europa por no gestionar esta contradicción. Una contradicción que en castellano se entiende aún más fácil: o el decrecimiento ineludible se transforma en una cuestión *vox populi*, es decir, gestionado de manera radicalmente democrática, o acabará siendo Vox, a secas.

[Fuente: [Ctxt](#)]

Ana Campos

El falso dilema de crecer o no crecer

«Ser o no ser» es el dilema ético al que se enfrenta Hamlet tras la visita del fantasma de su padre, sacudido por el sufrimiento ante su mala fortuna, la tentación de la huida fácil, y el miedo a lo desconocido; sentimientos universales que han hecho del «ser o no ser» un referente para expresar la duda existencial provocada por el abismo que a menudo separa el deseo de lo que la realidad ofrece. En el siglo XXI «ser o no ser» se expresa con otro verbo, «crecer», pues desde la modernidad el progreso material ha devenido en faro de nuestra existencia. «Crecer» se ha convertido en sinónimo de bienestar, mientras que «no crecer» (**decrecer**) lo es de adversidad. Una falacia muy fácil de desarmar, que nos está cegando ante **la magnitud de una crisis medioambiental que, de no ser combatida con contundencia, provocará un sufrimiento inenarrable**. Frente al deseo de crecer, la realidad, tozuda, nos muestra un camino diferente. ¿Mala fortuna o, tal vez, punto de inflexión a una existencia vacua?

No es el objetivo de este post discutir sobre dilemas existenciales sino volver a recordar cuál es esa tozuda realidad de una manera aséptica, evitando las contaminaciones ideológicas que empañan los debates consiguiendo mantener a una buena parte de la opinión pública entre la confusión y la ignorancia por razones que no son nada *inocentes*. **Vivimos en un planeta finito de recursos limitados, lo que imposibilita cualquier forma de crecimiento indefinido de tipo material**. Sólo recurriendo al *pensamiento mágico* es posible entender que pueda ser negado un postulado físico tan básico: de algo que es finito no puede obtenerse nada que sea infinito.

«El planeta está perdiendo su equilibrio biofísico»

La necesidad de reflexionar sobre lo finito e infinito se está viendo precipitada por la emergencia medioambiental, que se desarrolla a lo largo de dos ejes dependientes entre sí. En un eje se sitúa la crisis climática provocada por el incremento brusco de la temperatura, en el otro lo hace el deterioro medioambiental, que incluye una dramática pérdida de biodiversidad. Como resultado, el planeta está perdiendo su equilibrio biofísico, adentrándose en una fase de transición incierta en la que se sucederán los **episodios climáticos extremos**, en la que escasearán el agua potable y los alimentos, y en la que numerosas especies se irán extinguiendo en cadena pues cada especie depende del resto de las especies para sobrevivir. Una fase de transición en la que la civilización humana puede acabar derrumbándose como un castillo de naipes.

Que el clima siempre ha cambiado lo sabe cualquiera que conozca mínimamente la historia de este planeta. Pero no es menos sabido que el brusco aumento de la temperatura debido a la emisión de gases de efecto invernadero de origen antropogénico está trayendo consigo una severa dislocación de este, que se traduce en un **incremento de fenómenos extremos que provocan catástrofes**: sequías, inundaciones, incendios, temperaturas extremas, pérdida de masas glaciales... Es urgente discontinuar la quema indiscriminada de combustibles fósiles, un objetivo al que se han sumado con entusiasmo los grandes emporios energéticos, no porque hayan experimentado una «epifanía ecológica», sino por los problemas que enfrentan derivados de la inminente escasez de petróleo tras haber rebasado su pico de extracción.

A día de hoy **el 80% de la energía que consumimos sigue proviniendo de [fuentes fósiles](#)**

—carbón, petróleo, gas natural y derivados de estos—, mientras la emisión de CO₂ ha continuado su escalada en 2022 tras remontar en 2021 a los niveles anteriores a la pandemia. Para ayudar a la gestión internacional de la crisis energética, la [Agencia Internacional de la Energía](#) (IEA) ha elaborado el denominado **escenario de Emisiones Netas Cero** (NZE). Este escenario no es un modelo científico como los que elabora el [IPCC](#), sino un posible *camino tecnológico* que permitiría alcanzar emisiones netas cero en 2050, en consonancia con las reducciones evaluadas por el IPCC en su Sexto Informe de Evaluación para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C (con una probabilidad del 50%).

El camino se ha diseñado tomando en consideración algunos [Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas](#), como proporcionar electricidad a unos 800 millones de personas que no tienen acceso a ella y soluciones limpias para cocinar a otros 2.600. Así mismo, supone que en 2050 la población mundial superará los 9.500 millones de personas, y que el producto interior bruto per cápita se irá incrementando en un 2% anual en promedio. El escenario también supone que la demanda mundial de energía en 2050 será un 8% menor que la actual, siendo no obstante capaz de satisfacer un volumen económico que casi dobla el actual. Dicho de otra forma, y para evitar malos entendidos, el NZE asume que **la energía disponible es limitada**, estimando su valor para 2050 como un parámetro más del escenario.

Para conseguir estos objetivos el NZE plantea una **reversión drástica de energía fósil a renovable de aquí a 2050**, mantener ligeramente al alza la producción nuclear, limitar la producción fósil a procesos que incorporan la captura y almacenamiento de CO₂, y multiplicar por 2,5 la electrificación. La IEA deja claro que la viabilidad del plan reposa sobre un fuerte ritmo de innovación en tecnologías nuevas y emergentes, sobre la disponibilidad de bioenergía sostenible, y sobre una eficaz colaboración internacional. Queda fuera de toda duda que **el desafío tecnológico es sencillamente colosal**, pero vamos a hacer un *acto de fe* confiando en la extraordinaria capacidad de innovación humana para el desarrollo y puesta a punto en tiempo récord de las tecnologías necesarias, y también en que habrá reservas suficientes de materias primas, en particular de esas tierras llamadas *raras* que son imprescindibles para el gigantesco despliegue de renovables necesario de aquí a 2050. No menos importante resulta mantener la fe en la fortaleza de las **alianzas internacionales**, para lo cual pretenderemos no darnos por enterados del clima prebélico que sacude al mundo.

Correlación entre consumo de energía y PIB

En la figura 1 mostramos el [producto interior bruto \(PIB\)](#) frente al [consumo energético](#) (en el que se incluye electricidad, transporte, calefacción...) para los distintos países. Ambas cantidades han sido promediadas por persona para que la población de cada país no enmascare el análisis. El punto amarillo es el promedio mundial a día de hoy, mientras que el verde corresponde a 2050 de alcanzarse el escenario NZE. Los datos para cada país han sido extraídos de la fantástica iniciativa [Our World in Data](#), que considera la información como un asunto de interés público para ayudar a resolver los problemas del mundo.

Figura 1

Es importante notar que los ejes se han dibujado en escala logarítmica para que se aprecie mejor la espectacular correlación que existe entre consumo de energía y producto interior bruto (ambos en valores medio por persona tal y como hemos explicado) dada la desigualdad tan brutal que

existe entre los países. **El ciudadano medio de Qatar, el país más rico, tiene un PIB que es 250 veces el del ciudadano medio de la República Centroafricana, el país más pobre, y consume 700 veces más energía.** El nivel de desigualdad entre las distintas regiones del mundo también podemos verlo en la figura 2, donde mostramos la evolución del consumo de energía per cápita en distintas regiones del planeta en los últimos 40 años. (Han transcurrido 50 desde la publicación del histórico libro [Los límites del crecimiento](#)).

Figura 2

La correlación entre consumo de energía y PIB no debería extrañarnos. El PIB es el volumen de actividad económica, es decir, el volumen de lo que se produce expresado en términos monetarios, y para producir cualquier cosa, ya sea un bien o un servicio, se necesita energía. No debemos caer en el error de interpretar la gráfica de la figura 1 pensando que la correlación se debe a que, a más dinero disponible (PIB), más energía podemos consumir. Aunque esto obviamente es cierto, el proceso primario es el inverso: una mayor disponibilidad de energía (la causa) permite producir más, lo que aumenta el PIB (el efecto). La base de toda actividad es la energía, algo que cualquier físico conoce sobradamente pero que suele obviarse cuando la discusión versa sobre la actividad económica. Nada de lo que hacemos es gratis en términos energéticos, ¡ni respirar! La vida necesita energía para cumplir sus funciones, para vivir, y cuanto más compleja es, como es el caso de los seres humanos con nuestro elevado nivel de tecnificación, mayor es el consumo energético requerido.

Por supuesto, una misma actividad puede llevarse a cabo con mayor o menor eficiencia energética (no todos los coches capaces de trasladarte del punto A al punto B consumen lo mismo, por poner un ejemplo). Pero la «eficiencia infinita» no existe: toda actividad requiere una cierta cantidad mínima de energía para ser llevada a término. Negarlo nos conduce nuevamente a ese pensamiento mágico que parecen practicar algunos economistas, dejándose arrastrar por un entusiasmo que no es compartido por quienes conocemos las leyes de la física.

Precisamente la eficiencia es lo que permite explicar la aparente contradicción entre el crecimiento del PIB y la disminución del consumo de energía de aquí a 2050 en el NZE. Concretamente el escenario supone que la eficiencia en los procesos gracias a las nuevas tecnologías permitirá un ahorro en el consumo medio per cápita del 25%. En las gráficas de las figuras 1 y 2 esta eficiencia se traduce en un desplazamiento hacia valores más moderados de consumo, desplazamientos que serán más o menos acusados según sea el nivel de eficiencia (y/o derroche) actual, pero que en ningún caso resolverán las diferencias abismales que existen entre los países. Pongamos un ejemplo concreto: España. Si aplicamos un 25% de eficiencia a nuestro consumo energético actual por persona, el valor que obtenemos sigue siendo muy superior a la media prevista para 2050 en el NZE, concretamente un 65%.

La conclusión es muy clara: **nuestro consumo actual de energía por persona sólo podrá mantenerse a expensas de que se perpetúe la desigualdad entre países.** La energía que consumimos de más, en relación a la energía media disponible per cápita, corre a expensas de la que no consumen otras personas de este planeta nacidas en lugares desfavorecidos; a expensas de esos otros contra los que nos dicen que debemos proteger nuestro jardín, llegando al extremo canallesco de permitir que se ahoguen en el mar por la descortesía de abordar nuestras costas sin haber sido invitados.

Dejando de lado cualquier otra consideración relacionada con la dramática situación de deterioro medioambiental en la que nos encontramos, y dando por factible el NZE (o cualquier otro camino tecnológico similar) en un acto de optimismo sin parangón, es fácil ver que Occidente sólo tiene ante sí dos posibles alternativas: un fuerte decrecimiento, o tratar de mantener el **neocolonialismo extractivista** como *modus operandi*. Es importante subrayar que decimos «tratar de mantener» para hacernos eco de los vientos de cambio que han comenzado a soplar... El cada vez más fuerte alineamiento de los países desfavorecidos con los BRICS, que por primera vez han superado en volumen económico al G7, es una señal de que los pobres podrían estar hartándose de su situación de explotación y miseria. Si esto fuese así, la (odiosa) opción de perpetuar la injusticia para mantener nuestro nivel de vida sería cada vez menos factible, lo que convierte al «crecer o no crecer» en un falso dilema. La realidad, tozuda, sólo nos deja una opción, decrecer, aunque abre ante nosotros un nuevo dilema no menos importante, y urgente de abordar: cómo decrecer. Podemos hacerlo planificadamente, o dejar que nos atropellen los acontecimientos.

Decrecimiento planificado

En el camino del [decrecimiento planificado](#), que es el camino deseable pues el otro nos aboca a un auténtico desastre, uno de los primeros pasos que deberíamos dar es desterrar el PIB como indicador de bienestar. Utilizar un indicador cuya unidad es el dinero, esa herramienta ideada para el intercambio de riqueza cuya finalidad ha sido completamente adulterada, conduce a engaños y trilerismos financieros que ocultan los tejemanejes que se suceden tras las bambalinas. El crecimiento del PIB es el corazón de un sistema crematístico basado en la ambición desmedida, y también en la estafa mutua, como notó Ciro el Grande refiriéndose a los mercados de las polis griegas.

Debemos abandonar este sistema orientado al enriquecimiento *per se* cuyas actividades contra natura nos deshumanizan —que ya lo advirtió Aristóteles— para sustituirlo por un auténtico sistema económico en el sentido etimológico de la palabra, por una nueva, justa y más humana forma de «administrar nuestro hogar», nuestra casa común, nuestro planeta. **Este nuevo sistema debería utilizar como unidad de medida la energía, que es la base de la vida,** y ser orquestado bajo el paraguas de una nueva ética que reemplace egoísmo por empatía, que sustituya el *yo* por el *nosotros* en un sentido amplio e interespecista. Los humanos somos parte de una gigantesca red de seres que existen en interdependencia, una red por la que fluye la energía, manteniéndola iluminada con ese *milagro* al que llamamos vida. Como en cualquier otra red, una fuerte sobrecarga en alguno de sus nodos puede producir daños irreparables en toda la red, daños como los que ya estamos comenzando a sufrir.

[Fuente: [Climática](#). Ana Campos es doctora en Astrofísica por la Universidad de Granada y experta en transformación digital]

Andrea Thompson

Los países ricos han despilfarrado sus presupuestos de carbono

Este reportaje de Andrea Thompson ha sido publicado originalmente en [Scientific American](#). Lo traducimos al español y republicamos en Climática como parte de [Covering Climate Now](#), una alianza de medios internacionales para fortalecer la cobertura de temas climáticos.

* * *

Más de un siglo de **quema de combustibles fósiles** ha desencadenado olas de calor y sequías sin precedentes, precipitaciones más intensas que traen consigo grandes inundaciones y otros [fenómenos climáticos extremos](#). Si queremos evitar las consecuencias más catastróficas del cambio climático en el futuro, debemos limitar el aumento de la temperatura global, que en ningún caso debería sobrepasar los 2 °C y, cuanto más por debajo quede de esa cifra, mejor. Para alcanzar este objetivo, no podemos superar determinada cantidad de emisiones de efecto invernadero. Es lo que se llama el **presupuesto global de emisiones de carbono** o simplemente **presupuesto de carbono**.

Al igual que ocurre con un presupuesto económico, si ‘gastamos de más’ emitiendo una cantidad de CO₂ superior a la contemplada en nuestro presupuesto, contraeremos una ‘deuda de emisiones’ y **tendremos que lidiar con impactos climáticos más extremos** a los que nos resultará aún más difícil y costoso adaptarnos. Y vamos camino de gastar mucho más de la cuenta. La temperatura media global ya está próxima a 1,3 °C respecto a la era preindustrial.

En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ([IPCC](#)) se calcula que, entre 1850 y 2019, **emitimos cerca de cuatro quintas partes de la cantidad de CO₂ que nos permitiría** —en una probabilidad del 50%, a cara o cruz— evitar que las temperaturas del planeta aumenten más de 1,5 grados centígrados desde la era preindustrial (como estipula el ambicioso objetivo acordado en el marco del acuerdo climático de París de 2015). Para mantener esa probabilidad del 50-50, no podemos emitir más de 500 gigatoneladas de dióxido de carbono entre 2020 y 2030, según los cálculos del IPCC. **Este presupuesto de carbono no incluye otros gases de efecto invernadero ni el efecto refrigerante de los aerosoles**, entre otros factores. Sin embargo, puesto que el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más extendido, ese presupuesto sigue dando una idea bastante cabal de cuántas emisiones más podemos permitirnos. Si queremos aumentar las probabilidades de cumplir el objetivo, tendremos que reducir nuestro presupuesto de emisiones de carbono.

No es tarea fácil, teniendo en cuenta que el mundo produce actualmente unas 40 gigatoneladas de CO₂ al año y que las emisiones globales de dióxido de carbono siguen aumentando, lo que significa que, **en cerca de una década, habremos superado el presupuesto 50-50**. El informe del IPCC también aboga por una rápida y drástica reducción de las emisiones para limitar el aumento de la temperatura tanto como sea posible. «No nos queda mucho margen de maniobra», según la climatóloga **Kirsten Zickfeld**, de la Universidad Simon Fraser de la Columbia Británica (Canadá).

La política y los intereses económicos arraigados dificultan la reducción de las emisiones. Otro factor que complica las negociaciones internacionales sobre la acción climática es la cuestión de la equidad: **no todos los países han contribuido en la misma medida a la crisis climática**, y esta disparidad puede apreciarse de forma diáfana desglosando el presupuesto de emisiones de carbono a escala nacional.

Scientific American analizó el presupuesto de emisiones nacionales de un grupo de países sumando las emisiones históricas totales (incluida la quema de combustibles fósiles y ciertos cambios en el uso del suelo, como la deforestación) al presupuesto restante estimado necesario para limitar al 50% el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Esa cifra se dividió por el conjunto de la población mundial para determinar un presupuesto individual de emisiones, que luego se multiplicó por la población de cada país para obtener el presupuesto nacional total. En el gráfico siguiente se compara **el presupuesto de cada país con sus emisiones históricas**. Habida cuenta de las incertidumbres inherentes a todo cálculo del presupuesto de carbono, las cifras exactas del gráfico son mucho menos importantes que las disparidades generales observadas entre países.

Presupuestos de carbono y emisiones reales según país. EE. UU. ya ha excedido su presupuesto de carbono en cerca de 346 GtCO₂. Por otro lado, si bien China emite actualmente más carbono que ningún otro país en términos anuales, su total acumulado sigue siendo inferior al de Estados Unidos. República Democrática del Congo, Somalia y Burundi son los países con menos emisiones per cápita. Crédito: Amanda Montañez; Fuentes: Cambio climático 2021: The Physical Science Basis: Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. IPCC, 2021 (presupuesto de carbono); Datos suplementarios del Presupuesto Global de Carbono 2022. Global Carbon Project, 2022 (datos de emisiones); Banco Mundial (poblaciones de países y datos de emisiones per cápita); Análisis de datos por Amanda Montañez y Piers Forster.

Está claro que países como Estados Unidos y Rusia, así como la Unión Europea en su conjunto, **han rebasado con creces la cuota que les corresponde del presupuesto mundial de carbono**. Por el contrario, países que se han industrializado mucho más recientemente, como la India, o que apenas lo han hecho, como Somalia, están lejos de agotar la que sería su parte proporcional del presupuesto. «Esto pone de relieve una postura moral», afirma **Joeri Rogelj**, climatólogo y director de investigación del Instituto Grantham del Imperial College de Londres. «Pone de relieve ese desequilibrio que hay que resolver».

Aunque la industrialización de la China también es relativamente reciente, está alcanzando rápidamente a otros países industrializados y va camino de agotar su presupuesto. **China** es ahora el **mayor emisor mundial de dióxido de carbono**, pese a que sigue produciendo menos emisiones per cápita que Estados Unidos, que sigue siendo el mayor emisor en términos históricos.

A la vista de los profundos desequilibrios que existen entre los países en cuanto a su impacto en la crisis climática, la India y otros países en vías de industrialización o de desarrollo argumentan

que se les debería **permitir usar su cuota del presupuesto de emisiones para sostener el crecimiento de su economía**. «Como estudioso independiente de la India, puedo afirmar que el desarrollo económico, el aumento de los ingresos y el bienestar de la población —que, en su mayoría, no dispone de las comodidades que el mundo desarrollado da por sentadas— debe ser nuestra primera prioridad», opina **Tejal Kanitkar**, climatóloga del National Institute for Advanced Studies de la India. «Al ser una gran economía, la India es consciente de que debe contribuir en la medida que le corresponda al esfuerzo mundial por reducir las emisiones, por más que históricamente no haya contribuido a las mismas».

Si la **India** agotara el presupuesto de carbono que le queda, los objetivos establecidos a escala mundial en materia de clima resultarían inalcanzables. «Podría decirse que tienes derecho a usar ese presupuesto, pero no puedes hacerlo por el bien del planeta», afirma el climatólogo y autor del IPCC **Piers Forster**, de la Universidad de Leeds (Inglaterra). India ha implantado una serie de políticas nacionales para impulsar las energías renovables que, de tener éxito, bien podrían mantener al país por debajo de los límites de emisiones fijados en el Acuerdo de París, pero su ritmo de producción y consumo de carbón también sigue aumentando.

Tampoco es realista esperar que Estados Unidos y otros países en deuda respecto a los demás en materia de emisiones sencillamente dejen de contaminar de la noche a la mañana. Pero sigue siendo innegable que **«somos responsables por la mayor parte del calentamiento que se está produciendo y que se producirá en el futuro»**, afirma Zickfeld. «Esto implica que debemos asumir una mayor carga en lo tocante a la mitigación de sus efectos».

Los países desarrollados, como Estados Unidos, deben reducir sus emisiones más drásticamente que lo establecido en el Acuerdo de París si queremos atajar el calentamiento global y alcanzar las cero emisiones netas a mediados de siglo, afirman los climatólogos. «Hasta ahora, los países desarrollados han hecho esfuerzos insuficientes para reducir las emisiones y han centrado sus energías en la transición de un combustible fósil (carbón) a otro combustible fósil (gas natural), sin apenas esforzarse en desplazar el consumo de petróleo hacia otras fuentes de energía más sostenibles», afirma Kanitkar. «Esto significa que han esquilado cada vez más el presupuesto [mundial] de carbono, dejando muy poco margen para los países en vías de desarrollo». E incluso si los países desarrollados lograran alcanzar las cero emisiones netas antes que los demás, **«seguirían estando en deuda con el mundo en vías de desarrollo»**, añade.

Los países desarrollados deberían proponerse ir más allá de los objetivos planteados para mediados de siglo, afirma Rogelj. «Alcanzar las cero emisiones netas es sólo el principio. Es un hito nada desdeñable, pero no hay ninguna razón por la que debamos detenernos ahí», afirma. «Una vez alcanzadas las cero emisiones netas, rebajarlas a cifras negativas no supondría un gran reto», pero hacerlo podría **dar a los países en vías de desarrollo el margen de maniobra que necesitan** para reducir emisiones a un ritmo más lento y, si esos países también lograran disminuir rápidamente sus emisiones, limitaríamos aún más el aumento global de la temperatura.

Además de reducir las emisiones lo más deprisa posible, Estados Unidos y otros países desarrollados podrían **compartir sus conocimientos y tecnologías para generar energía limpia** con los países en desarrollo y proporcionarles financiación para implantar esas tecnologías. La India se ha fijado objetivos de descarbonización que **«conllevan importantes costes»**, según Kanitkar. «La India, como muchos otros países en vías de desarrollo, también

tiene prioridades en materia de industrialización que entran en conflicto con esos objetivos, lo que dificulta aún más la tarea. Por tanto, la financiación —que no el préstamo— es importante para alcanzar estos objetivos».

La compensación por los daños climáticos irreversibles causados hasta el presente es otro ámbito en el que los países desarrollados pueden dar un paso adelante. En la actualidad, un comité creado por la ONU negocia la creación de un mecanismo de compensación —conocido en la jerga de las Naciones Unidas como «[pérdidas y daños](#)»— antes de la próxima cumbre internacional sobre el clima, que tendrá lugar en Dubai en noviembre. Sin embargo, al igual que ocurre con los esfuerzos para frenar las emisiones, lograr que los países se comprometan a llevar a cabo lo acordado requiere una **voluntad política** que puede ser muy difícil de recabar.

La urgencia de pasar a la acción aumenta **según se va reduciendo el escaso presupuesto de emisiones restante**. En palabras de Zickfeld, «cada año que no sólo no disminuyen las emisiones de dióxido de carbono sino que, por el contrario, siguen aumentando, ese margen de maniobra se va estrechando».

[Fuente: [Climática](#). Andrea Thompson es editora adjunta de *Scientific American* y cubre temas de sostenibilidad. Traducción de Rita da Costa]

Pere Ortega

Alternativas a la seguridad y la defensa de los estados

La clase política occidental, en general, nunca ha tenido interés en profundizar sobre una cuestión tan trascendental como es la construcción de la paz desde la perspectiva de la noviolencia. En cambio, sí lo ha hecho, y mucho, sobre cómo regular la seguridad y la violencia. Pese a ello, ha habido excepciones, y algunos pensadores de la talla de Rawls, Arendt, Tilly, Galtung, Habermas, Bobbio y Gandhi entre otros, se han ocupado de reflexionar sobre la seguridad y la violencia desde otras perspectivas que permitieran que la convivencia estuviera regulada por medios menos violentos. A pesar de esas reflexiones, existen pocas experiencias y propuestas de cómo gestionar la violencia desde posiciones que favorezcan a la mayoría de la población mundial, en especial, a las capas sociales más desfavorecidas; en cambio, sí las hay desde concepciones que favorecen a las capas sociales más altas. Es desde ese despropósito sectario que, en general, la seguridad se concibe como ausencia de violencia física, personal que, por defecto, conlleva la persecución del delito y de quien lo comete mediante medidas coercitivas “duras”. Algo que podemos denominar como *securitización*. Para simplificar: una seguridad basada en leyes punitivas que persiguen el delito mediante fuerzas policiales que garanticen la seguridad interior. Pero, en cambio, no se han desarrollado, o son escasas, las políticas que pongan el acento en elaborar medidas sociales y de cuidado que tengan como propósito la reducción de la delincuencia.

Algo similar ocurre en el ámbito de la seguridad nacional. De la protección de la soberanía delimitada por las fronteras del estado se encarga el ejército mediante un sistema de defensa militar basado en la disuasión de posibles ataques del exterior, y del interior, en el caso de rebelión de la población. También, para intervenir en el exterior para pacificar conflictos que pudieran poner en peligro la seguridad nacional o regional. Una defensa militar que también tiene un carácter *securitario*, pues pretende resolver los conflictos mediante medidas igualmente “duras”: el uso de la fuerza.

En definitiva, unos modelos de seguridad que han favorecido en mayor medida a las élites, pues tratan de preservar los bienes privados que, en mayor medida, están en manos de las clases acomodadas. Unos modelos que en poco ayudan a la población en general, en especial la que se sitúa en la parte baja de la sociedad. Esto se evidencia si se analizan cuáles son las seguridades que demandan las poblaciones, que, además de reclamar seguridad física para su persona y bienes, también demandan una seguridad que provenga de disponer de trabajo, vivienda, alimentación, medio ambiente y una protección social que proporcione dignidad a sus vidas.

Debido a esta discriminación en el modelo de seguridad vigente en el mundo, Naciones Unidas, a través de la agencia del PNUD, en el Informe de Desarrollo Humano de 1994, lanzó la propuesta de Seguridad Humana con el enfoque de que ésta debía estar dirigida a proteger a las personas en todas sus necesidades y capacidades, y no centrarse en la seguridad de los estados.

Sin embargo, a pesar de los argumentos que señalaba el informe de Seguridad Humana y los posteriores de desarrollo humano que lo complementaban, los analistas afines a los grupos en el

poder del norte global se han obstinado en continuar afirmando que el derecho a la seguridad de los estados está relacionado con la defensa militar. Que el derecho a la defensa es un principio del derecho natural que debe ser respetado y acatado. Una concepción que sigue siendo la predominante cuando se observa que la seguridad debe estar siempre relacionada con defensa. Una concepción que, aunque tiene algún aspecto coincidente —el derecho a defenderse ante una agresión— en otras ocasiones puede que sea contraproducente, pues la respuesta a una agresión no necesariamente requiere de respuesta armada. Así, una cosa es que ante una agresión violenta nos defendamos, y otra si responder con violencia es la mejor de las respuestas, pues puede haber otras respuestas que impidan una espiral que conduzca a más violencias de las que después sea mucho más difícil salir.

Por otro lado, no es lo mismo una agresión interpersonal que una agresión entre estados. Pues en la primera, el sufrimiento queda circunscrito a un grupo reducido de personas, mientras que una agresión entre estados puede conducir a una violencia muy superior: la guerra. Guerra donde existe el consenso de que es la más perversa de todas las violencias por el enorme sufrimiento que comporta para las poblaciones que la sufren. Cuando, y, sobre todo, los estados disponen de mecanismos (diplomacia) para evitarlas actuado sobre las causas que las motivan. Pues, ¿acaso la guerra es la mejor manera de defenderse cuándo el mal que puedes provocar puede ser muy superior al que quieres remediar?

Sobre la guerra justa

A lo largo de la historia ha habido profundos debates entre quienes han justificado la existencia de guerras justas e injustas, y que ha llevado a diversos autores a diferenciar entre ellas desde un punto de vista ético, basándose en el derecho a defenderse ante una agresión. Fue Agustín de Hipona quién formuló los principios morales de cómo debe llevarse a cabo una guerra, entre los que se encontraba el derecho a la autodefensa. Desde entonces ha corrido mucha tinta, pero no fue hasta finales del siglo XIX, en Ginebra, donde se reglamentó a nivel internacional el *ius ad bellum*, o derecho a la guerra, y el paso al *ius in bello* o derecho internacional humanitario, que junto a diversas disposiciones posteriores han intentado regular el derecho a la guerra.

En su argumentación sobre la guerra, San Agustín advertía que, en la guerra, los ejércitos deben enfrentarse en una lucha entre iguales en un campo de batalla donde medir sus fuerzas, capacidades, estrategias y habilidades en combatir. Pero añadía una cuestión importante: que no se debía atacar a la población civil, sino que el combate únicamente debía ser entre militares. Entonces, debemos preguntarnos: ¿lanzar bombas con la impunidad que otorga arrojarlas a 10.000 o 14.000 pies de altura es justo? O: ¿lanzarlas sobre objetivos civiles como centrales eléctricas, plantas de agua potable, fábricas, escuelas u hospitales es justo?

Contradiendo a San Agustín, el Papa Juan XXIII en la encíclica *Pacem in Terris*, escrita en plena Guerra Fría y justo después de la crisis de los misiles en Cuba de 1962, cuestionó el concepto de la guerra justa al señalar que, en la era de las armas nucleares de destrucción masiva, es absurdo defender la guerra cuando ésta puede producir un holocausto mundial. Juan XXIII, rechazó de forma incuestionable la carrera de armamentos y la guerra en sí misma, afirmando que la guerra no es un instrumento para restablecer la justicia. En definitiva, rechazó el concepto de guerra justa.

Desde la filosofía del derecho, John Rawls^[1], para valorar si la guerra es justa o no, afirmará que

un pueblo tiene derecho a declarar la guerra a otro pueblo por dos razones: autodefensa o defensa propia, o para llevar a cabo una intervención humanitaria, es decir, cuando el gobierno de otro país viola de manera brutal los derechos humanos de sus ciudadanos.

En contraposición, desde el pensamiento pacifista se rechaza la guerra en cualquiera de sus formulaciones, incluida la defensiva. Este movimiento, con los pensadores que lo han encabezado, se ha opuesto a la guerra. Einstein, Bertrand Russell, Gandhi, Luther King, Galtung... han aspirado a hacer posible la abolición de la guerra. Considerando que los humanos tienen capacidades para abordar los conflictos y concertar soluciones que impidan un sufrimiento tan enorme como el que comporta una guerra. Unas propuestas que pretenden hacer posible la aspiración de Emmanuel Kant en *La paz perpetua*,^[2] donde se proponía que la paz sea un estado permanente en las relaciones entre los gobiernos. Aunque Kant añadía algo importante: que eso solo sería posible después de disponer de un gobierno mundial que tuviera como objetivo asegurar la paz mundial; y por tanto disponer de unos cuerpos de seguridad propios que puedan mediar e intervenir frente aquellos que se salten las normas de convivencia entre los pueblos.

Es desde esas concepciones que se puede afirmar de que no hay guerras justas, que todas son injustas para las víctimas de uno y otro bando. Injustas, por el dolor y destrucción que producen. Injustas, porque los humanos disponemos de capacidades para negociar cualquier tipo de conflicto y concertar soluciones que eviten la guerra. Injustas, porque todas sin excepción, podían haberse evitado si los estados hubieran actuado sobre las causas que las motivaron.^[3] Si esto no ha sido así es debido a que, en nuestro mundo actual, prevalece el uso de la fuerza antes que el del diálogo y la negociación política. Algo que ocurre porque nuestras sociedades están dominadas por un sistema patriarcal y jerárquico donde el poder radica en el uso de la fuerza. Y es por este motivo que los estados continúan aumentando sus capacidades militares, cuando podrían recurrir a aumentar sus capacidades diplomáticas a través del diálogo cultural, compartir la seguridad, las relaciones económicas e instalando una coexistencia pacífica con los países vecinos. El establecimiento de unas relaciones multilaterales donde predominara la cooperación y la fraternidad con el objetivo de alcanzar una convivencia que impidiera la guerra. Es desde esa concepción que se puede afirmar que la guerra justa no existe, que es un oxímoron, que las guerras siempre son injustas para las poblaciones que las sufren y que es posible abolirlas.

Sobre los ejércitos defensivos

De los ejércitos defensivos se empezó a hablar en los años más duros de la Guerra Fría, con el auge de la carrera de armamentos nucleares con la que se amenazaban las dos entonces potencias hegemónicas, Estados Unidos y la URSS. Algunos estrategas de ambos bandos auspiciaron, a principios de los años 1970, la propuesta de diversos tratados: el de Misiles Antibalísticos (ABM) o escudo antimisiles que impedía la instalación de antimisiles en Europa; y el que eliminaba las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), que eliminaba los misiles de medio y corto alcance en suelo europeo. Era la doctrina de *destrucción mutua asegurada* que, supuestamente, impediría una guerra nuclear entre las dos potencias. Aquellos Tratados desataron el debate sobre las armas defensivas y si éstas eran útiles para construir ejércitos estrictamente defensivos. Esos debates tenían un precedente en el movimiento de los países *no alineados*, que rechazaban el imperialismo y se situaban fuera de la órbita de Estados Unidos y de la URSS buscando un camino intermedio de neutralidad. Una neutralidad que unida a la

propuesta de desarme que pedía Naciones Unidas abría la esperanza de un cambio de rumbo en la política de enfrentamiento entre los dos bloques. Pues frenar la carrera de armamentos era tanto como abogar por un mundo menos militarizado y más defensivo que ofensivo.

En esos debates apareció la propuesta de que los estados neutrales y no alineados iniciaran el camino de construir un modelo de fuerzas armadas destinadas a defender sus territorios mediante armas de tipo defensivo que disuadieran a posibles invasores de ataques exteriores. No obstante, hay que precisar que el arma defensiva es paralela al nacimiento de los ejércitos: el escudo, la armadura, el casco de acero, el antitanque o las actuales baterías de antimisiles forman parte de las armas defensivas de las que han sido y son poseedoras todos los ejércitos. Además, detrás del arma defensiva con la que proteger al militar y supuestamente a la población civil se esconde una falacia: todos los ejércitos combinan las armas defensivas y las ofensivas, pues los militares necesitan de unas y otras para contrarrestar los ataques de otro ejército. No obstante, cierto es que ha habido países que han dado mayor relevancia a los ejércitos defensivos, como ha sido el caso de aquellos que tenían una vocación de neutralidad, como en Europa lo han sido Suiza, Irlanda, Austria, o Suecia y Finlandia (hoy truncada tras su decisión entrar en la OTAN). Es importante tener en cuenta esa opción, porque un país que se declara neutral, aunque disponga de ejército, desarrolla una estrategia de defensa de sus territorios de carácter no ofensivo, al no estar integrado en un bloque militar.

Países con seguridad compartida

Dejando a un lado la seguridad interior, que merece otro tipo de planteamientos, aquí se va a hacer un recorrido sobre cómo afrontar la seguridad de un estado ante el temor de una posible agresión proveniente del exterior. Para prevenir esos ataques, los estados se han dotado de ejércitos con los que *disuadir* a posibles agresores. Esto viene siendo así por los menos desde hace unos siete mil años, pues antes, al parecer de paleontólogos y arqueólogos, en el paleolítico y hasta mediados del neolítico los humanos, durante miles de años, vivieron con escasas violencias y sin guerras, como lo demuestra la inexistencia de armas y fortificaciones militares en las excavaciones llevadas a cabo en múltiples lugares (Eisler, 2021).[\[4\]](#)

Considerando que la humanidad tiene una antigüedad de unos 300.000 años, tan solo hace unos 7.000 que los humanos han escogido como modelo de seguridad la defensa armada. Algo que en la etapa contemporánea se ha ido exacerbando hasta llegar a los ejércitos actuales, donde prima, en general, un desaforado crecimiento armamentista. Un armamentismo que, en el caso de las potencias, más que *disuadir* a posibles atacantes, aspira a alcanzar un poder que les permita ser hegemónicos a nivel regional y, si es posible, mundial. Una aspiración que, inevitablemente, conduce a una carrera de armamentos entre países que pretenden ese mismo objetivo y que conduce a enfrentamientos armados en territorios donde se disputan su control.

Un militarismo que contagia a países de tamaño medio o grande que continúan apostando por acrecentar sus capacidades militares. Algo que, por razones obvias, no es posible para estados de tamaño reducido. En el mundo actual existen 31 estados que no disponen de ejércitos, la mayoría de ellos porque debido a sus diminutas dimensiones se han visto obligados a establecer excelentes relaciones diplomáticas con sus países vecinos para evitar conflictos que los pudiera hacer desaparecer. Relaciones de convivencia regional a través de compartir la seguridad, del establecimiento de relaciones económicas y culturales. Entre ellos, algunos de mayor tamaño,

como Costa Rica, Panamá o Islandia, no tienen ejército porque han subrogado la seguridad a terceros países. Pero unos y otros mantienen una coexistencia pacífica y de cooperación con sus vecinos que les proporciona seguridad.

Estos ejemplos deberían servir para reflexionar a los estados de mayor tamaño, para promover procesos de seguridad compartida entre países que faciliten el camino de un desarme con el objetivo de crear un equilibrio en seguridad a nivel regional y mundial. Un mínimo denominador común al que aspira Naciones Unidas a través de sus múltiples demandas de desarme destinadas a evitar la competición armamentística entre estados para evitar futuros conflictos.

El mejor camino para hacer las paces es trabajar por la multipolaridad, la confianza mutua, el respeto a la soberanía, la cooperación y el apoyo mutuo entre estados para alcanzar una seguridad común y compartida. Y en sentido contrario, oponerse a las políticas unilaterales, militaristas, de confrontación y de pretensión de dominación hegemónica. Un camino hacia la convivencia que pretenda substituir las sociedades competitivas y patriarcales por otras donde prime la cooperación que reduzca las desigualdades de género y sociales. Ese es el mejor camino para construir la fraternidad y la paz.

[Fuente: *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, n.º 161 (mayo), FUHEM. Pere Ortega es analista en temas de desarme, economía militar, conflictos y cultura de paz, y miembro del Centre Delàs d'Estudis per la Pau]

Notas

1. Rawls, John, (1979), *Teoría de la justicia*, Madrid, Fondo Cultura Económica [?](#)
2. Kant, Emmanuel, (2002), *Sobre la paz perpetua*, Madrid, Alianza editorial [?](#)
3. Solo por poner el ejemplo de la actual guerra en Ucrania. Cuando las alertas amenazaban que se podía producir la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hubo posibilidades de encontrar una solución que la evitara, pues hubo reuniones entre Anthony Blinken, secretario de Estado de EE. UU. y Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia. En la mesa de negociación fueron rechazadas todas las propuestas de Rusia y algunas de ellas, como la que exigía que Ucrania se comprometiera a que desde su territorio no se amenazaría a Rusia no entrando en la OTAN podía haber sido aceptada, pero no fue así. [?](#)
4. Eisler, Riane, (2021), *El cáliz y la espada*, Madrid, Capitán Swing [?](#)

Aníbal Malvar

Los AK-47 se visten de Dior

El mundo al revés. Mientras la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso propone sacar macetas a los balcones para combatir el cambio climático, el gobierno más progresista de nuestra historia reciente monta en Madrid una feria de exaltación de las armas, de la cultura de la guerra, de la santificación de la violencia. La derecha promociona claveles y la izquierda coroneles. Adónde vamos a parar.

Se celebra estos días en el Ifema de Madrid una Feria Internacional de Seguridad y Defensa, en la que participan y financian más ministerios de los que yo imaginaba que existían. Es como la pasarela Cibeles de la muerte, donde en lugar de modelos desfilan traficantes legales de armas, como era nuestro exministro pepero Pedro Morenés, fabricantes de sofisticados softwares con los que bombardear escuelas entre risas, suministradores de las mafias del narcotráfico, pagadores de lacayos belicistas del Tercer Mundo como José María Aznar, y carceleros de Julian Assange y de cualquiera que se atreva a denunciar las atrocidades de las guerras. De nuestras guerras.

La izquierda española empezó mal con este asunto del pacifismo desde la Transición y el primer felipismo, cuando el PSOE se pasó del *OTAN, no*, al *OTAN, en principio no*, y finalmente al *Bienvenido, míster Reagan*. Hay que tener mal gusto para elegir de protagonista de tu cambio político a tan pésimo actor.

Los *rallos* y otros economistas trueno del neoliberalismo dirán que España es una potencia industrial en fábrica de armas, y es cierto. Y añadirán que da de vivir a muchos españoles, que también es cierto. Pero es que da de morir a muchos más seres humanos que los que alimenta. Cada día, cada mes y cada año. Y, perdonad mi simpleza, yo no quiero que mi economía se sustente sobre la muerte de otros, aunque sean muy negros y muy extranjeros.

Pretender que la paz se consigue comprando y vendiendo armas es como pensar que la agricultura se puede salvar colocando plásticos sobre los cultivos, que es lo que llevamos haciendo durante décadas. Como civilización somos más tontos de lo que parecemos y como individuos somos más tontos de lo que creemos. Y por eso nos pasan estas cosas. En Europa tenemos más plástico que cultivos y más guerra que paz. ¿Soluciones?: secar más Doñana y hacer un pase de modelos de subfusiles y misiles implacables en una feria de Madrid.

El amor a las armas es transversal, pues la pela es la pela. El alcalde ex podemita de Cádiz, Kichi, buen tipo, acabó apoyando que los astilleros rojos de su Bahía pacifista de Cádiz acabaran construyendo unas fragatas y 400 armas de precisión para Arabia Saudí, destinadas a asesinar niños y gatos y soldados y poetisas en Yemen.

Pablo Echenique lo justificó diciendo que era un «dilema imposible». O sea, que para sufragar el pan de los gaditanos se pueden matar niños yemenís. Habló de elegir «entre fabricar armas y comer». Y decidió fabricar armas. Pablo Iglesias también lo apoyó: «Yo entiendo que Kichi ponga por delante los contratos de sus trabajadores». Se comportaron como esclavos, cosa muy extraña en ellos. No recuerdo otra peor. Anteponiendo el dinero de Arabia Saudí a la vida de trabajadores como ellos. Ser pacifista cuesta dinero, contratos, elecciones y libertad. Si no te

cuesta nada de eso, no eres pacifista, solo una bonita pose.

Durante casi un siglo, de 1850 a 1939, el ministerio español que se encargaba de masacrar españoles y extranjeros tenía un nombre nada hipócrita: se llamaba Ministerio de la Guerra. Así se entienden mejor las cosas. Yo propongo con humildad, pero tras mucho estudio, regresar a aquel nombre tan explícito. Tenemos un ministerio de la guerra porque estamos dispuestos a hacer la guerra. Nos gusta la guerra. Nos pone la guerra. Pagamos la guerra como quien paga una ronda de bar.

Yo no sé esta tontería de llamarle ministerio de Defensa. Ministerio de la Destrucción Total tampoco estaría mal, y atraería a muchos votantes. Mientras tanto, sigamos financiando, con el dinero de los pacifistas, pasarelas Cibeles de AK-47 forrados por Dior y bombas de racimo con esencia de Carolina Herrera. Una floreciente industria de palos y piedras sustentará nuestra economía bélica del futuro. Y nos dará de comer a todos. No os quepa ninguna duda.

[Fuente: [Público](#)]

Rafael Poch de Feliu

El curso de la guerra

El ejército ruso, o mejor dicho el grupo Wagner a él asociado, ha concluido esta semana la conquista de Bajmut. Hasta 2016, esa ciudad del Dombás hoy convertida en ruinas se llamaba Artiomovsk, en honor al dirigente bolchevique [Fiodor Sergeyev](#) (cuyo nombre de guerra era Artiom). Sergeyev fue el inspirador de la República de Donetsk durante la guerra civil y luchó en 1918 contra intervencionistas extranjeros, rusos blancos y nacionalistas ucranianos. Cuando la población del Dombás proclamó en 2014 la República Popular de Donetsk, como reacción al cambio de régimen auspiciado por Estados Unidos y la Unión Europea al calor de la revuelta popular en Kiev, la nueva república se declaró sucesora de aquella primera república de 1918. Así que, en 2016, el presidente ucraniano Petró Poroshenko cambió el nombre de la ciudad en el marco de la campaña de anulación de nombres, monumentos y símbolos soviéticos y su sustitución por la narrativa nacionalista del nuevo régimen.

En la actual guerra, la ciudad fue declarada “fortaleza inexpugnable” por el gobierno de Kiev, que construyó allí una de sus tres líneas fortificadas de defensa. La prensa occidental y ucraniana glosaba hace unos meses la “importancia estratégica” de Bajmut/Artiomovsk. Ahora que ha sido tomada por los rusos, en un pulso militar iniciado el pasado febrero, los mismos medios y personas se refieren a la ciudad como “estratégicamente irrelevante”. Con Bajmut ha pasado lo mismo que con el periodista Seymour Hersh, “brillante y galardonado periodista” y “ganador del Pulitzer” hasta que desveló con detalle [cómo Estados Unidos voló los gasoductos NordStream por orden del presidente Biden](#), momento en el que Hersh pasó a ser un “polémico periodista”. Ahora la conquista rusa de Bajmut apenas ha sido noticia aquí.

La toma de Bajmut, donde Ucrania destacó unidades de élite que preveía utilizar en su anunciada “contraofensiva”, es un indicador de que Ucrania está perdiendo la guerra y registrando muchas más bajas en combate que el ejército ruso, según los análisis más fiables.

Los analistas rusos se toman muy en serio la anunciada —y no se sabe muy bien si ya iniciada— “contraofensiva” ucraniana. Saben que las cosas pueden torcerse, pero los números no les cuadran. A diferencia del año pasado, ahora Rusia tiene superioridad numérica en efectivos y en artillería, el arma que decide una campaña que se parecería más a las de la Primera Guerra Mundial que a las de la Segunda, si no fuera porque Moscú practica una clara economía de vidas humanas en sus filas. Naturalmente, no es eso lo que nos explica la propaganda de guerra occidental y su correa de transmisión mediática, con su imagen de la guerra como picadora de carne rusa. No nos equivoquemos, y menos aún lo celebremos: los que ahora están poniendo más muertos en esta dramática carnicería son los ucranianos. Y su disponibilidad de nuevos soldados es muy inferior a la rusa.

La actual Ucrania, con su éxodo de ocho millones de ciudadanos al extranjero, más de tres millones de ellos hacia Rusia (otro dato revelador que ha sido ocultado), debe tener unos 25 o 30 millones de habitantes, frente a los 145 millones de Rusia. Ucrania está reclutando desesperadamente por la calle a ciudadanos sin ganas de ir al frente. En Járkov ya hace meses que los hombres en edad militar evitan refugiarse en el metro cuando hay alarmas, como hacían

el año pasado, por temor a que una redada les envíe a morir al frente en 48 horas. Muchos evitan salir de casa por el mismo motivo. Centenares de miles de jóvenes rusos se han ido del país para evitar ser llamados a filas, y lo mismo pasa en Ucrania, donde en diciembre el servicio de fronteras informó de 12.000 detenidos intentando cruzar ilegalmente la frontera hacia Rumanía. Según informes de organizaciones antimilitaristas alemanas, hay más de 175.000 desertores y objetores conocidos en Ucrania. Y eso en un país en el que la exención militar se compra con unos miles de dólares convenientemente entregados a la persona adecuada.

Es una opinión bastante generalizada, tanto en Rusia como en Occidente —generalizada, pero apenas publicitada—, que los tanques y aviones suministrados por la OTAN o pendientes de suministrar cambiarán poco esa correlación de fuerzas. Estamos ante una guerra de desgaste para la que Rusia, pese a la manifiesta desproporción de fuerzas ante la OTAN, parece bien dotada desde el punto de vista industrial. Tiene un buen sistema de defensa antiaérea y un buen sistema de misiles que, por lo que parece, ya ha anulado alguna carísima batería Patriot americana, como sugiere, más allá de las respectivas propagandas, el hecho de que la cotización en bolsa de la empresa que fabrica esas armas haya caído este mes como reacción a las noticias sobre su ineficacia, lo que tendrá dramáticas consecuencias para la venta y exportación de esas armas vendidas como “infalibles”.

Todo eso no quiere decir que las cosas vayan bien para Rusia. Las nuevas armas occidentales, misiles ingleses, tanques alemanes y, algo más lejos, los aviones americanos, están alimentando la escalada bélica y seguramente harán posible ataques más concentrados contra Crimea. Por otro lado, las incesantes bravatas y acusaciones del jefe del grupo Wagner, Evgeni Prigozhin, contra el ejército ruso, insultando a sus generales y al propio ministro de Defensa y echando en cara que no le suministraron municiones, retratan muy bien los desbarajustes internos rusos.

Más allá de lo estrictamente militar, Rusia ha perdido el grueso del capital de rusofilia que había en Ucrania antes de la invasión. El nacionalismo étnico ucraniano, antes solo dominante en Galitzia y en las regiones occidentales del país, ha avanzado muchas posiciones en el conjunto del territorio. Fuera de Crimea y del Dombás, el resentimiento hacia Rusia de los ucranianos rusoparlantes ha crecido de forma irreversible. Esa es la única victoria conseguida por el nacionalismo ucraniano en esta guerra, y los rusos la han servido en bandeja.

La presión occidental, política y mediática, apoyando a los sectores más delirantes de Ucrania que sueñan con una “victoria completa”, con reconquista de todo lo que los rusos se han anexionado, Crimea incluida, es extremadamente peligrosa. Tal reconquista sigue pareciendo imposible sin una intervención militar directa de soldados de la OTAN en el conflicto, y en ese caso la hipótesis nuclear rusa cobraría grandes posibilidades.

Respecto a la sociedad rusa, sigue sin estar en pie de guerra. El conflicto no se nota en Moscú y San Petersburgo, más allá de la dureza de la represión contra una oposición marginal en los raros casos en los que esta se manifiesta. En ese contexto, una mayor implicación militar occidental, así como las acciones y ataques ucranianos contra territorio ruso, como la razzia militar de “voluntarios rusos de extrema derecha” en la región fronteriza rusa de Bélgorod, no harán más que cimentar el apoyo de una sociedad en general muy poco apasionada hacia la guerra.

Los atentados ucranianos en Rusia contra personalidades civiles que apoyan la guerra ya son

abiertamente reconocidos por sus autores. “Lo que ellos llaman terrorismo, nosotros lo llamamos liberación”, ha dicho el joven general responsable de esos atentados en el Ministerio de Defensa ucraniano, Kiril Budanov. “Eso no empezó porque yo me volviera loco y empezara a matar gente en Moscú, sino porque ellos invadieron nuestro país desde 2014. No me voy a extender sobre esto, pero mataremos rusos y seguiremos matando rusos en cualquier lugar del mundo, hasta la completa victoria de Ucrania”. Decenas de “colaboracionistas” en las regiones ocupadas por los rusos han caído en atentados: el escritor Zajar Prilepin, el 6 de mayo en Nizhni Nóvgorod, que sobrevivió al atentado con bomba en su coche que costó la vida a su guardaespaldas y chófer; el bloguero ultra Vladlen Tatarski, muerto por bomba el 2 de abril en un café de San Petersburgo durante una charla en la que decenas de asistentes resultaron heridos; y la joven periodista Daria Dúgina, hija de un filósofo de derechas el pasado agosto, por una bomba colocada en su coche. “Estos casos han ocurrido y continuarán, esa gente recibirá un bien merecido castigo que solo puede ser su eliminación, que yo llevaré a cabo”, proclama Budanov, un ruso de Odesa de 37 años de edad.

El año pasado la posición declarada de Estados Unidos era disuadir a los ucranianos de ataques a territorio ruso, mientras que los ucranianos no reconocían la paternidad de sus acciones. Este año, las cosas han cambiado, Budanov lo dice bien claro, y hasta el timorato ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, califica de “completamente normales” las operaciones ucranianas en territorio ruso.

“Sabemos muy bien que las decisiones sobre estos atentados terroristas no se toman en Kiev, sino en Washington”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Estos hechos, así como los diversos sabotajes contra líneas férreas y otros cometidos en Rusia, se volverán contra Ucrania y Occidente, porque van a ir estrechando el consenso social interno ruso hacia una guerra que hoy sigue sin provocar entusiasmo, y eventualmente hacia una plena movilización con cierre de filas, en caso de que la OTAN intervenga directamente. Al mismo tiempo, estos atentados son un anuncio de lo que le espera a Rusia en las regiones ucranianas que ocupa, en caso de “victoria” militar con congelación del conflicto.

En el plano internacional, la última cumbre del G-7 en Hiroshima ha insistido en la escalada: capitulación e incondicional y plena retirada militar rusa, más “inquebrantable apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario hasta llegar a una paz justa” y luz verde a la entrega de aviones de guerra modernos, mientras que por el otro lado se endurece la tenaza contra China. La respuesta ha sido una mayor cooperación industrial y militar entre Moscú y Pekín, con la visita a Pekín, esta semana, del primer ministro ruso, Mijaíl Mishutin, acompañado de la tercera parte de los ministros de su gabinete, y la visita a Moscú del responsable de seguridad del Politburó del partido chino (es decir, el número uno en seguridad, mucho más que un ministro), Chen Wenqing.

Los chinos son muy conscientes de que Washington quiere “reproducir la crisis ucraniana en la región de Asia Pacífico”, se lee en el diario chino Global Times. El objetivo es una guerra por procuración contra China y la formación de una OTAN de Asia, dice. Los chinos se preparan contra la extensión de la guerra que propugna Estados Unidos con toda claridad y han pedido a los rusos que les transfieran sus sistemas de defensa antiaérea más modernos, incluidos los modelos S-400 y S-500 recién fabricados y perfeccionados. Obviamente, Rusia recibirá a cambio apoyo industrial/militar de China, tanto más intenso cuanto más se implique militarmente la OTAN

contra ambos.

[Fuente: [Ctxt](#)]

John Pilger

La guerra que viene. Es hora de alzar la voz

En 1935 se celebró en Nueva York el Congreso de Escritores Estadounidenses y un segundo dos años después. Convocaron a “cientos de poetas, novelistas, dramaturgos, críticos, escritores de relatos cortos y periodistas” para debatir el “rápido desmoronamiento del capitalismo” y la amenaza de otra guerra. Fueron actos electrizantes a los que, según un testimonio, asistieron 3.500 personas, y más de mil fueron rechazadas.

Arthur Miller, Myra Page, Lillian Hellman y Dashiell Hammett advirtieron de que el fascismo estaba creciendo, a menudo de forma encubierta, y de que la responsabilidad de denunciarlo recaía en escritores y periodistas. Se leyeron telegramas de apoyo de Thomas Mann, John Steinbeck, Ernest Hemingway, C. Day Lewis, Upton Sinclair y Albert Einstein.

La periodista y novelista Martha Gellhorn habló en nombre de los indigentes y los parados, y de “todos los que estamos bajo la sombra de un gran poder violento”.

Martha, que se convirtió en una buena amiga, me dijo más tarde ante su habitual copa de Famous Grouse con soda: “La responsabilidad que sentía como periodista era inmensa. Había sido testigo de las injusticias y el sufrimiento que trajo la Gran Depresión, y sabía, todos lo sabíamos, lo que se avecinaba si no se rompían los silencios”.

Sus palabras resuenan en los silencios de hoy: son silencios cargados de un consenso de propaganda que contamina casi todo lo que leemos, vemos y oímos. Permítanme darles un ejemplo: el 7 de marzo, los dos periódicos más antiguos de Australia, el *Sydney Morning Herald* y *The Age*, publicaron varias páginas sobre “la amenaza inminente” de China. Colorearon de rojo el océano Pacífico. La mirada china era marcial, amenazadora y estaba en marcha. El Peligro Amarillo estaba a punto de caer como por efecto de la gravedad.

No se dio ninguna razón lógica para que China atacara a Australia. Un “panel de expertos” no presentó ninguna prueba creíble: uno de ellos es un antiguo director del Instituto Australiano de Política Estratégica, una tapadera del Departamento de Defensa de Canberra, el Pentágono de Washington, los gobiernos de Gran Bretaña, Japón y Taiwán y la industria militar de Occidente.

“Pekín podría atacar dentro de tres años”, advirtieron. “No estamos preparados”. Se van a gastar miles de millones de dólares en submarinos nucleares estadounidenses, pero eso, al parecer, no es suficiente. “Se acabaron las vacaciones históricas de Australia”: cualquiera que sea el significado de esta frase.

No existe amenaza alguna para Australia, ninguna. El lejano y “afortunado” país no tiene enemigos, y menos aún China, su principal socio comercial. Sin embargo, las críticas a China, basadas en el largo historial de racismo hacia Asia por parte de Australia, se han convertido en una especie de deporte para los autodenominados “expertos”. ¿Qué piensan los australianos de origen chino? Muchos se sienten confusos y temerosos.

Los autores de estos grotescos mensajes encubiertos y este servilismo al poder estadounidense

son Peter Hartcher y Matthew Knott, “reporteros de seguridad nacional” creo que los llaman. Recuerdo a Hartcher de sus excursiones pagadas por el Gobierno israelí. El otro, Knott, es un emisario de los jefes de Canberra. Ninguno de los dos ha visto nunca una zona de guerra y sus extremos de degradación y sufrimiento humanos.

“¿Cómo hemos llegado a esto?”, diría Martha Gellhorn si estuviera aquí. “¿Dónde demonios están las voces que los rebatan? ¿Dónde está la camaradería?”.

El posmodernismo al mando

Las voces se oyen en el *samizdat* de este sitio web y de otros. En literatura, gente de la talla de John Steinbeck, Carson McCullers o George Orwell han quedado obsoletos. Ahora manda el posmodernismo. El liberalismo ha ascendido en su escala política. Australia, una socialdemocracia antaño somnolienta, ha promulgado una red de nuevas leyes que protegen el poder secreto y autoritario e impiden el derecho a saber. Las personas que denuncian son proscritas y juzgadas en secreto. Una ley especialmente siniestra prohíbe la “injerencia extranjera” de quienes trabajan para empresas extranjeras. ¿Qué significa esto?

La democracia ahora es conceptual; existe la élite todopoderosa de la corporación fusionada con el Estado y las exigencias de la “identidad”. Los almirantes estadounidenses cobran miles de dólares al día del contribuyente australiano por “asesoramiento”. En todo Occidente, nuestro imaginario político ha sido apaciguado por las relaciones públicas y desatendido por las intrigas de políticos corruptos de muy baja estofa: un Boris Johnson o un Donald Trump o un Sleepy Joe o un Volodímir Zelenski.

En 2023 no se celebra ningún congreso de escritores que se preocupe por “el desmoronamiento del capitalismo” y las provocaciones letales de “nuestros” líderes. El más infame de ellos, Tony Blair, un criminal prima facie según el Código de Núremberg, es libre y rico. Julian Assange, que desafió a los periodistas a demostrar que sus lectores tenían derecho a saber, va hacia su segunda década de encarcelamiento.

El auge del fascismo en Europa es incontrovertible. O “neonazismo” o “nacionalismo extremista”, como prefieran. Ucrania, como colmena fascista de la Europa moderna, ha visto resurgir el culto a Stepan Bandera, el apasionado antisemita y genocida que alabó la “política judía” de Hitler que masacró a 1,5 millones de judíos ucranianos. “Pondremos vuestras cabezas a los pies de Hitler”, proclamaba un panfleto banderista a los judíos ucranianos.

Hoy, en el oeste de Ucrania, Bandera es venerado como un héroe y hay decenas de estatuas de él y de sus compañeros fascistas, pagadas por la UE y Estados Unidos, que sustituyen a las de gigantes rusos de la cultura y otros que liberaron a Ucrania de los nazis originales.

En 2014, los neonazis desempeñaron un papel clave en un golpe de Estado financiado por Estados Unidos contra el presidente electo, Víktor Yanukóvich, acusado de ser “prorruso”. El régimen golpista incluía a destacados “nacionalistas extremistas”, nazis en todo menos en el nombre.

Al principio, la BBC y los medios de comunicación europeos y estadounidenses informaron ampliamente sobre ello. En 2019, la revista Time presentó a las “milicias supremacistas blancas”

activas en Ucrania. *NBC News* informó: “El problema nazi de Ucrania es real”. La inmolación de sindicalistas en Odesa fue filmada y documentada.

Encabezados por el regimiento Azov, cuya insignia, el “Wolfsangel”, se hizo tristemente célebre gracias a las SS alemanas, los militares ucranianos invadieron la región oriental de Donbás, de habla rusa. Según las Naciones Unidas, murieron 14.000 personas en el este. Siete años después, con las conferencias de paz de Minsk saboteadas por Occidente, como confesó Angela Merkel, el Ejército Rojo invadió.

Esta versión de los hechos no fue difundida en Occidente. Solo mencionarla es caer en el abuso de ser un “apologista de Putin”, independientemente de que el escritor (como yo) haya condenado la invasión rusa. Comprender la extrema provocación que supuso para Moscú una frontera armada por la OTAN, Ucrania, la misma frontera por la que invadió Hitler, es un anatema.

Los periodistas que viajaron a Donbás fueron silenciados o incluso acosados en su propio país. El periodista alemán Patrik Baab perdió su trabajo y a una joven reportera independiente alemana, Alina Lipp, le embargaron su cuenta bancaria.

El silencio de la intimidación

En Gran Bretaña, el silencio de la intelectualidad liberal es el silencio de la intimidación. Hay que evitar los asuntos de Estado como Ucrania e Israel, si se quiere conservar un trabajo en el campus o una plaza de profesor. Lo que le sucedió al exlíder laborista Jeremy Corbyn en 2019 se repite en los campus, donde los opositores al apartheid de Israel son tachados falsamente de antisemitas para desprestigiarlos.

La Universidad de Bristol despidió al profesor David Miller, irónicamente la máxima autoridad del país en propaganda moderna, por sugerir públicamente que los “activos” de Israel en Gran Bretaña y su lobby político ejercían una influencia desproporcionada en todo el mundo, un hecho sobre el que hay muchas pruebas.

La universidad contrató a un destacado consejero de la reina para que investigara el caso de forma independiente. Su informe exoneró a Miller en la “importante cuestión de la libertad de expresión académica” y concluyó que “los comentarios del profesor Miller no constituían un discurso ilegal”. Sin embargo, Bristol lo despidió. El mensaje es claro: no importa la barbaridad que cometa, Israel tiene inmunidad y sus críticos deben ser castigados.

Hace unos años, Terry Eagleton, entonces profesor de literatura inglesa en la Universidad de Manchester, consideraba que “por primera vez en dos siglos, no hay ningún poeta, dramaturgo o novelista británico eminente dispuesto a cuestionar los fundamentos del modo de vida occidental”.

Ningún Shelley habló por los pobres, ningún Blake por los sueños utópicos, ningún Byron condenó la corrupción de la clase dominante, ningún Thomas Carlyle y John Ruskin reveló el desastre moral del capitalismo. William Morris, Oscar Wilde, H. G. Wells, George Bernard Shaw no tenían equivalentes hoy en día. Entonces vivía Harold Pinter, “el último en alzar la voz”, escribió Eagleton.

¿De dónde procede el posmodernismo, el rechazo a la política real y a la auténtica disidencia? La

publicación en 1970 del bestseller de Charles Reich, *The Greening of America*, ofrece una pista. Estados Unidos se encontraba entonces en plena transformación; Richard Nixon estaba en la Casa Blanca, una resistencia civil, conocida como “el movimiento”, había irrumpido desde los márgenes de la sociedad en medio de una guerra que afectaba a casi todo el mundo. En alianza con el movimiento en defensa de los derechos civiles, presentaba el desafío más serio al poder de Washington desde hacía un siglo.

En la portada del libro de Reich aparecían estas palabras: “Se avecina una revolución. No será como las revoluciones del pasado. Se originará en el individuo”.

Por aquel entonces yo era corresponsal en Estados Unidos y recuerdo el ascenso, de la noche a la mañana y a la categoría de gurú, de Reich, un joven académico de Yale. El *New Yorker* había publicado su libro por entregas, cuyo mensaje era que “la acción política y la verdad” de la década de 1960 habían fracasado y sólo “la cultura y la introspección” cambiarían el mundo. Daba la impresión de que el hippismo se apoderaba de la clase consumidora. Y en cierto sentido así era.

En pocos años, el culto al “yoísmo” prácticamente había anulado el sentido de la solidaridad, la justicia social y el internacionalismo de muchas personas. Clase, género y raza estaban separados. Lo personal era lo político y lo mediático era el mensaje. Ganar dinero, se decía.

En cuanto al “movimiento”, su esperanza y sus canciones, los años de Ronald Reagan y Bill Clinton acabaron con todo ello. La policía estaba ahora en guerra abierta con los negros; las tristemente célebres leyes de asistencia social de Clinton batieron récords mundiales en el número de personas, en su mayoría negros, que enviaron a la cárcel.

Cuando ocurrió el 11-S, la fabricación de nuevas “amenazas” en la “frontera de Estados Unidos” (como el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense llamaba al mundo) remató la desorientación política de aquellos que, veinte años antes, habrían formado una vehemente oposición.

En los años transcurridos desde entonces, Estados Unidos ha entrado en guerra con el mundo. Según un informe en gran medida ignorado y elaborado por Médicos por la Responsabilidad Social, Médicos por la Supervivencia Global y Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear —estos últimos galardonados con el Premio Nobel—, el número de muertos en la “guerra contra el terror” de Estados Unidos en Afganistán, Irak y Pakistán fue de “al menos” 1,3 millones.

Esta cifra no incluye los muertos de las guerras dirigidas y alimentadas por Estados Unidos en Yemen, Libia, Siria, Somalia y otros países. La verdadera cifra, según el informe, “bien podría ser superior a 2 millones [o] aproximadamente diez veces mayor que la que el público, los expertos y los responsables de la toma de decisiones conocen y [es] propagada por los medios de comunicación y las principales ONG”.

“Al menos” un millón murieron en Irak, dicen los médicos, o el 5% de la población.

Nadie sabe cuántos muertos

La enormidad de esta violencia y sufrimiento parece no tener cabida en la conciencia occidental. “Nadie sabe cuántos” es el estribillo de los medios de comunicación. Blair y George W. Bush —y Straw y Cheney y Powell y Rumsfeld *et al.*— nunca corrieron peligro de ser procesados. El maestro de propaganda de Blair, Alistair Campbell, es aclamado como una “personalidad mediática”.

En 2003, grabé en Washington una entrevista con Charles Lewis, el reconocido periodista de investigación. Hablamos de la invasión de Irak de unos meses antes. Le pregunté: “¿Y si los medios de comunicación constitucionalmente más libres del mundo hubieran cuestionado seriamente a George W. Bush y Donald Rumsfeld e investigado sus declaraciones, en lugar de difundir lo que resultó ser una burda propaganda?”.

Él respondió: “Si los periodistas hubiéramos hecho nuestro trabajo, hay muchas, muchas posibilidades de que no hubiéramos ido a la guerra de Irak”.

Le hice la misma pregunta a Dan Rather, el famoso presentador de la CBS, que me dio la misma respuesta. David Rose, del *Observer*, que había promovido la “amenaza” de Sadam Husein, y Rageh Omaar, entonces corresponsal de la BBC en Irak, me dieron la misma respuesta. El admirable arrepentimiento de Rose por haber sido “engañado” hablaba en nombre de muchos reporteros carentes de su valor para reconocerlo.

Merece la pena repetir sus opiniones. Si los periodistas hubieran hecho su trabajo, si hubieran cuestionado e investigado la propaganda en lugar de amplificarla, un millón de hombres, mujeres y niños iraquíes podrían estar vivos hoy; millones podrían no haber huido de sus hogares; la guerra sectaria entre suníes y chiíes podría no haber estallado, y el Estado Islámico podría no haber existido.

Si aplicamos esta verdad sobre las guerras depredadoras que desde 1945 han desencadenado Estados Unidos y sus “aliados”, la conclusión es sobrecogedora. ¿Se plantea esto alguna vez en las facultades de periodismo?

Hoy en día, la guerra mediática es una tarea clave del llamado periodismo dominante que recuerda a la descrita por un fiscal de Núremberg en 1945:

“Antes de cada gran agresión, con algunas pocas excepciones por motivos de conveniencia, iniciaban una campaña de prensa calculada para debilitar a sus víctimas y preparar psicológicamente al pueblo alemán... En el sistema de propaganda... las armas más importantes eran la prensa diaria y la radio”.

Uno de los hilos conductores en la vida política estadounidense es un extremismo sectario que se acerca al fascismo. Aunque se atribuyó a Trump, fue durante los dos mandatos de Barack Obama cuando la política exterior estadounidense coqueteó seriamente con el fascismo. De esto casi nunca se informó.

“Creo en el excepcionalismo estadounidense con cada parte de mi ser”, dijo Obama, que expandió el pasatiempo presidencial favorito, los bombardeos, y los escuadrones de la muerte conocidos como “operaciones especiales” como ningún otro presidente lo había hecho desde la

primera Guerra Fría.

Según una encuesta del Consejo de Relaciones Exteriores, en 2016 Obama lanzó 26.171 bombas. Es decir, 72 bombas cada día. Bombardeó a los más pobres y a la gente de color: en Afganistán, Libia, Yemen, Somalia, Siria, Irak, Pakistán.

Cada martes —informó *The New York Times*— seleccionaba personalmente quienes morirían por el fuego infernal de los misiles disparados desde drones. Bodas, funerales, pastores eran atacados, junto con los que intentaban recoger las partes de los cuerpos que engalanaban el “objetivo terrorista”.

Un destacado senador republicano, Lindsey Graham, calculó que los drones de Obama habían matado a 4.700 personas. “A veces se alcanza a gente inocente y lo odio”, dijo, “pero hemos acabado con algunos miembros muy importantes de Al Qaeda”.

En 2011, Obama declaró a los medios que el presidente libio Muamar Gadafi planeaba un “genocidio” contra su propio pueblo. “Sabíamos...”, dijo, “que si esperábamos un día más, Bengasi, una ciudad del tamaño de Charlotte [Carolina del Norte], podría sufrir una masacre que habría reverberado en toda la región y habría manchado la conciencia del mundo”.

Era mentira. La única “amenaza” era la inminente derrota de los islamistas fanáticos a manos de las fuerzas gubernamentales libias. Con sus planes para un renacimiento del panafricanismo independiente, un banco africano y una moneda africana, todo ello financiado por el petróleo libio, Gadafi fue presentado como un enemigo del colonialismo occidental en el continente en el que Libia era el segundo Estado más moderno.

El objetivo era destruir la “amenaza” de Gadafi y su Estado moderno. Respaldada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, la OTAN lanzó 9.700 misiones de combate contra Libia. Un tercio se dirigió contra infraestructuras y objetivos civiles, informó la ONU. Se utilizaron ojivas de uranio; se bombardearon las ciudades de Misurata y Sirte. La Cruz Roja identificó fosas comunes, y Unicef informó de que “la mayoría [de los niños asesinados] eran menores de diez años”.

Cuando a Hillary Clinton, secretaria de Estado de Obama, le dijeron que Gadafi había sido capturado por los insurrectos y sodomizado con un cuchillo, se rio y dijo a la cámara: “¡Vimos, vimos, murió!”.

El 14 de septiembre de 2016, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes de Londres informó de la conclusión de un estudio de un año sobre el ataque de la OTAN a Libia que describió como un “conjunto de mentiras” —incluida la historia de la masacre de Bengasi—.

El bombardeo de la OTAN sumió a Libia en un desastre humanitario que mató a miles de personas y desplazó a cientos de miles más, y transformó a Libia, que era el país africano con el más alto nivel de vida, en un Estado fallido devastado por la guerra.

Con Obama, Estados Unidos amplió las operaciones secretas de las “fuerzas especiales” a 138 países, es decir, al 70% de la población mundial. El primer presidente afroamericano inició lo que equivalía a una invasión de África a gran escala.

Con reminiscencias de la Lucha por África del siglo XIX, el Mando Africano de Estados Unidos (Africom) ha creado desde entonces una red de suplicantes, entre los regímenes africanos colaboradores, deseosos de sobornos y armamento estadounidenses. La doctrina “de soldado a soldado” del Africom integra a oficiales estadounidenses en todos los niveles de mando, desde el general hasta el suboficial. Solo faltan los salacots.

Es como si la orgullosa historia de liberación de África, desde Patrice Lumumba hasta Nelson Mandela, hubiera sido relegada al olvido por la élite colonial negra sometida a un nuevo amo blanco. La “misión histórica” de esta élite, advirtió el sabio Frantz Fanon, es la promoción de “un capitalismo rampante aunque camuflado”.

El año en que la OTAN invadió Libia, 2011, Obama anunció lo que se conoció como el “pivote hacia Asia”. Casi dos tercios de las fuerzas navales estadounidenses se trasladarían a Asia-Pacífico para “hacer frente a la amenaza de China”, en palabras de su secretario de Defensa.

No había ninguna amenaza de China; había una amenaza para China por parte de Estados Unidos; unas 400 bases militares estadounidenses formaban un arco a lo largo del borde del corazón industrial de China, que un funcionario del Pentágono describió como una “soga”.

Al mismo tiempo, Obama colocó misiles en Europa del Este apuntando a Rusia. Fue el beatificado receptor del Premio Nobel de la Paz quien incrementó el gasto en cabezas nucleares a un nivel superior al de cualquier administración estadounidense desde la Guerra Fría —cuando había prometido, en un emotivo discurso que ofreció en el centro de Praga en 2009, “ayudar a librar al mundo de las armas nucleares”—.

Obama y su administración sabían perfectamente que el golpe contra el Gobierno de Ucrania que su secretaria de Estado adjunta, Victoria Nuland, fue enviada a supervisar en 2014 provocaría una respuesta rusa y probablemente ocasionaría una guerra. Y así ha sido.

Escribo este texto el 30 de abril, aniversario del último día de la guerra más larga del siglo XX, la guerra de Vietnam, de la que fui reportero. Cuando llegué a Saigón era muy joven y aprendí mucho. Aprendí a reconocer el zumbido inconfundible de los motores de los gigantes B-52, que dejaban caer su masacre desde lo alto de las nubes sin perdonar nada ni a nadie; aprendí a no apartar la vista ante un árbol carbonizado adornado con restos humanos; aprendí a valorar la bondad como nunca antes; aprendí que Joseph Heller tenía razón en su magistral Trampa 22: que la guerra no era apta para personas cuerdas; y aprendí sobre “nuestra” propaganda.

Durante toda aquella guerra, la propaganda decía que un Vietnam victorioso extendería su enfermedad comunista al resto de Asia y permitiría que el Gran Peligro Amarillo del norte se extendiera. Los países caerían como “fichas de dominó”.

El Vietnam de Ho Chi Minh salió victorioso y nada de lo anterior ocurrió. Sin embargo, la civilización vietnamita floreció, notablemente, a pesar del precio que pagaron: 3 millones de

muertos. Los mutilados, los deformes, los adictos, los envenenados, los perdidos.

Si los propagandistas de hoy consiguen librar su guerra con China, esto será una parte mínima de lo que está por venir. Alza la voz.

[Fuente: [Ctxt](#). John Pilger, nacido en 1939 en Sidney (Australia), ha sido documentalista y corresponsal de guerra. Traducción de Paloma Farré]

Nuria Alabao

Contra el feminismo de qué hay de lo mío

[En un artículo anterior](#) explicaba cómo la ley del ‘solo sí es sí’ y la ley de paridad son propuestas feministas que no responden a las prioridades de las mujeres que no pertenecen a las clases medias o altas. ¿Por qué la mayor parte de “logros” feministas no llegan a las mujeres pobres o incluso pretenden criminalizarlas como se hace con las migrantes sin papeles o con las prostitutas?

Las huelgas feministas de años anteriores —2018 y 2019 fundamentalmente— consiguieron posicionar públicamente la cuestión de la reproducción social, donde reside una de las potencias transformadoras más importantes del feminismo cuando se combina con una mirada de clase. Aunque el cambio cultural es innegable —y probablemente lo más importante que ha pasado en este ciclo—, después de unos años de las mayores movilizaciones feministas de las últimas décadas podemos decir que el balance de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las que están más abajo desde una óptica feminista ha sido escaso —más allá de la subida del salario mínimo que afecta a muchas mujeres—. Aquí el feminismo no es una excepción, la mayoría de las políticas que se aprueban están pensadas para las clases medias y altas.

También han sido casi nulos los avances que tienen que ver con cuidados, por ejemplo en la mejora de la Ley de Dependencia o de la inversión en este ámbito, que es central, y del que se habla muy poco. Podríamos nombrar sin embargo [las mejoras en derechos laborales de las trabajadoras del hogar, aunque todavía queden muchas cosas por conseguir](#). La universalización y gratuidad de las escuelas infantiles es otra medida que cambiaría radicalmente la vida a muchas mujeres y que no parece una prioridad de casi nadie. Digamos que lo que no tiene que ver con sexualidad o violencia —[lo traté en este artículo](#)—, techos de cristal o políticas simbólicas tiene menos posibilidades de colarse en la agenda.

El feminismo es “un campo social”, como diría Bourdieu, donde se producen y negocian significados sociales y donde se generan y disputan capitales —es decir, tipos de poder—, ya sean económicos, culturales, sociales o simbólicos. En el campo feminista también se generan hegemonías. Paula Sánchez Perera analiza, en [Crítica de la razón puta](#) (La oveja Roja, 2023), cómo la posición abolicionista de la prostitución se ha convertido en hegemónica, en una seña del feminismo del poder —no necesariamente en la posición social mayoritaria, sino solo la del campo—. El feminismo es valioso por su capacidad de movilización y penetración social, por lo que se producen intentos de determinados partidos o figuras públicas de hacerse con su capital político erigiéndose en sus legítimas representantes. Basta comparar con otros campos, por ejemplo el ecologismo, que aunque también sufre intentos de apropiación, más bien lo hace de sus conceptos y propuestas —descafeinándolas o adaptándolas al mercado—, pero pocos políticos dicen legislar en nombre del movimiento y ninguno se pasea impunemente por una manifestación contra la crisis climática. ¿Será porque en el ecologismo todavía hay gente que ejerce la desobediencia civil, cosa que apenas sucede en el feminismo actual en España?

Así, el hecho de que el feminismo esté conformado de una manera tan transversal e interclasista vuelve difícil operar políticamente a las que pensamos que puede ser una palanca de

transformación de lo existente, las que apostamos por un feminismo de las de abajo –o de clase– que busca la redistribución radical de la riqueza y del poder, uno que no se conforma con su 50% del infierno. Podemos expresarnos, manifestarnos u organizarnos para luchar por estos principios, pero al hacerlo a partir del feminismo compartimos “campo” con otras que lo utilizan como una vía de ascenso social o laboral, para legitimar sus posiciones institucionales, buscar presencia en redes —muchas veces movilizándolo la economía de la indignación— o defender su inclusión en listas electorales.

Techos de cristal

Este contexto implica enormes retos para el feminismo de las de abajo que, en la lucha por la hegemonía dentro del movimiento, y en la lucha entre los diferentes proyectos que contiene, parece que va perdiendo. Por una parte, el momento de cierre político post 15M se refleja también en las posibilidades que tenemos de operar. Si el momento es de repliegue o conservador —contrarrevolucionario, podemos decir, si el punto de comparación es la irrupción del 2011—, el campo feminista se vuelve también un reflejo de este contexto. Por otra, también es un reflejo de la propia estructura social: las feministas que ya ocupan lugares de poder —económico, político o simbólico— tienen más altavoces de todo tipo. Este feminismo concibe la desigualdad de género como una “disfunción del sistema” que se puede superar sin tocar demasiado el resto de la organización social; es decir, consideran que la sociedad ya está bien y que solo faltan mujeres en los lugares de toma de decisiones.

Pero también existen bases materiales para un feminismo “del techo de cristal”, ya que las mujeres de clase media o alta han conseguido llegar a determinadas posiciones sociales de relevancia, pero se encuentran con una barrera a la hora de asumir espacios de poder: el famoso techo de cristal del feminismo liberal. Por eso el PSOE ha aprobado una ley de paridad, es decir, que fija cuotas de cuántas mujeres tiene que haber en consejos de administración, colegios profesionales, gobiernos y listas electorales. Está contentando así a una parte importante de sus bases sociales o militantes, la que tiene más capacidad de incidencia política, pero además, en esta propuesta es inevitable ver algo del feminismo de “qué hay de lo mío”. Algunas de las impulsoras de esta ley sin duda acabarán en consejos de administración de eléctricas y constructoras, [como viene sucediendo habitualmente con muchas figuras políticas en España](#). Ahora lo tendrán más fácil.

Veamos algunos datos sobre techos de cristal y cambios sociales en la composición del trabajo. En la administración pública española, aunque ya existe una mayoría de mujeres —el 57,7%— según datos del [Instituto Nacional de Estadística de España del 2022](#), el número de mujeres disminuye a medida que se asciende de categoría profesional. Aunque son una clara mayoría entre los auxiliares y el personal de servicio, hay menos representación entre los altos cargos y las direcciones —solo el 37,8% son mujeres—. Podemos comprobar esta desigualdad también en la carrera judicial. [Las mujeres ya son mayoría entre los jueces](#) —el 54%—, pero todavía son una minoría en casi todos los estratos superiores. En [el Tribunal Supremo](#), de los 74 magistrados solo diez son mujeres —un 12,34%—, y lo mismo sucede en las Audiencias Provinciales —el 34,5%— o en la Audiencia Nacional —44,4%—. Encontramos asimismo ejemplos en la carrera sanitaria, ya que, [según el INE](#), la mayoría de los médicos colegiados son mujeres —el 54,2%—. Sin embargo, solo suponen el 32,7% de los profesionales médicos con cargos directivos en el sistema público de salud en España, [según un estudio del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación del 2019](#)

. La universidad no arroja resultados diferentes. Hoy, la mayoría de alumnas son mujeres y sus resultados académicos son mejores que los de los hombres, pero la presencia de mujeres es mayoritaria en los niveles inferiores de la carrera académica, mientras los niveles superiores están masculinizados, como sucede con el título de catedrático de universidad: solo hay un 26% de mujeres, [según datos del Ministerio de Universidades correspondientes al curso 2021-2022](#).

Esto en el sector público, mientras que esta desigualdad de poder es mucho más acusada en el sector privado, sobre todo en los consejos de administración y en la alta dirección de empresas, donde las mujeres ocupan el 27,7% de los cargos, mientras que los hombres ocupan el 72,3% restante, según un [informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del 2021](#). También son minoría en puestos intermedios —el 34 %—, mientras que representan el 54,6% de los puestos de auxiliares y similares.

Por tanto, las mujeres de clase media o alta son mayoría —cualificada— en muchos ámbitos pero no han obtenido un poder equiparable. Esta composición social de mujeres que ven sus posibilidades de ascenso coartadas por el machismo estructural es, probablemente, la base material que ha dado fuerza al feminismo en los últimos años en España y lo ha posicionado con esa centralidad. De ahí que hayan tomado tanta relevancia las políticas de cuotas, contra el techo de cristal o simbólicas —de representación en lugares visibles— cuando no es una demanda muy presente en las luchas de calle. No se trata aquí de que no tengan derecho a “llegar” o conseguir poder, sino que esa no puede ser nuestra lucha si hablamos desde un feminismo de las de abajo. Que algunas mujeres lleguen a puestos de mando, aunque puede ser legítimo, no va a cambiar ni un ápice la situación laboral o vital de las que están situadas en la base de la pirámide, ni nos va a hacer la vida mejor a la inmensa mayoría de mujeres, solo va a dar una pátina feminista a este sistema injusto. Simplemente, esa no es nuestra lucha.

Contra las cuotas

En Estados Unidos, desde principios de los setenta del pasado siglo se vienen implementando este tipo de políticas de “discriminación positiva”, impulsadas por el feminismo liberal de NOW, que también apostó por el llamado “paradigma antidiscriminatorio” que, mediante la lucha legal, busca confrontar las desigualdades en el empleo. Nixon impulsó este paradigma tanto en cuestiones raciales como de género, mientras implementaba una política de mano dura contra los pobres en los guetos que empezó a llenar las cárceles —sobre todo de negros—. Este tipo de políticas no son nunca incompatibles con empeorar la vida de los que nunca van a poder ser integrados, [como explica Susan Watkins en este artículo de la *New Left Review*](#). La ley de paridad y la ley del ‘solo sí es sí’ serían así dos caras de una misma forma de gobernarnos que se produce a través de la integración diferenciada —las que pueden llegar— y la exclusión selectiva —[el refuerzo del sistema penal siempre va en detrimento de las de abajo](#)—.

Por su parte, después de varias décadas de aplicación, las políticas de discriminación positiva casi habían conseguido cerrar la brecha de género en salarios y estatus entre las capas profesionales —el 15% de mujeres que están en lo más alto— en 1990, como demuestran [estudios como el de Paula England](#). (Aunque se vuelve a abrir cuando esas mujeres son madres.) Sin embargo, para la gran mayoría de ingresos medios —60% de los trabajadores—, la brecha de género se redujo porque las condiciones de los hombres y sus salarios empeoraron, según investigaciones [como las de Francine D. Blau y Lawrence M. Kahn](#). En las posiciones más

bajas de la escala social, este tipo de políticas tienen cero impacto, las mujeres están más explotadas que antes por el avance del neoliberalismo y la precariedad laboral. ¿Alguien ha propuesto cuotas en los invernaderos de Almería o en la conducción de camiones?

En definitiva, sus beneficios han alcanzado mayoritariamente a la clase media-alta mientras se dejaba tras de sí una base de la pirámide social racializada, empobrecida y desigual. Del feminismo liberal se ha beneficiado tan sólo una minoría de mujeres que han visto cómo se les abría una multiplicidad de oportunidades profesionales y de ascenso social de las que estaban excluidas hasta entonces, mientras el resto sigue luchando por sobrevivir, [como señala Watkins](#). Porque puede haber más igualdad entre hombres y mujeres mientras descienden las condiciones de vida de la mayoría y sobre todo del sector más excluido —aproximadamente un 30% de la población en España—, donde por supuesto se encuentran las migrantes.

Mejor apoyo mutuo que sororidad

Por tanto, una de las grandes cuestiones a las que nos enfrentamos desde un feminismo de clase es cómo podemos hacer de un movimiento interclasista, como el feminismo, una herramienta útil para la transformación que rompa el clasismo y sitúe los intereses de las que están más abajo en el centro, sean pobres, putas, trans o migrantes. Esto nos lleva a interrogarnos por nuestra propia composición social, ¿cómo trabajar políticamente con las mujeres más pobres o precarias? Aunque esto ya está sucediendo en algunas asambleas, donde se juntan trabajadoras domésticas organizadas o trabajadoras sexuales y otras formas de sindicalismo feminista, el feminismo sigue siendo mayoritariamente de clase media —y urbano—, una cuestión que no afecta únicamente a este movimiento sino que comparte con otras muchas movilizaciones de base. Las respuestas no son fáciles. Por un lado, la cuestión de reproducción social —desde una mirada de clase— sigue siendo un lugar político central desde el que impulsar propuestas transformadoras. (En este sentido, resulta inspiradoras las movilizaciones de los movimientos feministas vascos por [un sistema de cuidados](#) que los desprivatice, los universalice y mejore las condiciones de trabajo de las cuidadoras.) Por otra parte, más que encerrarnos en lo que se considera estrechamente “temas de mujeres”, tenemos que atravesar otras luchas en marcha, formar parte como feministas del movimiento de vivienda, el sindicalismo social, las luchas laborales o contra las fronteras. También con aquellas que defienden formas de distribución indirecta de la renta como son la sanidad y la educación —donde también es imprescindible introducir una mirada de clase—.

La pregunta sería ¿cómo romper la sororidad abstracta entre mujeres —es decir, el falso interclasismo feminista— para poner en el centro el apoyo mutuo entre las de abajo? O por lo menos, ¿cómo dar lugar a alianzas políticas que consigan situar esos intereses y esa mirada de clase en la agenda política? Sin duda, compartir espacios de militancia con mujeres que tienen otras preocupaciones distintas a las mujeres de clase media puede ayudar a centrar los discursos y las propuestas políticas. Si el feminismo de transformación quiere avanzar, tiene que consolidarse en este tipo de organizaciones existentes u otras nuevas, dotarse de instituciones propias que sean capaces de lanzar y sostener conflictos, y de mantener posiciones autónomas que no asuman e incluso defiendan la agenda que nos imponen desde los ministerios. La política no pasa solo por hacer demandas de derechos al Estado, sino que tiene que dar lugar a un mundo propio.

De aquí se desprende también el reto de articular un proyecto con vocación universalista. Si no queremos estar subordinadas es porque queremos un mundo donde nadie tenga que estarlo. Por tanto, desde este lugar se puede cuestionar toda la organización social. Nuestra preocupación por la situación de las mujeres no puede construirse al margen del cuestionamiento de la explotación y el sufrimiento de los hombres de clase trabajadora. Nos importa que no haya trata con fines de prostitución forzada porque no queremos que exista ningún tipo de trabajo forzado. No creemos en la explotación reproductiva porque no queremos ningún tipo de explotación. Por tanto, ¿cómo construir a partir de la posición de subordinación de las mujeres una propuesta emancipadora asociada a un proyecto de carácter universal que también pueda hacer más fuerte nuestra lucha? Probablemente solo desde estos planteamientos podremos desmarcarnos del interclasismo feminista y avanzar en una agenda propia del feminismo de las de abajo que vaya más allá de las leyes de paridad y de las leyes penales, y que cortocircuite la apropiación de nuestra capacidad de enunciación política con el objetivo de gobernarnos mejor.

[Fuente: [Ctxt](#)]

Judit Font Redolad

Políticas para pobres: lo que no funciona se perpetúa

El pasado 10 de marzo, el Parlament de Catalunya aprobó dejar fuera la partida de 40 millones del presupuesto que debía destinarse a hacer un Plan Piloto para la Renta Básica Universal con los votos de PSC, Junts, Ciutadans, PP y Vox. Esta prueba piloto innovadora, validada científicamente y reconocida a nivel europeo (y más), con posibles impactos más allá de cuestiones materiales, ha sido descartada. Mientras, las propuestas de lucha contra la pobreza siguen siendo las mismas de hace 30 años y se demuestran ineficaces.

En Cataluña la situación de cronificación de la pobreza está en torno al 25%, desde hace al menos 10 años, afectando a 2 millones de personas. Ninguna de las medidas de lucha contra la pobreza ha logrado revertir mínimamente la situación, además de los condicionantes estructurales y de incremento de la desigualdad actual derivada del mercado vivienda, racismo, precariedad laboral... o una pandemia.

Las políticas de garantía de rentas tradicionales han tenido “la finalidad de asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, a fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad.” Algo que pone a debate el concepto de vida digna.

En Cataluña se iniciaron con la PIRMI en 1992. En el contexto post crisis de 2009, un movimiento ciudadano impulsó una ILP por la Renta Garantizada Ciudadana con el lema “rescate a las personas” y 121.191 firmas. La Ley 14/2017, de 20 de julio, de la [Renta Garantizada de Ciudadanía](#), consolidó su implementación en 2017, a pesar de reproducir algunos de los elementos críticos del anterior PIRMI. Desde entonces, sólo se llega a 166.410 personas percibiendo esta renta, con datos de noviembre de 2022. En mayo de 2020 en plena pandemia, se aprueba el Ingreso Mínimo Vital como política estatal, y se implementa en 2021. En Cataluña, de esta ayuda se han iniciado en todo el período 52.707 expedientes, que benefician a unas 158.422 personas. Actualmente, una nueva propuesta de Ley quiere revisar los impactos y planteamiento de la política vigente de RGC y al mismo tiempo quiere armonizar las dos prestaciones.

En este sentido, la [Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña](#) (RGC) puede prestarse como una prestación básica (no condicionada) o con la prestación complementaria de activación e inserción (PCAI) condicionada a la realización de un plan de inserción laboral o inclusión social (que son el 92% de las prestaciones). Para solicitar o percibir la RGC se utiliza como baremo el IRSC, el indicador de renta de suficiencia de Cataluña. Para el ejercicio 2023, la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña fija el valor del [indicador de renta de suficiencia de Cataluña](#) (IRSC) en 614,65 euros mensuales y 8.605,15 euros anuales. Establecen el umbral (ingresos inferiores) y al mismo tiempo las cuantías a percibir: 664 euros.

Según el [IDESCAT](#), en 2021 el umbral de la pobreza se sitúa en los 941,42 euros mensuales, y la pobreza severa en los 593,00 euros mensuales. Las cuantías de la RGC no sólo están por debajo

de lo que se considera umbral de la pobreza sino que apenas inciden en la pobreza severa.

Para solicitarla, computan los ingresos por unidad familiar, el destinatario es el titular y el beneficiario es el conjunto de miembros, aunque si un miembro de la unidad incrementa ingresos o accede a un trabajo, el perceptor principal pierde la RGC. También quedan descubiertos los hogares con más de una unidad familiar. Para acceder es necesario estar empadronado en un municipio de Cataluña y haber residido legalmente 2 años antes y tener más de 23 años (con alguna excepción), excluyendo capas de población inmigrada y jóvenes.

Entre otras características, la RGC es incompatible con el trabajo a tiempo completo (y se reduce si es parcial), por lo que cuando aparecen opciones de trabajo temporal, eventual, muchas personas beneficiarias prefieren no acceder al trabajo por no perder la prestación. Aparte de que la inserción laboral no siempre está en condiciones de calidad salarial. Es la trampa de la pobreza.

Éstas son algunas de las incompatibilidades, fallos y exclusiones. Los datos muestran un progreso en las prestaciones de garantía de ingresos, pero tienen importantes debilidades e insuficiencias, tanto en la gestión como en el grado de cobertura. De hecho, el colapso administrativo hace que la respuesta no sea lo suficientemente ágil precisamente en situaciones críticas, carecen de mecanismos de coordinación para asegurar una atención adecuada y la cuantía es muy limitada en relación al coste actual de bienes de primera necesidad, como son la vivienda o los suministros básicos.

Según un informe de Ivalua de 2021, analizando el impacto de la RGC un 2,8% de los hogares en Cataluña son beneficiarios de la RGC. Esto representa un 37,2% del total de hogares en riesgo de pobreza severa (población diana) y un 81,2% de la población elegible para percibirla. La cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía está por debajo del 10% de la población en situación de pobreza, según el informe [INSOCAT](#) 13 de diciembre de 2021. Obviamente, además, la cantidad de renta transferida es insuficiente y por debajo del umbral de la pobreza. Y en cuanto a la inserción laboral en todo el año 2022, según datos de la propia Generalitat, sólo 3.369 familias deben salir del programa por motivos de inserción laboral.

Hasta aquí se han explicado algunas características de las políticas de garantía de rentas en Cataluña y se han aportado datos de la actualidad, pero diferentes reflexiones teóricas llevan más de treinta años señalando las carencias e ineficacia de este tipo de políticas. Algunos de los elementos críticos son:

- La hipótesis fallida del trabajo asalariado como vía de subsistencia material y de inserción económica. Hoy en día es erróneo prever la salida de la pobreza a través del trabajo precarizado.
- El abordaje de una situación estructural a partir de medidas individuales. A partir del paradigma de “la activación” se culpabiliza a la persona de la propia situación y se hace única responsable de la salida.
- La visión moralizante que se desprende del hecho de condicionar las prestaciones y bajas cuantías, para no “malgastar”, “a cambio de nada”, no fomentar el “parasitismo”. Una visión que estigmatiza y favorece y alimenta discursos de criminalización de la pobreza.
- Se trata de políticas públicas que requieren desarrollar servicios evaluadores y acreditadores de las situaciones de pobreza. Lo que redundará en el control social, la burocratización, y en crear un sistema de ayudas, ayudas y trámites que hacen perder el

sentido de la acción y los servicios sociales.

- Se produce una normalización e institucionalización de la pobreza, que se convierte en una trampa con topes de ingresos que son inferiores al umbral de la pobreza.

Ahora, la nueva propuesta de ley que existe para reformar la Renta Garantizada Ciudadana, si bien reconoce la ineficacia de la medida en la exposición de motivos y destaca el incremento de situaciones de pobreza, incluye algunas mejoras; propone armonizar con el IMV y redestinar los recursos a ampliar las coberturas, permite la compatibilidad con el trabajo pero no elimina la condicionalidad, incorpora una ayuda al pago del alquiler, ofrece mayor cobertura para familias numerosas y cambia algunos requisitos de acceso. Sin embargo, no transforma ninguno de los elementos críticos de las prestaciones de garantía de rentas, y mantiene elementos básicos de concepción de la política pública que no supondrán ningún cambio sustancial:

- Sigue la discordancia entre la naturaleza del fenómeno y el abordaje de la pobreza. Es una realidad estructural y cronificada que se aborda desde la lógica coyuntural y la emergencia temporal. De hecho, un 50% de las beneficiarias de la RGC ya vienen de las anteriores PIRMI.
- Sólo se proponen medidas de contención sin trabajar profundamente las causas de la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva interseccional. La acción contra la pobreza implica acciones dirigidas a los mecanismos que producen desigualdad y la generan, y quizá sea precisamente por este motivo por el que la erradicación de este fenómeno ha sido imposible sólo desde la política social, ya que querría decir política de vivienda, abolir la ley de extranjería, regulación laboral...
- Sigue la hipótesis del retorno al trabajo asalariado sin modificar sus condiciones. No se aborda la crisis del no retorno al trabajo asalariado. El mercado de trabajo ya no es una vía de inserción, ni vida digna, por cantidad y calidad.
- Sigue el abordaje individual y culpabilizador, estigmatizador. No generamos sujetos de derecho sino subsidiarios. Se perpetúa la saturación de servicios, con servicios sociales a punto de colapsar, donde se llegan a realizar hasta 60 trámites. Más estructura de gestión y administración.
- Se consolida la trampa de las ayudas al pago de la vivienda. Nada cambia en términos de derecho y acceso a la vivienda y se refuerzan abusos inmobiliarios. El precio de la vivienda es un eje de empobrecimiento y no se toca; por el contrario, se garantizan las rentas para los propietarios, se mantiene el dominio del mercado.
- Se sigue utilizando el IRSC como indicador, incrementa levemente la cuantía a percibir (100€), sin tener en cuenta la variabilidad territorial del coste de la vida. Se transmite el mensaje institucionalizado de que la cobertura social es vivir con 670€. Y cuando no protege el Estado, ya lo hará el mercado, aunque sea con economía sumergida, explotación laboral...

Un informe de marzo de 2023 indicaba que el sueldo mínimo para llegar a fin de mes en el área metropolitana de Barcelona es de 1.447 euros.

Son rentas que hacen de tope por arriba, y no por debajo: deben recibirse menores ingresos para obtenerlas y no cobrar más por mantenerlas. Ponen en el centro del debate las condiciones materiales de la existencia, y generan serias dudas sobre la voluntad de las instituciones de garantizar la “vida digna”.

Supone sostener y perpetuar lo que no funciona en temas de concepción de políticas públicas, tanto en diseño como objetivos. Llevan 30 años sin funcionar, basado en evidencias.

El [Plan Piloto de la Renta Básica Universal](#) quería aportar nuevas evidencias, para nuevas políticas. No se entiende que se retire el destino presupuestario de Plan Piloto por la RBU. Una propuesta que sí presenta una alternativa: Tanto en la concepción del ciudadano, de la libertad, de vida digna, como un proyecto fuerte de redistribución, que grabaría la riqueza, desde la universalidad, la no condicionalidad, con cuantías más elevadas, eliminaría la necesidad de servicios prestamistas, controladores, acabaría con las multiplicidades de subsidios ayudas y ayudaditas, genera derecho... es conquista. Con sus posibles limitaciones también damos la opción de estudiarlo.

Lo que no funciona ya lo conocemos y se perpetúa.

[Fuente: [Catalunya Plural](#)]

Isabel Otxoa

Trabajadoras de hogar y cuidados: ¿hay algún límite a la indignidad?

La (des)protección social de las trabajadoras de hogar ha sido tal que, tras cada paso en la equiparación, cualquiera se pregunta cómo fue posible lo anterior. El derecho a la asistencia sanitaria se les reconoció dieciocho años más tarde que al resto de gente trabajadora, a ellas se les exigían seis meses de cotización previa cuando a los demás se les atendía desde el mismo momento de la afiliación, durante los primeros siete días de enfermedad ellas, y solo ellas, no tenían derecho a la asistencia médica del seguro.

Hasta el año 2012, las bajas de enfermedad no se les abonaban sino a partir de las cuatro semanas y su trabajo era tratado de manera tan despectiva que hasta esa fecha no tuvieron reconocido el accidente laboral. Inexacto: se les reconoció legalmente desde el 1 de enero del año 2011, pero no se hizo efectivo hasta un año después, cuando se comenzó a cotizar por accidente. La clase médica está tardando bastantes más años en darse por enterada de que en el empleo de hogar y cuidados suceden accidentes laborales.

Continúo. Tuvieron derecho a la pensión de jubilación veinte años más tarde que el resto de la gente trabajadora, pero a ellas se les exigía exactamente el doble de tiempo de cotización previa; 3.600 días, frente a los 1.800 exigibles a las demás. Así podría seguir, pero para lo que aquí interesa, algo debe quedar claro: el trato desigual pocas veces se defendió en la historia como deseable, sino como algo forzado por las circunstancias: resultaban una carga excesiva para el sistema, se les suponía tendencia al fraude, no convenía elevar su costo para las familias... Hubo muchos planes para mejorar la condición del servicio doméstico (así se nombraba), pero nunca llegaba el momento de ejecutarlos. Paso a la más rabiosa actualidad. A día de hoy, hay que añadir otra justificación al trato desigual: no se les pueden reconocer derechos de seguridad social [porque no tienen papeles](#). Son una de cada tres internas cuidando a personas en situación de dependencia. Consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, el gobierno tuvo que reconocer el derecho a la prestación de desempleo en el Sistema de Hogar en 2022. La cotización empezó el 1 de octubre de 2022. Aunque el Tribunal europeo dijo que la exclusión anterior había sido ilegal y discriminatoria, no se dio efecto retroactivo a la medida. Pudo haberse reconocido para el desempleo el tiempo de cotización anterior, pero no se hizo.

Así, [solamente con doce meses cotizados a partir de octubre de 2022](#) se puede cobrar la prestación de desempleo —con seis meses, se puede cobrar ya un subsidio muy inferior en cuantía—. Pero cuando pase el año y llegue octubre de 2023, tampoco habrá igualdad porque la prestación será sólo de 120 días. Cualquier otra persona, dependiendo del tiempo trabajado en los últimos seis años, podría llegar a cobrar hasta 720 días.

Hay más. Ninguna que se haya dedicado al empleo de hogar podrá recibir los próximos años el subsidio de mayores de 52 años, que dura hasta la edad de jubilación y además es un tiempo que se considera como cotizado. En un trabajo duro como es el de cuidado, sobre todo en las actuales condiciones pésimas de salud laboral, poder cobrar el paro sería un respiro. Pero hasta octubre de 2028 no recibirán el subsidio de mayores de 52, porque se exige haber cotizado 15

años, al menos seis de ellos también para el desempleo. Esta condición sólo la podrán cumplir las que hayan cotizado sin parar hasta entonces. Dejo para el final la medida que muestra la clase de trato de la administración de la Seguridad Social al sector. El 10 de mayo de 2023, la Subdirección General de Ordenación y Asistencia jurídica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), criterio de gestión 11/2023, ha declarado que desde ahora mismo, cuando una trabajadora quede en paro mientras está en situación de baja por enfermedad, en lugar de pagarle la prestación de incapacidad temporal —baja— que le corresponda, se le pagará bastante menos siguiendo las normas que rigen la prestación de desempleo.

Esto es en cifras lo que cuento. Hasta ahora, una trabajadora de hogar a tiempo completo ganando el salario mínimo raspado, en caso de baja por enfermedad cobraba: al principio, 25,20 euros diarios; pasados 20 días, el subsidio ascendía a 31,50 euros. Aplicando el criterio del INSS a partir de ahora, cobrará 16 euros al día durante toda la baja. Espero haberlo explicado bien: no pueden cobrar todavía la prestación de desempleo, pero sí que se les puede aplicar desde ahora mismo la reducción en la prestación de baja por enfermedad que sufre el resto de la gente al quedar sin trabajo, porque ¿no es verdad que exigían, y así se les ha reconocido, el derecho al paro en condiciones de igualdad?

[Fuente: [El Salto](#)]

Clara Serra

Estrategias feministas contra el paternalismo penal

En la actualidad está abierto un debate global acerca del lugar que ocupa la política penal en la construcción de la ciudadanía en el siglo XXI. El sociólogo Loïc Wacquant es uno de los principales referentes de una reflexión crítica sobre el actual avance de los sistemas de castigo en las democracias liberales. Su tesis es que la expansión del sistema penal es una característica esencial de la actual fase del neoliberalismo. Ante el retraimiento del estado de bienestar y los sistemas de protección social y el aumento de la incertidumbre y la inseguridad, los Estados prometen la paz y el orden a través del endurecimiento de los sistemas de castigo, sistemas que, a su vez, se están dirigiendo contra las poblaciones más pobres y más vulnerables. Cuando no se señala la desigualdad como problema estructural y no se aspira a atacar sus causas, emergen los discursos políticos que desligan la delincuencia de la pobreza, que señalan como culpables a individuos o grupos de individuos y que prometen duros castigos para los criminales.

En Estados Unidos diversos teóricos y teóricas provenientes de los estudios legales críticos y el antirracismo llevan años poniendo sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre el avance del sistema carcelario. No señalan solo las agendas conservadoras sino también las políticas que en las últimas décadas ha puesto en marcha el neoliberalismo progresista, a menudo en nombre del feminismo y las políticas LGTB. Ni Europa ni el Estado español son una excepción a esta regla. Como dice Ignacio González Sánchez [\[i\]](#) “hoy tenemos más policías y más personas presas que hace cincuenta años, y un Código Penal más duro que el vigente cuando Franco murió”.

En este contexto, el de una generalizada expansión de las políticas penales en las democracias capitalistas, hay que sumar la emergencia de proyectos reaccionarios que ha caracterizado la entrada en el siglo XXI. La llegada de fuerzas de extrema derecha a las democracias de Europa y del continente americano agrava aún más el problema y muestra la urgencia de que los proyectos democráticos salgan de la vía del punitivismo. Por ello, se vuelve radicalmente determinante el tipo de política que los feminismos pongan sobre la mesa. Porque la violencia contra las mujeres es muy a menudo la baza perfecta para defender las políticas penales más duras. Particularmente la violencia sexual es un asunto que el feminismo ha puesto en la arena pública de las democracias actuales y que ha provocado una demanda social de fuertes castigos como respuesta a los delitos que la engloban.

La penalista norteamericana Aya Gruber [\[ii\]](#) argumenta que una parte importante del feminismo estadounidense se ha convertido en colaborador necesario de la política carcelaria, expandiendo el poder de la policía y los fiscales, promocionando el castigo para resolver problemas y desviando los recursos hacia el sistema penal y no hacia las comunidades marginadas. Es evidente que estas recetas políticas son un arma del enemigo y que contribuyen a consolidar un sentido común reaccionario. Basta ver cómo los discursos de líderes del Frente Nacional en Francia o de Vox en España se usan para criminalizar a poblaciones migrantes o defender la pena de muerte.

La política feminista desplegada desde el Estado español siempre ha estado marcada por una fuerte confianza en la vía penal, con legislaciones contra la violencia de género que han

convertido la denuncia judicial casi en el único camino para pedir ayuda por parte de las mujeres. La crisis de 2008, que desencadenó sucesivos recortes presupuestarios en las políticas de igualdad, consolidó el enfoque punitivo. Tras sucesivas reformas que recargaron nuestro Código Penal hasta convertirlo en uno de los más duros de Europa, algunas penas para los delitos de violación han llegado a equipararse a las penas por homicidio. Y, sin embargo, los debates actuales en torno a la violencia sexual demuestran que una gran parte de la ciudadanía siempre está dispuesta a pedir más dureza penal y que ni siquiera las izquierdas parecen querer hacer una pedagogía antipunitiva. El debate público al que ha dado lugar la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley del sólo sí es sí, es prueba evidente de que una vez el punitivismo ha permeado el sentido común, nada activa más la sensación de inseguridad que la idea de delincuentes saliendo de las cárceles. Algo que después las extremas derechas pueden alimentar a su favor.

El feminismo institucional, embarcado también en la vía punitiva, ha contribuido a generar un debate sobre las penas que nos deja vendidos ante las extremas derechas. Los feminismos están hoy ante un importantísimo reto: cómo abordar la violencia y qué discursos construir sobre ella. Qué políticas públicas poner en marcha es una de las cuestiones políticas más sensibles y delicadas a las que nos enfrentamos. En ello nos jugamos la posibilidad de escapar de los marcos de las extremas derechas o el riesgo de caer por entero dentro de ellos y colaborar en el avance de sentidos comunes punitivos y reaccionarios.

Quiero detenerme en dos cuestiones estratégicas que un feminismo no punitivo debe incorporar si pretende abordar la violencia contra las mujeres, cuestiones que continúan estando por completo ausentes de los enfoques dominantes de las políticas públicas y los discursos hegemónicos.

Por un lado, el punitivismo es una rendición. Como ha señalado en numerosas ocasiones la feminista Laura Macaya, requiere de una determinada construcción de la masculinidad y de la feminidad. La primera se presenta como una masculinidad natural, irremediablemente peligrosa y violenta para las mujeres. La naturalización de esa masculinidad depredadora, la asunción de la inevitabilidad de ese peligro, sirve para construir discursos sociales en los que se instruye a las mujeres para que se cuiden, haciéndolas a ellas responsables de ponerse a salvo, por ejemplo, a través de su propia inhibición sexual. La otra cara de la moneda de esa masculinidad irrefrenablemente violenta es una feminidad retraída y vulnerable, absolutamente necesitada de protección y atrapada de modo insuperable en el lugar de la víctima. Esta mirada esencialista y determinista sobre los hombres y sobre las mujeres ha recorrido y recorre las políticas de igualdad, especialmente las políticas contra la violencia de género, y determina el tipo de respuesta que se da a la violencia desde organizaciones e instituciones.

Por ello, una de las estrategias que, frente a los enfoques clásicos, debemos introducir para combatir la violencia desde miradas no punitivas, es el trabajo con hombres y el desarrollo de políticas que se dirijan a contrarrestar el poder de los imperativos de la masculinidad hegemónica. Justamente en la medida en la que el feminismo aborda un verdadero problema, es decir, una estructura de dominación y desigualdad arraigada en lo más profundo de nuestro sistema social y cultural, su única solución no puede ser castigar a individuos particulares.

Si algo ha estado ausente, y sigue estando desaparecido de las políticas institucionales contra la

violencia, es la cuestión de la masculinidad que, lejos de ser un fenómeno natural e inevitable, es una construcción social en la que todos y todas estamos involucrados. Si el patriarcado es una estructura, si antecede a los sujetos individuales y sigue existiendo después de ellos, si va a seguir condicionando nuestro lugar en el mundo, generando mandatos y prohibiciones sobre nuestros comportamientos y nuestros roles, el problema no se soluciona a través de la cárcel y el castigo. “La perpetuación de la violencia masculina a través de la enseñanza de un modelo de relaciones de dominación llega a los niños a través de mujeres y hombres” dice bell hooks.^[iii]

De hecho, la atención feminista hacia la cuestión de la masculinidad debería llevarnos a una comprensión más compleja y más amplia de lo que podemos entender como violencias de género. Rita Segato propone que una gran parte de las expresiones de violencia masculina dirigida a perpetuar la masculinidad se dirige también contra los hombres. Esa cultura de la violencia en la que los hombres son instruidos desde la infancia los coloca no sólo como agresores sino también como víctimas y, por lo tanto, como objetos de un malestar que debe ser nombrado también por el feminismo. La imposibilidad de gestionar la violencia masculina por parte de los propios hombres, la falta de herramientas para enfrentarla, la falta de atención social y respuesta colectiva frente a ella, es inseparable del hecho de que una gran parte de la frustración, la rabia y la ira masculina se descargue contra las mujeres.

El feminismo debe, por tanto, señalar el carácter jerárquico del patriarcado entre los varones, sus relaciones de maltrato, su cultura de la humillación y sus formas de violencia y debe enseñar a los propios hombres a poder escapar de esa violencia no solo para no ejercerla contra las mujeres, sino para que, desde el primer momento, puedan no aceptarla y no padecerla como hombres. Esto abre una tarea urgente que nos involucra como sociedad a muchos niveles, desde los discursos feministas y las intervenciones educativas hasta los recursos institucionales que deben poner en marcha las leyes. Que los hombres pueden cambiar o, incluso, que los hombres pueden tener buenos motivos para desear cambiar es la premisa en la que se asienta todo feminismo que aspira a la transformación social y no al castigo.

Por otro lado, el punitivismo representa una renuncia. La consideración de los hombres como irreparables agresores innatos trae consigo, como correlato necesario, la concepción de las mujeres como víctimas estancadas en la posición de quien recibe la acción y el daño de otros sin margen alguno de acción propia. El punitivismo atrapa a las mujeres en la pasividad y pone en marcha discursos, prácticas y leyes paternalistas que, en nombre de la protección, acaba negando cualquier agencia a las propias víctimas. Así, muy a menudo, nuestras instituciones asumen la tarea de tutelar a todas las víctimas como menores de edad trasladando a la sociedad y a ellas mismas la idea de que son incapaces de tener alguna responsabilidad sobre su propia recuperación. En el marco de estas perspectivas las leyes españolas contra la violencia han imposibilitado algunas de las principales estrategias de una justicia restaurativa. La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género incluyó la prohibición explícita de la mediación como estrategia alternativa o complementaria al proceso penal. Casi dos décadas después, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, ha vuelto a negar esta vía como opción. Lo que se ha considerado una herramienta de justicia válida para conflictos bélicos o casos de terrorismo, que una víctima se siente a dialogar con su agresor, se prohíbe directamente para las mujeres. El estado sabe lo que conviene a las víctimas y asume su protección y tutela incluso contra la posibilidad de que ellas pudieran decir qué necesitan para su recuperación.

Es esto lo que acaba abocando a muchas mujeres a emprender un procedimiento judicial que en algunos casos preferirían no emprender y cuyos efectos pueden ser revictimizadores. La vía judicial debe existir, pero no podemos empujar obligatoriamente a las víctimas hacia ese único camino ni debemos hacer de la denuncia la condición o el requisito principal para poder ser escuchadas por las instituciones (para acceder a ayudas, servicios de atención o incluso recursos de acogida). Para salir de la vía punitiva, es decir, para pensar la justicia de cara a la recuperación y no de cara al castigo, es también necesario poner en marcha estrategias feministas complementarias en las que las propias mujeres puedan saber lo que necesitan y sean escuchadas. No convertir el acompañamiento en tutelaje infantilizador ha de ser una de las apuestas feministas.

La austeridad de la segunda década del presente siglo ha dejado sin desplegar las políticas más allá de lo penal, las que más dependen de la inversión por parte de los gobiernos y las instituciones. Necesitamos políticas educativas y culturales para transformar los sentidos comunes compartidos. Y necesitamos políticas redistributivas, que pongan en manos de las mujeres más recursos y herramientas, que las hagan más autónomas y más capaces de decidir, más armadas y menos expuestas frente a la precariedad y las violencias. Las políticas más allá de lo penal no son las más rentables electoralmente y tampoco son las más baratas, pero son las más eficaces.

El principal problema que los feminismos críticos tienen con las soluciones punitivas es este profundo desacuerdo con el análisis del problema del que se deducen esas recetas. Al patriarcado jamás se le juzgará en el banquillo de un tribunal y, por lo tanto, cualquier política centrada en lo penal dejará intacto el problema de fondo. Para abordarlo es necesario escapar de algunas de las principales trampas en las que las políticas de las últimas décadas nos han encerrado. Hay que cambiar la mirada. Se trata de pasar de una política de la derrota —una que, además, servirá a las extremas derechas para afianzar sus discursos—, a una política que esté

convencida de que hombres y mujeres deseamos cambiar. Es por eso por lo que podríamos creer que, juntos, podemos poner en marcha otra sociedad más justa que la que tenemos.

Notas

[i] Neoliberalismo y castigo, Bellaterra, 2021.

[ii] Gruber, Aya The Feminist War on Crime.The Unexpected Role of Women's Liberation in Mass Incarceration, University of California Press, 2020.

[iii] hooks, bell El deseo de cambiar, Bellaterra, 2021.

[Fuente: Revista [*Per la Pau*](#), n.º 41, mayo de 2023]

Jeremy Corbyn

Unidad para poner fin a la Nakba

El 15 de mayo, el pueblo palestino conmemora el 75 aniversario de la Nakba, la violenta expulsión de sus casas y su territorio a la que fueron sometidos por las fuerzas israelíes. 'Nakba' significa catástrofe. ¿Cómo llamar si no a la limpieza étnica de dos tercios de la población palestina? En palabras de Edward Said, "los sucesivos desplazamientos, aparentemente interminables, destrozaron la vida [de la gente], abatieron su ánimo y quebrantaron su tranquilidad para siempre".

No obstante, la Nakba no terminó en 1948. La persecución de este pueblo lleva produciéndose tres cuartos de siglo, desde que el primer ministro de Israel David Ben Gurion declarara, en referencia a algunos pueblos palestinos: "Hay que borrarlos del mapa". En la actualidad, este sentimiento está presente en la descripción que Benjamin Netanyahu hizo de los palestinos como "bestias salvajes" y en las declaraciones del ministro israelí de Finanzas Bezalel Smotrich cuando aludió a la necesidad de "eliminar" la localidad de Huwara.

Los acontecimientos del año pasado volvieron a visibilizar la grave situación del pueblo palestino y la crueldad del régimen israelí que controla su vida. Según Naciones Unidas, 2022 fue el año más mortífero para la población de los territorios ocupados de Cisjordania. En mayo, la prestigiosa periodista palestino-estadounidense [Shireen Abu Akleh recibió un disparo](#) mientras cubría una incursión de las fuerzas de defensa israelíes en un campo de refugiados de Cisjordania y su cortejo fúnebre fue atacado en Jerusalén. En agosto, una campaña de bombardeos israelíes asesinó en Gaza a 50 personas, incluidos niños. La toma de posesión de Benjamin Netanyahu de octubre significó la vuelta al poder de uno de los gobiernos más conservadores de la historia de Israel y los asentamientos ilegales se expandieron. Este Gobierno tiene entre sus filas, como ministro de Seguridad Nacional, al político de extrema derecha Itamar Ben-Gvir, quien ha llegado a solicitar la deportación de los palestinos que sean "desleales a Israel". Este sentimiento no se circunscribe a un único ministerio. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, manifestó que los palestinos de Israel "están aquí por error" porque la Nakba no terminó lo que empezó.

El mes pasado, las fuerzas israelíes volvieron a atacar a fieles palestinos en la mezquita de Al-Aqsa. Esta flagrante violación de los derechos humanos, en la que se repiten las atrocidades de 2021, fue rebajada por la prensa británica a meros "enfrentamientos". Nada más lejos de la realidad. Paulo Freire escribió: "La violencia empieza en el momento mismo en el que se establece una relación de opresión". "La violencia la inician quienes oprimen, explotan y no reconocen a otras personas como tal, no quienes son objeto de opresión, explotación y falta de reconocimiento". Las palabras de Paulo Freire nos recuerdan que, al igual que en 1948, las fuerzas israelíes están negando al pueblo palestino su dignidad y sus derechos.

Ante esta continua represión, el pueblo y las organizaciones palestinas se han apoyado mutuamente y han presionado para conseguir justicia. Su perseverancia en la búsqueda de dignidad y libertad inspira a muchas personas a lo largo y ancho del mundo. Yo, personalmente, siento plena admiración por los valientes activistas que en cada país, incluido Israel, se han

manifestado en defensa de los derechos y la liberación del pueblo palestino.

En diciembre, cuando todas las miradas estaban puestas en el Mundial de la FIFA, Palestina fue protagonista sin participar en el torneo. Los numerosos gestos de solidaridad, como el despliegue de la bandera Palestina que hizo la selección marroquí tras derrotar a España o la pancarta de "Free Palestine", levantada por la afición tunecina, fueron un poderoso recordatorio del respaldo global a la causa palestina. En Irlanda, la segunda equipación de 2023 del equipo líder de la liga, el Bohemian FC, ha sido diseñada en apoyo al pueblo palestino y permitirá recoger fondos para la infancia de los territorios ocupados de Cisjordania.

En febrero de este año, la alcaldesa de Barcelona puso fin al hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv, calificando la situación de apartheid. Esta muestra de solidaridad de Barcelona con el pueblo palestino se produjo después de una larga campaña en la que miles de catalanes de a pie pedían que el ayuntamiento de la ciudad condal fuese el primero a escala mundial en suspender relaciones con el Estado de Israel.

En el Reino Unido existen campañas de acción directa, como Palestinian Action, centradas en la industria armamentística que apoya la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania. El Reino Unido sigue siendo el cuarto mayor proveedor de armas a Israel y, entre 2016 y 2020, vendió armamento al ejército israelí valorado en más de 387 millones de libras. La principal empresa de armas israelí, Elbit Systems, tiene diez plantas de producción en el Reino Unido y suministra hasta el 85 % de las armas terrestres que adquiere el ejército israelí.

Tras una campaña de Palestine Action que duró 18 meses, Elbit Systems anunció a comienzos de 2022 que cerraría permanentemente la planta de Oldham. A finales de diciembre se reveló que, tras la campaña de Palestine Action, Elbit Systems llevaba camino de perder dos contratos multimillonarios con el Ministerio de Defensa.

La ocupación israelí, considerada un apartheid por numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, recibe apoyo a múltiples niveles. Para acabar con esta situación y garantizar la justicia a la población palestina será necesaria una coalición de solidaridad que aborde cada uno de los niveles de ese sistema de apoyo. Debemos perseguir a las empresas que financian la opresión palestina al igual que perseguimos a los Gobiernos que la legitiman. Así como debemos apoyar a los movimientos palestinos por la paz y la justicia, pedimos al Reino Unido que reconozca incondicionalmente al Estado de Palestina, como hizo Naciones Unidas.

En esta época de crisis, es imprescindible luchar por la justicia y la libertad. No obstante, como Nelson Mandela señaló, "sabemos muy bien que la libertad no está completa sin la libertad del pueblo palestino".

[Fuente: [Ctxf](#)]

¡Siempre adelante!

Escritos y cartas 1866-1897 (intr. de Alia Trabucco Terán; trad. de Ángel Narváez León)

Traficantes de Sueños Madrid 2022 531

Me equivoqué

Josep Torrell

Inés Rodríguez y Mikel Iriarte —amigos míos de los buenos tiempos (y bastante rojillos)— me advirtieron que me equivoqué en una reseña aparecida en *mientrastanto.e* (y me enviaron el libro a la mañana siguiente).

Era el libro de Tussy o Eleanor Marx (1855-1897). Sus allegados cuentan que Marx en los últimos años tuvo sólo dos aficiones: su afecto por Tussy y la terminación de *El Capital*. Al día siguiente del entierro de Marx, en 1885, Eleanor implicó a todos los revolucionarios de Europa en la edición de los escritos de su padre.

En julio de 1871, a los 16 años, fue a Francia en un viaje familiar y vivió en el París de la Comuna. Cuando estuvo lista la *Historia de la Comuna de París de 1871* de P.-O. Lissagaray, lo corrigió, página por página, con Lissagaray y Marx. Fue la correctora de Engels (de *El origen de la familia...*, por ejemplo). Como traductora se especializó en Flaubert, Ibsen, Lissagaray y dos libros de Marx. En 1883, con 27 años, junto a Engels, se encargó de la edición inglesa de *Das Kapital* (que se publicó en 1887).

En 1884, a los 29 años, se fue a vivir con Edward Aveling, un conocido actor, jugador y estafador, motivo de sufrimiento para Eleanor.

Como militante política, en 1884 se unió a la Federación Social Demócrata y fue elegida para entrar en su ejecutiva, empleando parte de su tiempo en dar conferencias sobre [socialismo](#). En 1890, a los 35 años, formó parte de la dirección de un sector de trabajadores que se apartó del partido y fundó el Partido Socialista Laborista.

Antes había sido militante sindical. En 1889, cuando ella tenía 34 años, fue fundado el Sindicato Nacional del Gas y Trabajadores Generales (con mil millones de afiliados). En 16 de octubre se eligió a Eleanor para trabajar en el exterior, lo que le permitió viajar a muchos congresos. En 1896 acudió al congreso de los sindicatos internacionales y tuvo contacto con Clara Zetkin y Rosa Luxemburg, que estaban en el mismo bando.

Su labor consistía en reuniones, mítines, redacción de panfletos, etc. En 1897, Eleanor habló en representación del sindicato y del partido en más de ochenta mítines por todo el país con el consiguiente cansancio.

En 1898, a los 43 años, fue advertida por Aveling de que él ya estaba con otra persona y que *Eleanor tenía que abandonar el piso en el que vivía* (que era de él). Fue un golpe que quebró su moral. El 31 de marzo Eleanor se suicidó con un veneno (ácido prúsico).

¡Siempre adelante! Escritos y cartas 1866-1897 contiene las *Cartas 1866-1898; Literatura y socialismo*

, donde están los escritos sobre Shakespeare e Ibsen; *El espectro del socialismo* (?) que recoge los escritos sobre Rusia, un mitin y prólogos acerca Lissagaray y Plejánov, y dos escritos de Marx; *La cuestión de la mujer*, con nueve artículos; y *Sobre el suicidio de Eleanor Marx*, en el que se destaca su entierro y el discurso de Robert Bannon, que desprende un desgarrador afecto y la amargura por la muerte de la compañera.

Además, hay un artículo de Eleanor, «Reminiscencias», que es excelente. Un anuario obrero austríaco le pidió algo sobre su padre. Eleanor tuvo una imagen genial: Marx y los juguetes, los pastelillos, las lecturas de la infancia, etcétera. Es decir: el *otro* Marx descrito por su propia hija.

21 5 2023

Feminismos. Retos y teorías

(Este libro cuenta con una licencia Creative Commons)

Ediciones dyskolo 2023 510

Ana Almirón Mengíbar

Sugerente e interesante libro de Antonio Antón Morón, sociólogo, docente, investigador y escritor heterodoxo, *compañero de viaje* durante décadas de no pocas y variadas experiencias de análisis crítico, participación y acción por un cambio progresista. Décadas en las que fueron desarrollándose feminismos que emergieron con voluntad social transformadora para cuestionar viejas normas y estructuras profundamente injustas. El último lustro de esta trayectoria es lo que analiza este libro, que plantea nuevos retos y teorías.

Antonio Antón hace un diagnóstico basado en la buena salud de la que goza el feminismo de nuestro país en estos últimos años, en los que ha ido aumentando su influencia como movimiento social con un fuerte componente cultural, entre mujeres (dos tercios) y hombres también (un tercio) y de modo particular entre las generaciones más jóvenes. Se agradece especialmente la precisión analítica de los datos estadísticos al respecto, especificando además los diferentes niveles de organización, identificación y adhesión a sus ideas y reivindicaciones. En la revisión realizada, el autor identifica una reactivación feminista importante desde 2018, con una importante capacidad movilizadora para lograr avances sustantivos en igualdad, fundamentalmente en torno a tres ejes: la lucha contra la precariedad y/o subsidiaridad laboral en los sectores más feminizados, extrema en el caso de migrantes, así como contra la sobrecarga de los cuidados agravada por las deficiencias de los servicios públicos o la carencia de suministros básicos; la lucha contra la violencia machista sin renunciar a los avances logrados en libertades y derechos y, más específicamente, a favor de la libertad sexual, de sexo y género, concebidos de forma no biológica, determinista, ni binaria. Partiendo de la pluralidad feminista existente, Antón nos muestra que el lado que más ha avanzado es el de base más crítica, transformadora e inclusiva, mientras que el feminismo institucionalmente más hegemónico, socioliberal, retórico y esencialista, prohibicionista y punitivista, ha resultado más denostado y aislado, política, académica y socialmente.

Antonio Antón capta y detalla el alcance, la orientación y el potencial reivindicativo de esta nueva *ola* feminista, en un contexto de evidentes límites en la gestión institucional y judicial, con deficientes avances reales en igualdad, recorte de derechos y amenaza de involución conservadora. Al tiempo que se adentra en algunos de los actuales debates feministas desde un enfoque que define como crítico, realista, relacional, multidimensional y sociohistórico, para superar los predominantes desde los años sesenta/setenta (el estructuralismo y el postestructuralismo o, si se quiere, el marxismo economicista y el populismo culturalista), se detiene cuidadosamente en la crítica a Nancy Fraser y Judith Butler, a quienes reconoce sus importantes aportaciones y actitud renovadora. Desde dicho enfoque analiza si es o no pertinente seguir hablando hoy de *transfeminismo* o *postfeminismo* y la positiva adopción de una perspectiva feminista *interseccional* (de género, grupo social, raza o etnia, edad...), y reflexiona asimismo sobre el sujeto feminista.

Antón apuesta por una identidad feminista —que no femenina— como reconocimiento propio e

identificación colectiva, anclada en una subordinación que se considera injusta y en una experiencia relacional igualitaria y emancipadora, en la que las mujeres feministas conformarían el núcleo principal del feminismo, pero incluyendo la participación masculina solidaria. No serían tiempos, por tanto, de posfeminismo —en el sentido de considerar secundario o superado el feminismo— sino de un amplio feminismo crítico, popular y transformador frente a la pasividad o la neutralidad en este conflicto liberador y por la igualdad, con una perspectiva integradora y multidimensional que haga converger a esta corriente con los demás procesos emancipatorios.

En palabras del propio autor: «El feminismo, con sus distintos niveles de identificación y pertenencia colectiva y su pluralidad de ideas y prioridades, es un movimiento social, una corriente cultural, un actor fundamental que, en una acepción débil, se puede considerar un sujeto sociopolítico en formación, inserto en una renovada corriente popular más amplia que califico de nuevo progresismo de izquierdas, con fuertes componentes ecologistas y feministas».

[N. d. R.: puede verse otra reseña del mismo libro en: [Nueva Tribuna](#)]

23 5 2023

El Viejo Topo

Manifiesto: vetar o censurar no son actitudes de izquierdas

Los responsables de la Feria de libros Litoral han vetado en el encuentro de este año la presencia de la editorial marxista y antifascista de El Viejo Topo, una editorial que lo largo de casi 50 años ha sido esencial para la cultura y la defensa de las clases trabajadoras de Cataluña y del conjunto de España.

La (sin)razón dada por la coordinadora de la feria, Laura Arau, es la publicación por la editorial de un determinado autor que no es del gusto de Litoral 2023. Sin embargo, El Viejo Topo hace años que lo edita sin que hasta ahora se haya impedido su participación en la feria. Más aún: otra editorial, que también participa en la Feria, ha editado al mismo autor sin que ello haya conllevado en su caso veto alguno.

La decisión de Litoral 2023 constituye una censura, inquisitorial, no solo contra El Viejo Topo sino también contra quienes seguimos apoyando y aprendiendo de esta editorial imprescindible y contra los autores que publican en ella, que se cuentan por decenas, sino por alguna centena.

Sean cuales sean, insistimos, las sinrazones de fondo (todo apunta a otras sinrazones complementarias), nada que tenga que ver con la censura y el veto puede ser defendido desde posiciones democráticas de izquierda y más aún si se habla de radicalidad, esto es, de ir al fondo de las situaciones y de las cosas.

Por todo ello, los abajo firmantes solicitamos la inmediata rectificación pública y concreta de los responsables de Litoral 2023. En caso de no producirse, sugerimos que este acto de censura sea valorado y rechazado por las editoriales que participan en la Feria, así como por el gobierno municipal de Barcelona, que apoya el encuentro con financiación pública e instalaciones.

La ciudadanía debe mostrar su posición crítica (izquierda y censura son términos contradictorios) de manera también concreta. Un encuentro del libro alternativo no puede quedar manchado por una decisión inaceptable, en absoluto de izquierdas, de sus organizadores.

¡Todos debemos tener derecho a la voz y a la palabra!

[Para nuevas adhesiones: enviar nombre y dos apellidos a uno de los siguientes correos: joaquinmiras@gmail.com, martinramos.chest@gmail.com, salarnal@gmail.com]

<https://www.elviejotopo.com/topoexpress/manifiesto/>

Ecologistas en Acción

Cambio climático o el extractivismo, dos causas de la migración forzada en el mundo

Ecologistas en Acción ha publicado el informe [“Migraciones forzadas por motivos ambientales”](#) donde se documenta que, en los últimos años, han aumentado de manera exponencial las personas que se han visto obligadas a migrar por las transformaciones ambientales que han degradado sus medios de vida.

El cambio climático y los desastres naturales, el expolio de recursos, los conflictos armados y la contaminación ambiental son algunas de las causas que se encuentran detrás de los desplazamientos forzados y migraciones ambientales.

La migración forzada inducida por elementos que mantienen relación con el cambio climático y la degradación del ambiente siempre ha existido en la historia de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años estos desplazamientos están tomando protagonismo en los medios así como en los debates sociales y políticos.

El cambio climático, el expolio de recursos, la contaminación ambiental, los conflictos armados se configuran como procesos determinantes en los desplazamientos humanos y se encuentran estrechamente enlazados entre ellos, haciendo, a veces, complicado distinguir una de otra causa en un proceso migratorio.

En el informe “Migraciones forzadas por motivos ambientales. Un enfoque sociopolítico” se explora la relación entre las características del actual sistema social, político y económico, las transformaciones de los ecosistemas y las migraciones.

En la primera parte del estudio se aborda la complejidad y las múltiples formas que adquieren los conceptos de migración, refugio y desplazamientos forzados, así como la dificultad de definir las causas que generan estos procesos migratorios, reflexionando además en un aspecto a veces invisibilizado: la inmovilidad involuntaria.

En la segunda parte se realiza un análisis de las principales causas sistémicas que llevan a los desplazamientos forzados, desde la descripción de las características del actual sistema capitalista-extractivista hasta el cambio climático y los desastres naturales, el expolio de recursos naturales, los conflictos armados o la contaminación ambiental.

Asimismo, el género y la clase social son elementos que atraviesan de forma transversal la movilidad humana, determinando dificultades y desigualdades a la hora de migrar, por lo que el informe dedica un capítulo a este tema. Un capítulo que termina con la entrevista a dos personas —una colombiana y otra senegalesa— que han vivido una migración forzada por causas que se relatan en el estudio.

Francesca Ricciardi, portavoz de Ecologistas en Acción y coautora del informe, ha declarado: “Sin afán de querer reducir la complejidad del fenómeno migratorio a una definición cerrada que no

permita el entendimiento de las migraciones como un entramado de múltiples causas, nos aproximamos a entender la migración forzada por motivos socio ambientales como la expulsión de las personas de sus territorios debido a factores sociales, políticos, económicos y culturales relacionados con la degradación del ambiente”.

El informe puede descargarse [aquí](#).

[Fuente: [Ecologistas en Acción](#)]

Ana Martins Marques

Colección

Coleccionamos objetos
pero no el espacio
entre los objetos

fotos
pero no el tiempo
entre las fotos

sellos
pero no
viajes

lepidópteros
pero no
su vuelo

tazas
pero no
la memoria de la sed

discos
pero nunca
el pequeño intervalo de silencio
entre dos canciones

De: *O livro das semelhanças* (2015)

Traducción de Fernando Vérkell

[Ana Martins Marques es una poeta, redactora y correctora. Recibió el Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional en 2012 y el Prémio da Associação Paulista dos Críticos de Arte en 2015.]